

● **Nuevo ciclo político: el encharcamiento.** Celia Amorós, J. G. Pulido, P. Ibarra, Ladislao Martínez, J. Pastor, E. Tello ● **Balance y perspectivas del neoliberalismo.** Perry

Anderson ● **"Cada vez que Israel firma un acuerdo de paz, hay que ponerse a cubierto".**

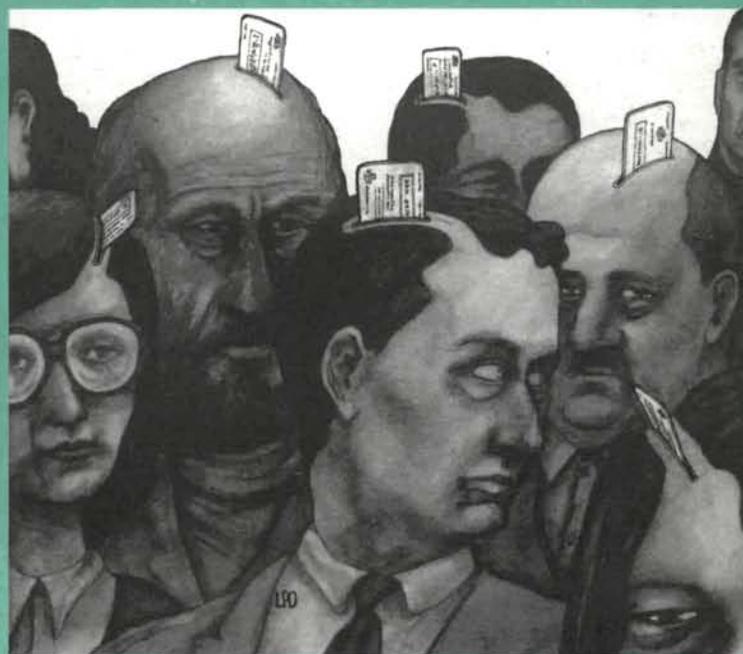
Michel Warshawski

● **México. Proyectos zapatistas.**

Edgar Sánchez y Ulises Martínez Flores ● **Argentina. A 20 años del golpe.**

Daniel Pereyra ● **Alemania. Sobre el pacto por el empleo.** Manuel Kellner; *Il Manifesto*

entrevista a Claus Offe ● **Inmigración y refugio en la Unión Europea y en el Estado español.** Antonio Gómez Movellán





Número 26 / mayo 1996 / 800 pesetas

agenda

Notas sobre la actualidad política en el Estado español. *José Iriarte "Bikila", José Ramón Garai y Jesús Uzkudun, Iñaki Olano, Coordinadora de Itoiz, José María Ripalda* **7**

el desorden

Israel

"Cada vez que Israel firma un acuerdo de paz, hay que ponerse a cubierto". *Entrevista de Nora Venitia a Michel Warshawski* **27**

Italia

Dificultades para los sindicatos. *Franco Turigliatto* **31**

México

El Ejército Zapatista convoca a la formación de una nueva fuerza política. *Edgard Sánchez* **39**

Primer Encuentro Americano contra el Neoliberalismo. *Ulises Martínez* **44**

Argentina

A 20 años del golpe. *Daniel Pereyra* **49**

Alemania

"Yo no veo progreso". *Entrevista de Sandro Orlando a Claus Offe* **59**

Acuerdos de Schengen

Inmigración y refugio en la Unión Europea y en el Estado español. *Antonio Gómez Movellán* **67**

plural

El encharcamiento

Don José María Aznar, teórico de la feminidad normativa. *Celia Amorós* **77**

Andalucía: los límites de Izquierda Unida. *J. González Pulido* **81**

Desde el ecologismo. *Ladislao Martínez* **86**

Las calabazas del 3 de marzo. *Enric Tello* **91**

En Euskadi. *Pedro Ibarra* **96**

Hacia un pacto estable de las derechas. *Jaime Pastor* **100**

Neoliberalismo

Balance y perspectivas desde la izquierda. *Perry Anderson* **107**

cartas

Correspondencia con lectores y lectoras. **121**

Propuesta gráfica de LPO

Consejo Editorial:

Jesús Albarraçin
Enrique Benegas
G. Buster
José Ramón Castaños
Montserrat Cervera
Javier González Pulido
Petxo Idoyaga
José Iriarte "Bikila"
Lourdes Larripa
Miren Llona
Juana López
Gloria Marín
Cristina Monje
Justa Montero
Pedro Montes
Alberto Nadal
Joaquín Nieto
Iñaki Olano
Carlos S. Olmo Bau
Alberte Pagán
Jaime Pastor
Oriol Quart
Daniel Raventós
Miguel Romero
Flora Sáez
Iñaki Uribarri
Begoña Zabala

Diseño:

Jérôme Oudin &
Susanna Shannon

Maqueta:

Escala 7

**Redacción, administración
y suscripciones:**

Apartado de Correos 50.522
28080 - Madrid
c/ Embajadores, 24 - 1ª izda.
28012 - Madrid
Tel.: (91) 530 75 38
Fax: (91) 527 96 52
Correo electrónico: Viensur
@nodo50.gn.apc.org

Imprime:

J. P. Arts Gràfiques

DL: B-7852-92
ISSN: 1133-5637

Precio:

800 pesetas (IVA incluido)

Han colaborado en este número:

Celia Amorós

Catedrática de Historia de la Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.

Perry Anderson

Fundador y miembro del equipo editorial de la *New Left Review*.

Antonio Gómez Movellán

Licenciado en Historia.

Pedro Ibarra

Profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad del País Vasco.

Mannuel Kellner

Militante del VSP alemán. Redactor de *Inprecor*.

LPO

Ilustrador.

Ladislao Martínez

Químico. Miembro de AEDENAT y afiliado a Izquierda Unida.

Ulises Martínez Flores

Fue el responsable de *Inprecor para América Latina*. Se ha incorporado al proyecto del Frente Zapatista de Liberación Nacional

Claus Offe

Catedrático de Sociología y Politología de la Universidad de Bielefeld.

Daniel Pereyra

Autor del libro *Del Moncada a Chiapas*, publicado en Ediciones La Catarata

Edgar Sánchez

Dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores.

Enric Tello

Forma parte del equipo editorial de *Mientras Tanto*.

Franco Turigliatto

Militante del Partido de la Refundación Comunista. Redactor de *Inprecor*.

Michel Warshawski

Redactor de la revista de la izquierda antisionista *News from within* y de *Inprecor*.

En los análisis de las elecciones generales se utilizó mucho la idea de “estancamiento” para definir los resultados de Izquierda Unida. Sólo hemos tenido que cambiar algunas letras para encontrar la palabra que caracteriza, en nuestra opinión, el nuevo ciclo político: “encharcamiento”.

Efectivamente, todos los movimientos que se aprecian parecen suceder en una charca: un lugar poco saludable, condenado a consumirse, cuyo futuro depende de lo que suceda en el exterior.

Se respira un ambiente malsano: en esa derecha española que, como nos escribe un amigo, a la vista de los apellidos de muchos nuevos cargos, “se renueva por vía patrilínea directa”; en el “nacionalismo de transferencias” que practican CiU y el PNV; en la escasísima reacción crítica en Catalunya y en Euskadi hacia los pactos con el PP; en la momificación del felipismo, sin que aparezca un solo signo de renovación política y moral en el PSOE; en la curiosidad y benevolencia diletante con que en algunos círculos del antifelipismo se observan los primeros movimientos del PP (“pues oye, peor no nos irá”, “atención, mengaquito es un profesional muy competente, un tipo culto; yo lo conocí en la mili”...); en la apatía de una sociedad, en la que no se palpa el pulso necesario para hacer frente a lo que nos espera.

Pedimos a nuestros colaboradores y colaboradoras de *Plural* análisis de los resultados electorales y las perspectivas políticas a partir de ellos. De hecho, una buena parte de los textos se refieren a Izquierda Unida. Más allá de las vinculaciones militantes, creemos que es natural que sea así: IU sigue siendo, y aún podría decirse que es más que antes, la posibilidad más tangible de encontrar una alternativa política a la charca. Pero esa posibilidad está lejos de realizarse: por eso los artículos tienen un fuerte contenido crítico y algunos entran en propuestas de nuevos rumbos hacia el futuro.

Y pasamos a presentar los artículos de *Plural*: **Celia Amorós** analiza los nuevos tiempos desde un punto de vista feminista, lo que le permite desvelar algunas de las vergüenzas que se ocultan bajo el “centrismo moderno”; plantea también un tema polémico: la necesidad de lo que llama “cultura de pacto” para que “nuestras conquistas no sean muros de arena”. **Javier González Pulido** se ocupa de los resultados electorales de IU en Andalucía, que están teniendo ya una influencia muy

considerable sobre el conjunto de la organización. La política de Rejón fue considerada como la expresión práctica de un cierto *anguitismo*: su fracaso exige una reflexión que se realiza en el artículo, lo que esperamos contribuya a que se haga también en los sectores de IU que comulgaron con dicha orientación. **Ladislao Martínez** introduce una idea que va a aparecer también en otros artículos: el techo electoral que una formación de izquierdas “que merezca tal nombre” tiene, en su opinión a medio plazo: “en los próximos diez años”, en los Estados de Europa Occidental. Nos parece una opinión muy sensata y de la cual pueden extraerse criterios de acción saludables, por acción y por omisión (del *sorpasso*, por poner un ejemplo). **Enric Tello** examina a IU desde diversos puntos de vista y le da un suspenso general. En sus “cinco calabazas” aparecen temas de debate imprescindibles para el futuro de la izquierda: destacamos lo que tiene que ver con el cuestionamiento de la “contradicción principal”, tema suficientemente trascendente y complejo como para que pensemos en dedicarle un futuro *Plural*. También estimulará debate de interés su tratamiento del tema de los “pactos”, en un sentido diferente al que utiliza Celia Amorós. En este terreno coexisten culturas diferentes dentro de la izquierda alternativa, así que bien está que vaya surgiendo el intercambio de ideas. **Pedro Ibarra** se ocupa especialmente de buscarle sentido y contenido al “voto nacionalista” en Euskadi, a partir de considerar que “el nacionalismo vasco transmite hoy una cierta imagen de confusión” (lo cual nos reafirma en nuestra imagen de “encharcamiento”: mas allá del nacionalismo vasco, los “proyectos de sociedad”, incluso en sus propuestas de reformas a corto plazo, carecen de credibilidad y de consistencia). En fin, **Jaime Pastor** concluye su artículo con una reflexión sobre la “reinvención del federalismo” como parte del proyecto político-cultural que debería asumir esa izquierda roji-verde-violeta que seguimos buscando.

Con la ansiedad propia de los tiempos que vivimos, están proliferando desde hace algún tiempo los augurios del declive del neoliberalismo. Pero la experiencia nos ha hecho muy precavidos respecto al desprecio a la fortaleza de los enemigos. El artículo que publicamos de **Perry Anderson**, que hemos tomado de la excelente revista argentina *El Rodaballo*, analiza al neoliberalismo a lo largo de cincuenta años de historia y constituye en nuestra opinión una excelente vacuna respecto a los epitafios apresurados. Nos parece especialmente interesante el balance provisional que realiza Anderson: fracaso económico, pero éxito social, político e ideológico. Es una paradoja interesante que una propuesta global en cuya base se encuentra el primado de la economía respecto a la política y la sociedad, haya conseguido la hegemonía en nuestro mundo gracias precisamente a su

victoria social y política y pese a un considerable fracaso económico. Anderson concluye con unas propuestas de lucha contra el neoliberalismo considerándolo como un contra-ejemplo que, como suele ocurrir cuando se utiliza este arriesgado enfoque analógico, darán mucho que hablar y que discutir.

Abrimos la sección internacional con una nueva colaboración de **Michel Warshawski** sobre los horrores de la operación israelí en el Líbano que, como él mismo dice, nos lleva catorce años atrás. Y con menos esperanzas que entonces, creemos nosotros.

Queremos publicar regularmente información sobre el sindicalismo europeo para tratar de encontrar referencias útiles en el oscuro panorama que tenemos por aquí. El texto de **Franco Turigliatto** está escrito antes de las elecciones y tiene como referencia al gobierno Dini, que ha pasado a ser ministro de Asuntos Exteriores en el actual gobierno de Romano Prodi. Subrayamos el dato de continuidad, aunque publicaremos artículos sobre el significado de la coalición El Olivo en próximos números, máxime teniendo en cuenta que ya se ha oído alguna voz que la toma como modelo de futuro frente al Partido Popular. Qué cruz...

Sólo nos queda espacio ya para un repaso sumario de los artículos restantes. Hemos querido recordar el aborto del pacto por el empleo en Alemania, por lo que pudiera pasar... Acompañamos el artículo de **Mannuel Kellner** con una entrevista con **Claus Offe** que hemos encontrado vía Internet (sobre cuya utilidad para la izquierda alternativa estamos preparando materiales que publicaremos en próximos números).

En México nos acercamos al Encuentro Internacional de julio: **Ulises Martínez** informa de la reunión preparatoria latinoamericana. Por su parte, **Edgard Sánchez** expone la postura de su partido, el PRT, respecto al FZLN: es un punto de vista diferente al de Sergio Rodríguez que publicamos en nuestro número anterior.

Antonio Gómez Movellán ha realizado un amplio estudio de la situación el refugio y el asilo en la Unión Europea y en el Estado español, unos temas en los que cada día hay más razones para la preocupación y la movilización.

Daniel Pereyra ha conseguido encontrar la serenidad necesaria para estudiar un acontecimiento tan doloroso como el golpe militar en Argentina. Así nos ha ayudado a avivar nuestra memoria.

Y en fin, anunciamos los II Encuentros de Viento Sur, en Madrid, los días 19, 20 y 21 de julio próximos. Para más información, las páginas 124 y 125. Que nos encontremos muchos y muchas. Y estemos a gusto.



Juventud y violencia en Euskadi

Joxe Iriarte "Bikila"

Euskadi y juventud más violencia, son ingredientes apropiados para que los medios de comunicación y los llamados expertos en el tema, desarrollen sofisticados análisis a favor de unas opiniones ya preestablecidas. De hecho, por primera vez desde su constitución, los pactos de Ajuria-Enea, Iruña-Pamplona y Madrid han incorporado partes específicas sobre el tema

¿Qué hay de verdad y qué de manipulación o distorsión en todo ello?

En realidad, ni los estudios sociológicos; ni los partes policiales, las crónicas de sucesos, salvo en lo relativo a la violencia política, nos retratan una sociedad vasca especialmente violenta respecto al resto del Estado, y no digamos, las grandes urbes metropolitanas de Europa. Tampoco se dan, por desgracia, aquellas grandes movilizaciones de antaño, con sus confrontaciones en plena calle.

La juventud vasca, en su inmensa mayoría está, imbuida de las ideas y aspiraciones de la mayoría social que, como sabemos, es bastante carca y conservadora en la actualidad.

El sector universitario, antaño inquieto y contestatario, en el presente muestra todos los rasgos de quienes aspiran a ocupar, cueste lo que cueste, un lugar en el ruedo de la competitividad, o sea del mercado. Y, políticamente, mucho nos tememos que el PP sea en estos momentos la opción que más simpatías suscita en este sector.

La propia enseñanza, en cuyo seno la conflictividad por razones políticas (protestas contra la represión policial, o apoyo a la insumisión) es importante, desconoce los brotes de violencia intraescolar de otras latitudes, como por ejemplo Francia.

Y son jóvenes buena parte de los manifestantes de los actos convocados por las organizaciones pacifistas de la órbita del Pacto de Ajuria-Enea, y más concretamente, por los del "lazo azul".

Dentro de la juventud trabajadora, quienes están atrapados en el trabajo precario, o se encuentra en condición de desempleados, funcionan como la mayoría de los que se encuentran en dicha situación allende o aquende de los Pirineos.

Evidentemente, la juventud vasca tiene su especificidad respecto a la de otras

latitudes. Destacaríamos que da una media bastante alta, en la proclamación de determinados valores como la solidaridad, la justicia social, el antimilitarismo, etc, los cuales aparecen bastante resaltados en todas las encuestas de opinión. Resultado de todo ello, es la riqueza y variedad de las redes asociativas en las que participa la juventud vasca: diferentes tipos de voluntariado social, donantes de órganos y de sangre, etc, peleas y reivindicaciones varias. Y por supuesto, hay un sector radical de cierta importancia, que conecta además con movimientos o estados de opinión de importantes sectores sociales. Siendo en varios de ellos, su punta de lanza. Es el peso determinante de lo juvenil en lo radical, lo que caracteriza esta época.

De todo ello, como es lógico, resulta una gran pluralidad o variedad de opciones en lo ideológico, lo político y lo social: derecha e izquierda, nacionalismo vasco y españolismo, alternativos y ecologismos políticos varios. Y cómo no, distintas formas de entender lo que pasa en este país que las mentes policiales denominan Zona Especial Norte (ZEN) y nosotros, simplemente, Euskadi o Euskal Herria.

La juventud radical. Dos son los bloques en los cuales se organiza o identifica el mundo radical vasco; el de la insumisión y/o resistencia no violenta y el del llamado entorno del MLNV. No hay que pensar sin embargo, que entre estos sectores no hay vasos comunicantes en materia de ideas y valores (como los anteriormente mentados) que muchas veces genera desplazamientos y convergencias.

En el primer sector, estarían los distintos movimientos antimilitaristas, con la salvedad de Jarrai y Nafarroa Intsumitua, que también cultivan a su peculiar manera la oposición al ejército; movimientos del tipo O'7, comunidades de cristianas de base y jóvenes agrupados en el entorno de Elkarri (pacifistas que enfocan de forma diferente a los del "lazo azul" la resolución del conflicto armado). En fin, abarcaría al segmento de la juventud que va a la raíz de los problemas, aunque en lo relativo a las formas de lucha adoptan formas más bien blandas, o susceptibles de generar un amplio apoyo en sectores muy diversos: resistencia pacífica, acampadas, huelgas de hambre, plantas y manifestaciones que sólo se desmandan si interviene la policía. Este fenómeno, conforma, lo que en los últimos tiempos de forma un tanto imprecisa se viene a llamar "nuevas radicalidades".

Este conglomerado, si lo comparamos con otros lugares, es bastante importante, y desde el punto de vista de una izquierda alternativa, clave diría yo. Basta recordar, que el número de insumisos existente en Euskadi (dentro del cual hay que incluir a la insumisión, por decir de alguna forma, en clave sobre todo nacionalista radical) es similar, sino mayor, al del resto del Estado español. Y su movimiento, capaz de generar un apoyo social del alcance de los Intsumisioaren Eguna (Día de la Insumisión) celebrados en Oiartzun y Bermeo. En el segundo sector situaríamos a las jóvenes de la órbita del MLNV, cuyas fronteras son a veces bastante difusas, y desde luego, no se limitan a Jarrai, aunque tengan en esta organización su sector más organizado y sin duda ideologizado. Y también, a sectores que en otros lugares se llaman "autónomos" o de estética radical diversa, que encuentran en el "entramado" del MLNV un lugar de lucha y una referencia.

La reiterada identificación de estos grupos con el fascismo, además de interesado no se ajusta a sus parámetros ideológicos ni políticos. La extrema derecha, los skin de corte facha, y el largo etc que compone el mundo "ultra", además de

alardear de una simbología típicamente fascistoide ligada al nacionalismo de Estado segregan unos valores ideológicos y unos comportamientos que les son afines a su ideología: ataques xenófobos, intolerancia con los marginados sociales (aunque ellos sean en alguna media producto de ella) y, según su tendencia, apología del orden, etc. No se conoce un solo acto de este estilo, ligado a Jarrai o a los llamados grupos "Y". Los aspectos más criticables de su comportamiento e ideología son de otro tipo, como veremos a continuación.

Por lo contrario el sector abertzale radical juvenil, tiene bastante que ver con lo que en otros lugares de Europa son variantes izquierdistas, capaces de protagonizar importantes enfrentamientos con el aparato policial, pero que al carecer de un engarce con un movimientos políticos de masas (como en este caso con el MLNV) no atraen sobre sí la atención de los grandes medios, los sociólogos orgánicos (o se quedan en sus archivos del tema), y menos de los partidos políticos parlamentarios.

Hay que recordar además que el variopinto mundo autónomo tuvo su importancia durante la transición, disputando a ETA el espacio armado, y a HB y la izquierda revolucionaria sectores importantes de la juventud. Hoy esa ideología puede haber encontrado conexiones, en el actual rebrote de la lucha callejera, no sabiéndose muy bien hasta qué niveles sirve al MLNV, o se aprovecha de su respaldo MLNV para ir a su aire.

En la entrevista que la revista de HB, *Herria Eginez*, hizo a miembros de esos grupos denominados por la policía como "Y" (y que ellos consideran que es una denominación falsa) ponían un extremado acento en no ser identificados con organización alguna, considerándose grupos organizados a su aire, que se coordinan solo para la pelea callejera y la realización de lo que ellos llaman sabotajes a los intereses económicos y políticos de los Estados francés y español.

La batalla de la calle. El Gobernador de Gipuzkoa, miembro del PSOE y antiguo militante del PCE Juan María Jáuregui, recientemente declaraba a *El País*, "la violencia callejera nos tiene asfixiados". Y sin embargo, no es ésta la época de mayor violencia callejera, comparada con otras donde las huelgas generales con carácter político se sucedían una tras otra, o cuando menos, con cierta periodicidad. La clave que desvela la alarma está en la última declaración del Pacto de Ajuria-Enea donde se caracteriza "la reciente oleada de vandalismo callejero" como, "actividad complementaria por quienes aprueban y estimulan el terrorismo de ETA". Es decir, lo que preocupa al poder y a los partidos políticos, es el "engarce" de la lucha callejera juvenil con la estrategia del MLNV. No tanto su dimensión real, aunque ésta también preocupe.

Para entender qué significa todo ello, hay que remitirse a la caída de Bidart de 1992, cuando la policía desarticula a la dirección política de ETA, echando por tierra sus pretensiones de forzar al gobierno a una negociación, aprovechando las Olimpiadas de Barcelona.

Este acontecimiento llena de zozobra al MLNV, quien además de ver frustradas las esperanzas puestas en dicho año considerado decisivo, comprueba que ETA jamás había sido tan duramente golpeada (quizá desde el 69, cuando cayó prácticamente toda su dirección, entonces en el interior).

Paralelo a estos hechos, el PNV y notablemente la Ertzantza van superando, cada uno desde su función, reticencias históricas, implicándose de lleno en la lucha contra ETA. El PNV, liderando el Pacto de Ajuria-Enea; la Ertzantza asumiendo su papel de

policía integral. Este giro tiene por máximo exponente al Consejero de Interior Juan Mari Atutxa. Sin olvidar el peso y capacidad de iniciativa que cobra el movimiento pacifista (en realidad, "anti-ETA") que encontrará en el lazo azul una forma de exteriorizar el rechazo a ETA, implicando de alguna manera a sus portadores.

Son, en muchos años, los momentos más difíciles para el MLNV. Cabía en ese contexto, que el Gobierno español, ofertase una salida más o menos aceptable para ETA. No lo hizo, y en su ceguera pensó que ETA tenía los días contados, si conseguía utilizar con maestría la puntilla del movimiento pacifista vasco y el estoque policial.

Pero se le reventó entre la manos la bomba de efecto retardado del GAL debilitando su política y el consenso "antiterrorista". Por su parte ETA y el MLNV, a tuestas al principio y con claridad de objetivos posteriormente, cual Ave Fénix resucitaron de las cenizas del descalabro.

Cabía también por parte de ETA orientarse en otra dirección, poniendo el acento en la maniobra política, la apertura hacia otros sectores, etc, pero, reorganizó sus operativos y les dotó de nuevos objetivos sin variar de estrategia. El MLNV cauterizó heridas, y tras unos tímidos intentos aperturistas, se reafirmo en la idea de que si el Estado y las fuerzas políticas que lo sostienen no extienden la mano de la negociación por decisión propia, hay que forzarles como sea, incluso volviendo a usar tácticas que parecían desterradas, como el coche bomba, y la colocación de artefactos en lugares públicos como los supermercados.

También, se pondrán en marcha nuevos frentes: considerando objetivo militar a los políticos quienes, "siendo responsables de la situación no sufren los efectos de la misma". Hoy sabemos que el Rey estuvo en la mira telescópica, Aznar conquistó la gloria sin subir a los cielos, gracias al blindaje de su automóvil, ETA mató en Donostia al socialista histórico Fernando Múgica Herzog, represaliado durante el franquismo y conocido también por sus amistades y conexiones con el cuartel de Intxaurreondo...

Por su parte, en las estructuras civiles del MLNV, se debate la nueva orientación y los cambios a realizar. La relativización de lo electoral; la regulación de las divergencias externas y su expresión pública; el peso que adquieren los sectores provenientes del KAS y notablemente los oriundos de Jarrai, son pasos decisivos en ese sentido.

Pero no todo es readecuación interna. Existe la opinión de que en sectores de la juventud se acumulan muchas razones para el descontento: su situación social, la presión asfixiante de la Ertzantza en determinadas localidades, el rechazo a la mili, el avance del nacionalismo español, sobre todo de mano del PP, y un largo etc, todo ello susceptible de ser orientado hacia una confrontación bastante radical.

La dramática situación de los presos políticos, que parece que están dispuestos a cargar sobre sus espaldas el peso de esta estrategia, siempre y cuando encuentren apoyo activo en el exterior, y no sólo por parte de ETA, da argumentos suplementarios al nuevo enfoque.

Muchos de los "saltos" protagonizados por algunas decenas de jóvenes, pero capaces de cerrar las carreteras mediante la quema autobuses y esperar a que aparezca la Ertzantza, tiene que ver muchas veces con el deseo de llamar la atención sobre el estado de los presos de ETA en tal o cual cárcel, o solidarizarse con una de tantas huelgas de hambre que se ven obligados a emprender para protestar por la extrema dureza del régimen carcelario.

La sistematización de formas de lucha que tienen toda la pinta de ser una especie de "guerrilla callejera"; la sucesión de sabotajes de poca intensidad, incluidas la quema de coches de matrícula francesa, son algunas de las tácticas más usuales. Las manifestaciones terminan siempre con enfrentamientos más o menos preparados, y toma cuerpo el uso sistemático del *molotof*, y en ocasiones de cohetes mediante lanzaderas. Se crea así un espacio de lucha juvenil, con su propio ritual, donde las capuchas y los saltos se convierten en una parte del paisaje festivo-contestatorio de fines de semana y términos de manifestación.

La Ertzantza, por su parte, reprime con dureza, utiliza infiltrados en las manifestaciones y prodiga el uso del video para el rastreo y localización de los implicados. En estos momentos, existe una auténtica campaña para que los jueces sean más duros e incisivos en la penalización de los detenidos en manifestaciones o autores de atentados diversos.

Pero, lógicamente en tanto que se trata de una policía que vive en el seno de la población, los Ertzainas también son localizados y reprimidos (recuérdese la paliza que recibió uno de ellos durante las fiestas de Bilbao), sus coches quemados ante sus domicilios, y en ocasiones por las ventanillas de sus furgonetas entran los *molotof*, como en Rentería, donde un Ertzaina resultó literalmente achicharrado.

El punto más álgido de esta confrontación en el terreno social, fue la campaña "Euskal Herria Askatu", donde Herri Batasuna tomó la decisión de enfrentarse bloque a bloque a las concentraciones del lazo azul que exigían la libertad de Aldaia. Eran concentraciones en principio pacíficas, pero llenas de tensión y en las que en ocasiones se llegaba a las manos. La Ertzantza, en teoría encargada de que los dos bloques estén separados, con frecuencia arremete contra los concentrados de HB (tal como informé en un *VIENTO SUR*, en una de esas cargas, murió Rosa Zarra después de haber recibido un pelletazo de la Ertzantza).

Esta estrategia de confrontación que abarca a todos los frentes, de tensionar al máximo todos los puntos de contacto con el enemigo, prioriza por el momento el aumento de la capacidad de choque y el reclutamiento de nuevos sectores capaces de mantener el pulso.

El resultado es complejo. Por una parte se potencia la disposición al sacrificio por una causa que se considera justa, el compañerismo, la rebeldía contra la opresión, etc, actitudes todas ellas que merecen nuestro respeto y solidaridad, máximo en tiempos como los actuales donde prima el individualismo, la competitividad, etc. Pero al mismo tiempo es la militarización de la política, el aumento del dogmatismo, el hiperactivismo callejero y la consiguiente pérdida de sensibilidad con la población afectada (por ejemplo, la forma de enjuiciar el costo en materia de las víctimas civiles de la lucha armada; la forma en que se desalojan los autobuses de barriada llenos de personas que no tienen otro medio de locomoción); un aumento de la intolerancia, no sólo con los que se consideran adversarios políticos, sino también con los amigos y sectores críticos internos, y por supuesto con las otras corrientes radicales que no comparten esta línea.

Un futuro incierto. En consecuencia, con el bloqueo de toda perspectiva negociadora, y la prolongación del conflicto, se entra en un nuevo ciclo de "acción, represión" y desesperación para las partes que ni pinchan ni cortan pero sufren sus efectos.

No es cuestión de pesimismo, ni de jugar a brujo, si aventuramos el aumento de la confrontación entre diferentes sectores de la población y la aparición de nuevas formas de "de guerra sucia", preñando de negros nubarrones el escenario "del llamado contencioso" Estado Euskadi, que como es sabido, afecta también al interior del propio pueblo vasco.

Y en ese panorama, una buena parte de nuestra juventud adquirirá un mayor protagonismo, sobre todo en lo relativo a la lucha callejera, y no tanto por el número e intensidad de manifestaciones que protagonizan, sino por la importancia que cobran tal y como son proyectadas y dimensionadas: de auténticos actos revolucionarios para los unos y de vandalismo desquiciado para otros.

La juventud siempre ha jugado un papel importante en este tipo de conflictos y en general en cualquier movimiento de rebeldía. Lo que hoy resalta es la relevancia que cobra. A diferencia del pasado, la juventud es cada vez más una minoría frente a una población cada vez más envejecida y, como es lógico, cortada generacionalmente ante quienes ocupan su lugar en la calle; además, la lucha callejera, salvo en los grandes momentos, tiene el sello genuinamente juvenil, mientras en otras épocas su aportación, si bien siempre relevante, se insertaba en una magma social en emulsión. De alguna forma se puede decir que, mucho o poco, bien o mal, o regular, son los jóvenes los que disputan la calle a la policía. Y eso se nota.

El Estado, los sociólogos, lo remarcan porque les interesa proyectar esa imagen de desorden, de vandalismo y conformar en torno a ello una política de orden que criminalice la rebeldía juvenil, incluida la que adopta otras formas de lucha. El MLNV, por su parte, realza y estimula esa representación con loas a su gran aportación, así como con todo tipo de manifestaciones de apoyo.

En el fondo, el asunto es cuestión de estrategia y de proyecto de sociedad. Mi disconformidad con el MLNV en esta cuestión no se sitúa en lo relativo a la aspiración de soberanía nacional y un proyecto de sociedad alternativo al actual, tampoco en lo relativo a las razones para combatir a este Estado (más bien en esos terrenos coincido con ellos), sino en los métodos, en las vías, y lo que ello supone para el propio proyecto, y más concretamente en esta estrategia que busca réditos a corto plazo, que segrega unos valores de resistencia cuestionables en muchos aspectos. El resto viene por añadidura. Mi disconformidad con el poder, y los que se alían con él (aunque disfracen su apoyo en términos de lucha contra la intolerancia y por la democracia) es total, porque son parte y arte en la prolongación de un estado de opresión nacional y social; porque teniendo como tienen la llave de la solución no la quieren usar. Prefieren que continúe la violencia antes que abrir unas vías de negociación política. Y es que al fin y al cabo, no les va tan mal la cosa, si con ello crece el nacionalismo de Estado, el conservadurismo social, las leyes represivas y se refuerza la identificación de la población con las FFAA y las FOP, y el nacionalismo vasco, fraccionado en dos, es arrastrado en su mayor parte a la defensa del sistema.

Sigue la crisis en CC OO: una opinión desde la Izquierda Sindical

Juan Ramón Garai y Jesús Uzkudun

El conflicto interno de CC OO entre "oficiales" y "críticos" que se arrastra desde de celebración del VI Congreso Confederal ha saltado otra vez a los medios de comunicación con sus frutos más truculentos; con su Secretario General recurriendo a la policía, a los cuerpos represivos del Estado, para acabar con un hecho de protesta de los críticos. Por bochornoso que resulte, es evidente que este hecho no define qué es lo que realmente está sucediendo en CC OO.

Lo que está pasando con la guerra que ha declarado la mayoría de la Dirección Confederal, con Gutiérrez a la cabeza, a la corriente crítica se explica por dos aspectos básicos: en primer lugar, no se quiere tolerar la existencia de una corriente importante con una línea sindical crítica que se estima que pueda frenar el giro que CC OO ha decidido dar en este Congreso. En segundo lugar, la historia de CC OO desde su legalización viene confirmando su incapacidad de convivir con corrientes en su seno. Es una asignatura pendiente que, por desgracia, tampoco parece que este sindicato va a ser capaz de aprobar.

A partir del VI Congreso Confederal, se pretende inaugurar una línea más a la derecha. Las tesis sindicales estatales (que se comparten mayoritariamente en Euskadi) hablan de practicar una línea sindical más moderada y destinada a recuperar la Concertación Social. Seguir por el terreno de la confrontación y de las Huelgas Generales, se estima que minoriza a la organización. Por ello quieren pactar con la Patronal y evitar enfrentarse al Gobierno. Corporativizar el sindicato. Construir un sindicato homogéneo, donde la disidencia esté aceptada, pero marginada de las responsabilidades. Estas son algunas de las "ideas fuerza" más importantes del VI Congreso, pero para este giro se necesita mucha unanimidad y la existencia de una corriente crítica que supone la tercera parte del sindicato, es un gran inconveniente.

¿Cómo están reguladas las corrientes en CC OO? Según los Estatutos, en el interior de CC OO pueden existir corrientes sindicales, que durante la fase de debate tendrán plena capacidad de expresión pública y podrán defender internamente sus posiciones en cualquier momento, siempre que sea aprobado por un congreso, ordinario o extraordinario, previa propuesta de la mayoría del Consejo Confederal o de la cuarta parte de todas las Federaciones Estatales, o de las Confederaciones de Nacionalidad y Uniones Regionales.

Por una parte se requiere una representatividad enorme dentro del sindicato. A no ser que la mayoría apueste por apoyar el reconocimiento de una corriente, es difícil conseguirlo. Y por otro lado en relación a los derechos de las corrientes, no se contemplan más que los de dar su opinión, aunque no se indica cómo hacerlo.

Con lo que tenemos, en primer lugar, un prejuicio contra las corrientes obligándolas a que superen unos niveles altísimos de adhesiones, y en segundo lugar, un vacío legal de derechos.

Podría ocurrir que se superara la representatividad exigida por los Estatutos y el Congreso preceptivo otorgara unos derechos a la corriente que resultasen una

verdadera burla, y que descafeinaran su voluntad de funcionar como corriente.

Nosotros, la Izquierda Sindical, sabemos mucho de cómo se trata a las corrientes en CC OO. Nuestra existencia desde 1987 ha tenido momentos de verdadero calvario. Y también períodos de tolerancia. Pero siempre hemos sido una corriente pequeña, en torno al 8%. Donde hemos llegado a ser mayoría (el último caso fue Sanidad en Álava, pero antes ocurrió lo mismo en Químicas) se nos ha hecho la vida imposible, acabando en expulsiones.

Las razones de este comportamiento sindical para con las corrientes seguramente son varias: patrimonialismo, prepotencia de la burocracia, falta de costumbre,... de las propias mayorías oficiales. Se podía pensar que cuando el sindicato dejara de ser "correa de transmisión de un partido" este déficit de vida democrática real se cubriría. Pero el mal está mucho más enraizado.

Y ese mal lo llevan también los dirigentes que hoy lo sufren, siendo parte de la corriente crítica. Es curioso cómo al convivir tantos años en CC OO y siempre con una línea independiente, desde la IS de CC OO hemos visto cumplirse ese trágico refrán de "quien a hierro mata, a hierro muere" en la cabeza de numerosos dirigentes que por unas u otras razones, dejaban de ser parte de la mayoría oficial, casi siempre por la traslación al sindicato de las guerras partidarias que generaban sucesivas escisiones en las diversas ramas del PC. Que conste que no nos alegramos de lo que pasa, sólo constatamos realidades.

En vista de lo anterior nuestra posición es la siguiente: a pesar de lo celosos que somos de nuestra independencia como corriente autónoma y de que no queremos que se nos confunda con la corriente crítica, no podemos mantener una posición neutral, arrojando parecida cantidad de culpa a ambas partes.

Acusamos a Antonio Gutiérrez y a la mayoría de la Dirección Confederal de mantener una actitud inaceptable para con la corriente crítica. Primero, por dejar sin responsabilidades sindicales a siete miembros de la Ejecutiva que representan al 35% de los afiliados y afiliadas, práctica que lamentablemente no es nueva. Luego, por negarles las más mínimas condiciones infraestructurales (despacho, teléfono, ordenador,...) para funcionar sindicalmente. En tercer lugar, por enviar contra ellos a la policía cuando toman una medida de resistencia contra la agresión de que están siendo objeto. Y en cuarto lugar, por levantar infundios sobre las intenciones "ocultas" que persigue la dirección de la corriente crítica (como por ejemplo que no dan por perdido el Congreso, que quieren desestabilizar el Sindicato, que están preparando una escisión...).

Ciertamente que hay cosas que están pasando que no comprendemos en toda su dimensión. Reconocemos no tener una idea precisa de los proyectos que mueven a unos y a otros. Asumimos nuestras limitaciones analíticas, por otro lado difíciles de superar dado el alejamiento en que nos encontramos de los focos de la confrontación. Pero todo eso no cambia nuestra posición absolutamente contraria a lo que está haciendo la mayoría de la Dirección.

Por último, hay entre los dirigentes y afiliados de CC OO quienes cínicamente, porque están atizando la represión contra la corriente crítica, y quienes sinceramente, porque les duele, se apenan por la pérdida de imagen de nuestro sindicato. Nosotros no lo vemos así. Nos parece que, igual que en su día le pudo

ocurrir a UGT, la guerra actual es también una cara de CC OO. Una cara que manifiesta una realidad interna que normalmente se sufre dentro de casa. Y que está bien que en ocasiones se vea de puertas afuera. No nos gusta tener santos en los altares y menos si no se lo merecen.

EGIN/20 de marzo de 1996/Donostia



Las autopistas del agua: hacia una mar de conflictos

Iñaki Olano

Cinco años de sequía, un frustrado Plan Hidrológico, el trasvase Tajo-Segura, Itoiz, y el espectro de Riaño forman parte de los debates sobre el agua que se inmiscuyen cada vez más en los discursos políticos o son objeto de controversias sociales. ¿Pero se corresponde con la realidad esta creciente importancia de los temas hidráulicos o es producto de una realidad virtual cosechada tras un siglo de cultivo del mito del agua?

El mito del agua: fuente de conflictos. La idea de que el agua en el Estado español estaba mal distribuida y sus ríos tenían un mal régimen dio paso a la consideración de que arreglar estos fallos de la naturaleza mediante una política de obras y posibilitar la expansión del regadío era un deber patriótico y una obligación del Estado moderno. Este ideario básico formulado por Joaquín Costa a finales del siglo pasado adquirió rangos de ideología universal en el sector agrícola y fue especialmente puesto en práctica a partir de la década de los 60, especialmente en el quinquenio 1980-85/1.

Así, se equiparó la agricultura de regadío con riqueza (y la de secano con pobreza y latifundio), pasando de puntillas por encima de la realidad de una economía agrícola cada vez más dependiente de los abonos químicos, la ingeniería genética, los caprichos de mercados lejanos y el endeudamiento con los bancos. El mito del agua funciona hasta para los sindicatos que no entienden los cambios que se están produciendo en las estructuras del campo con la aparición de una nueva casta de empresarios agrícolas generada por la ampliación de la superficie de regadío. Para alimentar el mito se inyectan ingentes cantidades de dinero público para la construcción de grandes infraestructuras, que desde el famoso Plan Badajoz suponen también un buen aliciente para las poderosas empresas de la construcción. Si en la península no hemos tenido "Acuatenedores" asentados en la propiedad privada del recurso, los grandes Planes de Obras Hidráulicas han contribuido a financiar con

1/ Ver "Elementos para una teoría de los conflictos territoriales sobre el agua" de Leandro del Moral Ituarte en *Boletín de la AGE*, nº18

dinero público a los *holdings* del cemento y a una casta asociada de ingenieros que han condicionado toda la política hidrológica desde las Confederaciones Hidrográficas. Alrededor de 500 pueblos, junto con cientos de kilómetros de ecosistemas de ribera y fértiles valles, han desaparecido durante estas décadas bajo el peso del mito del agua, sin que la resistencia de los afectados haya mellado lo más mínimo el consenso patriótico que en torno a estas obras existía. Sólo las imágenes de la resistencia de Riaño empezaron a generar dudas más allá del reducto crítico del movimiento ecologista. Habíamos visto ya carreteras sembradas de tomates, agricultores arruinados por precios hundidos por la sobreproducción, protestas de agricultores europeos... y pueblos y ríos sin agua. Pero hizo falta saber que tras la destrucción de Riaño, el embalse no había servido para nada ni para nadie (salvo a las empresas que los construyeron), para que fuese generándose un fuerte rechazo a un Plan Hidrológico que volvía a alimentar el mito con más de lo mismo.

El Plan Hidrológico Nacional. El Anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional que se hizo público en 1992 seguía siendo en la práctica un Plan de Obras con un enfoque de oferta destinado a aumentar la superficie en regadío. A pesar de las referencias teóricas a la necesidad de un Plan de Demanda, lo sustancial del anteproyecto, el destino del grueso de las inversiones previstas, no es otro que las grandes obras de embalses y trasvases (más de 200 embalses para un complejo entramado de trasvases). En su defensa, el ministro de Obras Públicas empezará utilizar un discurso ahora familiar, con la conexión “solidaria” entre la España húmeda y la España seca como eje central. Así, en gran escala, empieza a plantearse el tema de la interconectividad de cuencas, sueño épico de ingenieros, gracias a la cual una red hidrográfica artificial generada por los humanos sustituirá a la caprichosa e irregular red hidrográfica natural compuesta por ríos y acuíferos subterráneos.

La extensión del rechazo al Anteproyecto de Plan Hidrológico obligó al MOPTMA/2 a plantear una táctica de aprobación del mismo Plan de Obras por la vía de los Planes de Cuenca y de hechos consumados que, con Itoiz como ejemplo más sangrante, pretenden cerrar definitivamente el debate sobre la política hidráulica. Cuenca a cuenca, los planes se han ido aprobando, los trámites para la realización de obras y trasvases han seguido su marcha inexorable, incluso cuando las declaraciones de Impacto Ambiental o los propios Tribunales –como en el caso de Itoiz– indicaban la inconveniencia o la ilegalidad de las obras. Mientras, aquellas partes del PHN en las que se avanzaban propuestas más acordes con un uso racional del agua (calidad, caudal ecológico, reutilización de aguas depuradas, reforestación de riberas, etc) siguen sin tener plasmación en forma de presupuestos suficientes, para que pasen más allá de la categoría de proyectos de jardinería ambiental.

Manipulación de la sequía. Hemos sufrido un período seco que ha durado los últimos 5 años. Es algo normal en estas latitudes y como dice el conocido hidrogeólogo Ramón Llamas “esta situación se ha dado –y con mayor severidad– otras muchas veces desde que se tienen datos objetivos de las precipitaciones; es

2/ Ministerio de Obras Públicas Transporte y Medio Ambiente, por el mismo orden de prioridades que las siglas indican.

decir, desde hace algo más de un siglo en España”/3. Lo que resulta novedoso es la utilización que se ha hecho de la sequía para crear opinión favorable a todos los grandes proyectos que desde el MOPTMA se quieren llevar a cabo. Ejemplo de ello resulta que los injustos criterios de distribución del recurso seguidos en algunas ciudades, y que han conllevado el desabastecimiento urbano de Cádiz mantenido durante años, hayan generado el suficiente dramatismo como para amparar el trasvase Guadiaro-Majaceite pintándolo de salida de urgencia, cuando en el mejor de los casos, harán falta varios años para comprobar su utilidad. La sequía ha sido también el argumento impagable con el que poder conjurar todos los males de una agricultura en zozobra por la PAC (Política Agraria Común) y transformar el malestar del campo en rogativas y manifestaciones pidiendo obras hidráulicas milagrosas. Ha habido sequía, pero sus efectos se multiplican por el hábito del derroche propiciado por una política de precios que lo premia (hay que recordar que en buena parte del Estado español se pagan cánones por superficie puesta en regadío y no por agua consumida), por el aumento del consumo en nuevos usos urbanos como los campos de golf o el mantenimiento de las zonas ajardinadas con césped, y por la mala calidad originada por la contaminación de nuestros cauces con vertidos de todo tipo.

Manipulación de la lluvia. Por fin llovió. Fuerte y de forma continuada en algunas de las zonas más afectadas por la sequía. Tras un primer momento en que se insistió en la bondad de los embalses para contener las riadas (a pesar de que algunas inundaciones hayan sido provocadas por desembalses de prevención o para aprovechamiento hidroeléctrico) las Confederaciones Hidrográficas encabezadas por Borrell, e incluso por el propio Felipe González (en plena campaña electoral) han realizado un frenético conteo de los hectómetros cúbicos de agua, que en este período de lluvias se han “desperdiciado” yendo al mar. Para estos próceres, los ríos, por desembocar en la mar, han demostrado una malvada capacidad de derroche que podría haber sido contrarrestada por la bondad de unos embalses que hubiesen almacenado esas aguas vitales para la alimentación del mito. Ignorar las implicaciones que la existencia de ríos que desembocan en el mar tienen en ciclos naturales que afectan a las dinámicas litorales con sus correspondientes efectos sobre las playas, los recursos pesqueros, las zonas húmedas, etc, sólo es posible bajo la influencia de fuertes intereses en la construcción de las infraestructuras hidráulicas, que desactivan hasta el sentido del ridículo de algunos personajes del aparato socialista /4.

La doble acepción del recurso agua. Tanto el mito del agua como la realidad de sus usos por los humanos le confieren un carácter de recurso natural productivo. El reconocimiento de la existencia de una cantidad limitada a lo largo de todo el ciclo del agua obliga –particularmente a las regiones más desfavorecidas por la presencia utilizable del recurso– a una planificación cada vez más rigurosa de sus usos, así como a la realización de obras que garanticen

3/ R. Llamas “Manipulación de la sequía”. *Ecosistemas* nº7

4/ No está de más recordar que el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro e impulsor del Proyecto de Itoiz, Antonio Aragón, está actualmente encarcelado por el cobro de comisiones por la adjudicación del polémico embalse.

una mayor disponibilidad. Pero el actual modelo de desarrollo industrial está poniendo en graves riesgos las reservas disponibles en algunas zonas del planeta, y la Península Ibérica puede ser una de ellas.

La pérdida de bosques ha hecho disminuir la capacidad de escorrentía (las raíces retienen y distribuyen las aguas de lluvia, regulando su flujo por la superficie terrestre), facilitando la erosión y colmatando e inutilizando los embalses; el cambio climático puede originar la pérdida de acuíferos costeros y limitará seriamente la eficacia del regadío al aumentar la capacidad de evaporación; la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por los vertidos industriales y el abuso de abonos químicos y fitosanitarios en la agricultura intensiva ha deteriorado ya la disponibilidad del recurso en buena parte del Estado español, generando también un grave problema en Portugal con quien compartimos los grandes ríos de la cuenca atlántica.

El mantenimiento del carácter productivo del recurso depende de la capacidad de responder a todos estos graves problemas. Sin ello, estaremos matando la gallina de los huevos de oro, poniendo en cuestión la renovabilidad del recurso, y generando una pérdida de productividad en el futuro (o en el presente, como sucede ya en el Levante mediterráneo o en La Mancha).

Pero desde que hemos empezado a atisbar la realidad de la crisis ecológica, no sólo podemos contemplar el agua desde su acepción de recurso productivo: el agua es también patrimonio natural no cuantificable en términos económicos, pero sí en términos vitales para la supervivencia de los ecosistemas naturales. Introducir esta acepción nos lleva a valorar la existencia de los ríos como complejos sistemas de vida y no sólo como ejes de la ordenación territorial de las sociedades humanas. Y por tanto, a valorar los impactos ambientales que produce su conversión en canales, la transformación de sus ciclos de avenidas, o los cambios en las características de las aguas que por ellos circulan. Esta segunda acepción no solo está ausente de la planificación hidrológica española sino que es totalmente incompatible con la filosofía de interconectividad que la caracteriza.

La actual realidad de La Mancha húmeda ejemplifica los efectos de la actual política hidrológica en esta doble vertiente. El regadío en esta región se ha basado en la explotación de acuíferos subterráneos cuyas emergencias más famosas las constituían Las Tablas de Daimiel ⁵ y los Ojos del Guadiana. La sobreexplotación de los acuíferos ha provocado la disminución de la disponibilidad del recurso (en la actualidad se está extrayendo agua desde profundidades de cientos de metros con el consiguiente consumo energético) y su previsible futuro agotamiento con lo que se destruiría la rentabilidad de los regadíos, con los correspondientes costos económicos y sociales. La existencia de una derivación del trasvase Tajo-Segura podría paliar en parte esta previsible situación de crisis, pero dependería de la disponibilidad de excedentes en la cuenca del Tajo y de un reparto de alto potencial conflictivo socio-político entre las potenciales zonas receptoras.

Pero la sobreexplotación del recurso también ha destruido los ecosistemas de la Mancha húmeda. El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel ha sido sacrificado,

⁵/ Leer *La quimera del agua*, libro escrito por Juan Serna y Mario Gaviria es un ejercicio necesario y clarificador para entender los problemas que genera la filosofía "costista" del agua.

los humedades han desaparecido, y en este caso la vía del trasvase no podrá recuperar las lagunas desecadas y puestas en cultivo, las especies a ellas asociadas o las características del complejo sistema fluvial que conformaba la Cuenca Alta del río Guadiana ⁶. Se ha consumado la pérdida del agua en su acepción de patrimonio natural, por mucho que el uso como recurso turístico del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel obligue a la Administración a ocultar esta realidad.

Lo que nos espera. Es necesario mejorar la eficiencia de los sistemas de almacenamiento, distribución y depuración de agua de los que en la actualidad disponemos en el Estado español. Hay un acuerdo teórico en torno a esta afirmación, pero de poco servirá si sigue acompañado de una política de oferta basada en la interconectividad de cuencas. Si se cumple este sueño faraónico de los padres del Anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional consistente en la creación de una red de autopistas del agua, inauguraremos un escenario de crecientes conflictos por el uso del recurso entre regiones, pueblos y sectores productivos. Mientras, se irá destruyendo irremediabilmente un patrimonio natural cuyo valor sólo se puede medir en términos de armonía, felicidad y supervivencia no sólo para futuras generaciones, sino también para las necesidades vitales de las actuales. Para evitarlo es necesario un fuerte cambio en la filosofía de la planificación hidrológica, renunciando a la alimentación del mito, partiendo de la doble acepción del agua y abordando la necesidad de incorporar actuaciones en el conjunto del ciclo (regeneración hídrico-forestal, prevención de la contaminación, actuaciones sobre el precio en usos agrícolas, etc). Y ampliando conocimientos, en una labor de educación ambiental que debe afectar seriamente a algunas concepciones míticas ancladas también en los programas de las organizaciones sindicales y políticas del campo de la izquierda.

Embalse de Itoiz: un proyecto forjado por la imposición

Coordinadora de Itoiz

Desde los años setenta, los diversos gobiernos, tanto centrales como autonómicos, han intentado en Navarra, sin conseguirlo, acometer infraestructuras hidráulicas sin unos estudios básicos de necesidades y fines reales. La política hidráulica de la Administración se ha fundamentado en la arcaica idea de almacenar agua a toda costa y en todo lugar posible, sin plantearse cómo utilizarla o dónde hacerlo, ni en

^{6/} Peor aún, se ha confirmado que los trasvases ya realizados han propiciado la introducción de especies inexistentes hasta ahora en el Guadiana que pondrán en peligro sus actuales ecosistemas.

qué cantidad o proporción. Consiguientemente, las consecuencias suelen ser desastrosas, inundando extensas áreas de terreno (en la mayoría de los casos de una gran riqueza ecológica por tratarse de profundos y frondosos valles) y aniquilando pueblos, cuyos habitantes deben dejar sus casas, olvidando sus raíces, y dedicarse a otro tipo de vida para la que no están preparados.

Algo así está ocurriendo en la preciosa comarca navarra del Valle de Irati con el proyecto del Embalse de Itoiz. Con una capacidad de 418 Hm³ y una capacidad de regulación de 635 Hm³, inundaría varias localidades de los Valles de Lónguida y Arce, situados a escasos kilómetros del Pirineo.

De tradición agrícola y ganadera, la población de estos valles se ha visto disminuida en las últimas décadas ante la falta de inversiones e intereses de la Administración por esta zona, lo que ha supuesto la emigración de sus habitantes hacia otras comarcas industriales. La inexistencia de un plan de desarrollo supone encontrarse ante la eterna amenaza de proyectos irracionales de todo tipo que no contribuyen a un progreso razonado, sino a un progresismo sin escrúpulos y desequilibrador.

El proyecto del Embalse de Itoiz. Surgió en el año 1985 y, en principio, su finalidad básica era abastecer la Zona Media y Ribera de Navarra, propiciando la creación de 57.000 nuevas hectáreas de regadío, a través del Canal de Navarra, que tendría una longitud de 181 kilómetros, cruzando nuestra región de norte a sur. El presupuesto inicial del embalse fue aprobado en diciembre de 1992 en 16.400 millones de pesetas, costado totalmente por el Estado; el Canal de Navarra, del que no hay siquiera un proyecto sometido a información pública, sólo su primera fase (98 kms.) tiene en estos momentos un costo inicial que ronda los 150.000 millones de pesetas, con un acuerdo verbal de financiación de un 40% por parte del Gobierno de Navarra y en un 60% por el Estado.

El enorme interés de éste por construir Itoiz, propició que en mayo del año 1993 se iniciaran las obras para la construcción del embalse, mientras que las del Canal no han comenzado paralelamente, porque no hay siquiera asignación presupuestaria para ello.

La justificación del Embalse de Itoiz en su supuesto aprovechamiento agrícola no es clara, teniendo en cuenta la actual Política Agraria Comunitaria, que está fomentando el abandono de los terrenos de cultivo, especialmente de los de regadío por la excedentaria, y la jubilación anticipada de agricultores con el fin de reducir la proporción de población agrícola dentro de todo el conjunto de población activa.

Así, en los últimos años, la población agrícola navarra se ha reducido en un 40% y la mitad de los agricultores tienen más de 55 años. Por lo tanto, el panorama no es alentador, ni la coyuntura agrícola reclama la necesidad de realización de obras faraónicas como Itoiz.

Otro argumento en el que se pretende basar su construcción es el abastecimiento de agua de boca para el cinturón vecinal de Pamplona. Dicho abastecimiento está asegurado a largo plazo con los actuales suministros y así lo confirmó la propia Confederación Hidrográfica del Ebro. Hay que tener en cuenta que con la capacidad de Itoiz se podría abastecer a un conjunto de cuatro millones de personas, en contraposición con el medio millón que viven actualmente en Navarra.

Esta serie de "maniobras" lleva a pensar que de lo que realmente se trata es de ocultar el verdadero final del Embalse de Itoiz, que no es otro que el trasvase de agua desde la cuenca del Ebro a diversas zonas de Levante y Cataluña, tanto para usos agrícolas como industriales y turísticos. Esto queda confirmado en el propio anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, cuyo núcleo central son los trasvases intercuenas. Dentro de ellos, el Trasvase del Ebro, consistente en más de 1.500 Hm³ es el mayor y más importante y el Embalse de Itoiz es su inicio y pieza clave.

Este tipo de política hidráulica no es la mejor forma de obtener un desarrollo equilibrado, propiciando la desaparición de determinadas zonas del Estado para fomentar otras comarcas, ya de por sí superpobladas. Habría que tender a una forma de organización territorial sin centrarse en grandes focos económicos que eclipsen al resto de regiones y territorios.

Además, por si esto fuera poco, la zona a inundar posee un valor ecológico único, ya que se trata de un área en la que confluyen diversos microclimas, que la hacen muy rica en flora y fauna.

En dicha comarca hay tres Reservas Naturales, que son espacios protegidos por su especial valor natural, declarados como tales por el propio Gobierno de Navarra. Éste, para evitar conflictos medioambientales a la hora de construir el Pantano de Itoiz, declaró como reserva natural únicamente el área que abarca desde los 590 metros hacia arriba, dejando desprotegida la parte inferior de la reserva, que es donde se encuentra el río.

La explicación a este "particular" criterio se basa en que la lámina de agua del supuesto Embalse de Itoiz tendría una cota en altura de 590 metros, los anteriormente comentados, de ahí que si se declararan las reservas naturales como tales en su completa extensión, el embalse afectaría a dicha superficie y, por tanto, atentaría las propias leyes forales. Ni que decir tiene que, precisamente, la parte desprotegida por el Gobierno de Navarra es la más rica en elementos faunísticos y florales, que se vería inundada de construirse Itoiz.

Esta clara manipulación de las leyes de protección de la naturaleza no quedó ahí, sino que nuevamente, en 1990, el Gobierno de Navarra recortó una de las ZEPAs (Zonas de Especial Protección de Aves), figura proteccionista creada por la Comunidad Europea, reduciéndola en cuanto a sus límites territoriales, a la construcción del proyecto del Embalse de Itoiz.

Tanto la reducción de la zona de reserva natural, como el retranqueamiento del área de la mencionada ZEPA, fueron denunciados en sendos informes técnicos por catorce expertos medioambientales navarros (biólogos, naturalistas, etc), por un lado, y por la SEO (Sociedad Española de Ornitología), por otro, así como un estudio de la estación biológica de Doñana en el que se confirmaba el enorme impacto ecológico irreversible que provocaría la construcción del embalse.

Ante este impacto ecológico, organizaciones a nivel estatal e internacional como CODA y Greenpeace se han posicionado en contra de la realización del Embalse de Itoiz, exigiendo al Ministerio de Obras Públicas su inmediata paralización.

Como consecuencia más inmediata de dicha polémica, la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, Cristina Narbona, declaró que en el *Estudio de Impacto Medioambiental* se habían cometido errores y solicitó al ICONA la realización de un nuevo informe, el cual, se hizo público el mes de octubre de 1993 y en él se

afirmaba que "no puede descartarse la alternativa de renunciar definitivamente al proyecto, ya que en opinión de este Instituto es mucho más evidente la pérdida de valores ambientales relevantes que la obtención de unos dudosos beneficios en el campo de la producción agraria".

Un informe tan tajante debiera haber supuesto la paralización inmediata de los trabajos. Por contra, con el apoyo del Gobierno de Navarra, el Ministerio de Obras Públicas prosiguió con las obras.

Por otro lado, la Coordinadora de Itoiz, junto con diversos ayuntamientos del Valle de Irati, presentaron una queja ante la Comisión Europea por entender que el embalse atentaba a diversas directivas europeas en materia de medio ambiente. Tras un largo proceso en el que incluso se produjo un parón en el proyecto, la Comisión Europea, sometida a reconocidas presiones políticas por parte de las dos administraciones implicadas, archivó la queja, no sin el malestar de los propios técnicos europeos, más proclives a una paralización del proyecto y un análisis más exhaustivo.

Consecuencia de ello, fueron el posterior envío de una serie de sugerencias (un nuevo estudio del impacto ambiental y un análisis más exhaustivo de las verdaderas necesidades de agua en Navarra) por parte del equipo técnico de la Dirección Ambiental de dicha Comisión Europea, las cuales llevan prácticamente a la paralización del embalse.

Tanto el Ministerio como el Gobierno de Navarra, no sólo no acataron dichas sugerencias llevándolas a la práctica, sino que incluso las contravinieron, acelerando al máximo el ritmo de los trabajos de construcción para evitarse más problemas.

Un proyecto rodeado de tantas incertidumbres no tardó en demostrar, sin embargo, sus carencias. Así, el pasado septiembre de 1995, la Audiencia Nacional dictó una Sentencia en la que declaró el embalse nulo e ilegal, por considerar que no existía cobertura legal mediante un plan hidrológico global, por violar la legislación medioambiental navarra al inundar las bandas de protección de tres reservas naturales, y por no existir justificación socioeconómica alguna.

Ante tan contundentes argumentos, las administraciones respondieron con más hormigón y prepotencia, por lo que la Coordinadora de Itoiz solicitó la paralización, al menos cautelar, hasta que se pronunciara el Tribunal Supremo. En un posterior Auto, de enero de 1996, la Audiencia Nacional se ratificaba en sus razonamientos y exigía al Ministerio de Obras Públicas la paralización de las obras, pero, de manera incomprensible, solicitaba para ello una multimillonaria fianza de más de 24.000 millones de pesetas, inasumible a todas luces.

Un nuevo Auto de marzo pasado desestimaba por completo las reclamaciones del Ministerio y el Gobierno de Navarra, que pedían un aumento en la fianza solicitada, y admitía en parte las que había aportado la Coordinadora de Itoiz. La Audiencia Nacional volvía a exigir la paralización de las obras, reducía la cantidad del aval a 13.000 millones, pero introducía una serie de prohibiciones a la vista del nulo caso que habían hecho las administraciones a los requerimientos judiciales.

En concreto, impedía que se pudiera desarrollar cualquier labor de tala de vegetación, movimiento de tierras, o traslado de poblaciones por encima de la cota 506 (altura de la banda de protección de la Reserva Natural de Gaztelu). De esta forma, quedaba garantizado que no se consumara ni el impacto medioambiental ni el social.

Ya sin causar sorpresa alguna, y ante la aparición de serios indicios de corrupción por parte del ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Antonio Aragón, ligado a la trama Roldán, denunciados por un medio de comunicación estatal, las obras continuaron en una loca carrera por imponer la legalidad a costa del bolsillo de todos los ciudadanos.

Ha sido, en cambio, un grupo de ciudadanos agrupados en torno a una organización denominada Solidarios/as con Itoiz, quienes han hecho justicia en esta problemática. Mediante una acción limpia y pacífica, durante la pasada Semana Santa, cortaron los cables de esta obra ilegal, a través de los cuales se realizaba el hormigonado de la presa, para entregarse posteriormente de forma pública y verse sometidos a una brutal paliza por parte de los guardas jurados encargados de la seguridad de la obra.

Esta acción, que en todo momento ha tratado de tergiversarse por parte de los medios de comunicación oficiales, se ha caracterizado por su carácter no violento y generoso, a sabiendas de las repercusiones que podía generar tanto en la vida como en la libertad de las personas que la han llevado a cabo. Y todo ello, única y exclusivamente por cumplir la legalidad y paralizar una obra ilegal, que hace mucho tiempo debieran haber hecho los responsables de dicho desaguisado, más preocupados por ver crecer los ingresos de sus cuentas corrientes, que por aportar soluciones más razonables.

Es por este último camino por donde la labor de la Coordinadora de Itoiz va a continuar, tratando de racionalizar la problemática del embalse, pero teniendo siempre muy claro que no vamos a permitir que Itoiz se convierta en un nuevo Riaño.

Para ello necesitamos de tu apoyo social, moral y económico.

[Teléfono de contacto de la Coordinadora 948-226128]



Desde España, sobre el "problema vasco"

José M^º Ripalda

Las llamadas de los políticos a la comprensión con el mal llamado "caso Gal" —pues tiene poco de caso— han sido llamativamente frecuentes, pese a que inevitablemente tenían que ser entendidas como apología del terrorismo. Seguramente la importancia de este registro justificatorio obedece a un acuerdo implícito y quizá impreciso, que yo calificaría como la clave de la "democracia española": el pacto de paz social. En realidad esta clave no se diferencia tanto de lo que fue "la mayoría silenciosa" del franquismo. Lo que la gente quiere es vivir sin sobresaltos un pequeño bienestar individual (o familiar). Si en algo incidió la

campaña masiva que preparó el referéndum constitucional, fue en eso: o esta Constitución o los militares. Y es algo más que los militares lo que ahora, un par de decenios después, alimenta los miedos: la inseguridad económica atezada y disciplina toda la masa laboral de un país. En el mundo posmoderno no hay piedad para los perdedores, que son relegados a una subsociedad con existencia meramente policial, como muestran paradigmáticamente los Estados Unidos.

El que quedaran excluidos del pacto político de la Transición la subsociedad y las minorías, a las que se aplicó el rodillo parlamentario, era un precio que la sociedad se declaró, imprudentemente, dispuesta a pagar (la sociedad ha sido siempre, desde la Constitución norteamericana, "the good people" la gente de bien). Un contingente constante de presos con motivación política entre 500 y 1.000 hace difícil seguir hablando de una "banda de asesinos" con una incontinencia terminológica, en éste y en otros casos, muy alejada de las pautas aceptadas por la ONU. Pero las cárceles españolas revientan también de otros reclusos; y el porcentaje de reclusas es el mayor de Europa. Un editorial de *El País* ha encontrado un bello modo de sintetizar—involuntariamente— esa doble exclusión, refiriéndose a los disturbios de los Astilleros de Cádiz como "síndrome Jarrái".

Lo excluido ha quedado fuera. Y con ello lo que impide la homogeneidad tranquilizadora del español medio, que reaccionará furibundo o consternado ante el retorno una y otra vez de lo excluido en medio del consenso y el diálogo entre los distintos, que caracteriza el talante de las democracias posmodernas. Al parecer el sistema del diálogo y el pluralismo produce la marginación, y el orden mundial basado en él asiste atónito al surgimiento del champiñón "terrorista" por doquier. ¿No será que el diálogo se basa en reglas de juego incuestionables y en exclusiones previas? ¿No será incluso que, por tanto, discurre paralelo con una pragmática irreductible al sublime principio que aún invoca?

Segunda singladura. La violencia extrema y generalidad de los anteriores sistemas coloniales y totalitarios se desescala en fuegos parciales bajo control. Se trata de un sistema bombero servido por botes de humo y, llegado el caso, por cazabombarderos. Los despotismos sólo tienen lugar en zonas "periféricas" y aisladas. Parece que el orden democrático mundial consiste en declarar periféricos y transitorios todos los conflictos. Pero el procedimiento de desescalar los conflictos no basta para solucionarlos. La misma Transición española puede ser considerada como una desescalada más que como una solución, pues excluyó del pacto constitucional a minorías cualificadas, de modo análogo a como la independencia de Irlanda se alcanzó en 1921 dejando el problema del Ulster. Y el panorama mundial ofrece demasiados ejemplos de meras desescaladas sin solución, como El Salvador, Haití, Palestina e incluso Sudáfrica.

Las desescaladas requieren luego una solución, una segunda singladura. El *quid* de la cuestión es si en España se puede esperar algo así cuando quizá para ello deberá incluso adelantarse en la coyuntura internacional a los hábitos democráticos establecidos o situarse a su nivel más avanzado, como ya ocurrió en 1812 y sus resurgencias o en sus dos Repúblicas abortadas. Dentro de España el terrorismo de Estado, duplicado por la práctica habitual y prácticamente impune de la tortura, ha servido de complemento a las instituciones democráticas. Pero ya

el régimen de Franco combinó la extrema violencia policial con el terrorismo "incontrolado". Esto no sólo muestra continuidades del régimen actual con el anterior, sino que puede inscribirse en las continuidades de fondo entre el actual orden democrático mundial y los anteriores regímenes totalitarios; incluso entre el papel de la intelectualidad "progresista" española —no digamos de los medios de comunicación— y el de los viejos turiferarios del antiguo régimen.

Estos rasgos de fondo son los eludidos por la información y la reflexión sobre "el caso Gal". El Gal se ha hecho asunto de telenovela, nombres propios, anécdotas y la peripecia constante del folletín junto con el misterio de intrigas y conspiraciones. *Todos* quieren ahora que el Gal se depure como una ilegalidad punible y punida. Pero el Gal no ha sido un caso ni varios. La misma legalidad en que se ha perseguido (y de hecho se indujo) ETA, estaba tejida ya en las ilegalidades cotidianas más flagrantes; ella misma es ignorancia ilegítima de las minorías y no podía evitar acudir a *todos* los medios para mantenerla.

España es un país sin proyecto político. Se perdió la oportunidad en los primeros años de la Transición, y lo que queda en primera fila es el nacionalismo, vergonzante o cazurro, de los "nacionales". Ahora se trata de reducir el problema vasco a la guerra del Norte, cuando el problema vasco es el problema de España, la obliga a confrontarse con su propio dilema, excluido, genera la mayor de las crispaciones y provoca las ilegalidades más flagrantes. Este último hecho, cotidiano desde hace años, ha sido ignorado pertinazmente, contaminando progresivamente todos los ámbitos de la democracia. Los resultados están a punto de ser irreversibles. Y seguramente ahora sólo se puede tratar no de anularlos, sino de lograr una desescalada del terror y la violencia. Ésta me parece la única posibilidad eventual de negociación política. Incluso la perspectiva de una Europa de los pueblos es poco alentadora. En principio una remodelación de los Estados nacionales y sus funciones, acompañada de una despotenciación de las fronteras, quitaría importancia a éstas e incluso permitiría afrontar de otro modo v.g. la relación entre el País Vasco estatutario y Navarra. Pero la actual construcción burocrática de Europa requiere democracias autoritarias, que difícilmente casaría con contenidos democráticos menos formalistas. La coyuntura europea es, por tanto, desfavorable a un nuevo tipo de soluciones. Sólo una renovación institucional de las democracias desde abajo podría devolver cierta credibilidad a las instituciones; pero apenas se puede concebir que afectara al control del marco macroeconómico; y en todo caso parece especialmente poco plausible en un país como España, de opinión pública extremadamente depauperada por decenios de franquismo y "democracia".

Tres siglos de violenta homogeneidad social. Aquí no se puede prescindir de la carga psíquica que trata de neutralizar cualquier entramado político. En el nacionalismo español hay que contar desde luego con el precario equilibrio de lo establecido, que amenaza en el mundo posmoderno a todo sujeto individual y colectivo; junto con ello el recuerdo latente de la decadencia constante y aún la previsión de la posible desaparición de una casa llamada España —que los "nacionales" acallaron con gesto heroico y militar— y la tendencia históricamente española a buscar modos para no tener que afrontar una realidad o para hacerlo con los gestos violentos de una época de esplendor pasado.

Por la parte del nacionalismo vasco la ecuación Estado=Nación, incluso si ya pudiera ser una solución inevitable, sólo serviría transitoriamente o como mal menor. Los vascos quizá nos seguimos caracterizando más como pueblo que con la noción burguesa de nación; ésta, que se nos podría aplicar por nuestra estructura genérica de propiedad y opinión pública, tropieza con atavismos –incluso lingüísticos– que dificultan su específica abstracción. Y la pluralidad que introduce el mercado mundial en todos las identidades “locales”, se halla potenciada en el interior de nuestra conciencia de pueblo por pluralidades no sólo regionales, raciales y lingüísticas sino de íntima conexión recíproca con la inmediata periferia geopolítica.

Posiblemente la línea más positiva fuera la que tratara de dar a la noción de auto-determinación, más allá de su sentido abstracto –de indispensable reconocimiento, aunque de discutible eficacia teórica–, contenidos específicos de construcción democrática aceptables en principio para los dos Estados que se reparten el territorio de Euskal Herria. Pero éstos actualmente no están dispuestos a ello. Es más, tampoco parece permitirlo el orden mundial al que ellos mismos obedecen y que fija límites muy fuertes a lo que pueda ser democracia. Esto es especialmente evidente en el caso de España, que en la óptica de la metrópoli marca una señal para las democracias latinoamericanas. La legislación antiterrorista es de hecho un estado de excepción selectivo, ampliado al incumplimiento impune de la ley en otros casos “marginales” (inmigración, droga, cárceles) y fomentado por un funcionamiento de la justicia suficientemente desacreditado. La misma voluntad de perseguir los Gal(es) muestra ya a las claras la discrepancia entre gesticulación política y decisión casi unánime de enterrarlo(s).

En mi opinión la situación política es en este momento simplemente desesperada. Aun así el establecimiento empobrecedor de una frontera más sólo debería marcar la imposibilidad definitiva de acceder a un proyecto democrático medianamente aceptable, sin el que ni hay identidad ni pueblo; ejemplo, el vacío casi absoluto de lo que ya apenas llama nadie (excepto “los nacionales”) la nación española.

2 el desorden internacional

Israel

Michel Warshawski

"Cada vez que Israel firma un acuerdo de paz, hay que ponerse a cubierto"

Entrevista de Nora Venitia

[El Gobierno de Simon Peres ha robado el título de una hermosa novela sobre la solidaridad, Las uvas de la ira de John Steinbeck, para nombrar una de las operaciones militares más atroces que hemos conocido en estos tiempos sobrados de atrocidades.

Michel Warshawski, bien conocido en nuestras páginas, analiza las reacciones israelíes y palestinas ante esta barbarie que el repulsivo lenguaje diplomático, y no sólo diplomático, occidental ha considerado "desproporcionada"].

Pregunta: ¿Cuáles son las razones de la ofensiva israelí en el Líbano?

Michel Warshawski: Desde la firma del acuerdo, hace dos años, entre Israel y Hezbolá, el Ejército israelí estaba disgustado. Este acuerdo prohíbe a la vez a Hezbolá y al Gobierno israelí bombardear a las poblaciones civiles de uno y otro lado; esto coloca a Israel en una posición incómoda, porque el acuerdo no prohíbe a Hezbolá y a las organizaciones de resistencia libanesa continuar su guerrilla en

el Sur del Líbano, que considera, con razón, como un territorio libanés que sufre una agresión israelí. Esto obliga a los israelíes a vivir con esta guerrilla, sin poder dotarse de los medios que considerarían eficaces para combatirla, es decir, la presión contra las poblaciones civiles del norte.

Por consiguiente, el Ejército israelí siempre se ha sentido descontento con este acuerdo que, según él, daba carta blanca a la guerrilla; y la guerrilla ha alcanzado una gran eficacia desde hace un año y ha colocado al Ejército en una posición insostenible desde su punto de vista. Es una posición de repliegue, defensiva, con víctimas permanentes. Aunque el Ejército israelí puede infligir pérdidas a los comandos guerrilleros, su situación les impide ganar la guerra. Esta es la razón de la voluntad y la petición del Ejército, desde hace largo tiempo, de romper los acuerdos.

Esta ofensiva es el resultado de provocaciones israelíes, de violaciones flagrantes de los acuerdos, después de la operación que los israelíes llamaron cínicamente hace dos años "Arreglo de cuentas" que provocó represalias de Hezbolá sobre el norte de Israel.

Hezbolá es un movimiento de resistencia, de obediencia básicamente chiíta, relacionado con Irán, a diferencia de Hamas. Hoy es el más fuerte, el mejor armado, el más eficaz militarmente en la lucha contra la ocupación israelí en el Líbano.

P.: ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno israelí?

M.W.: Ni la menor idea. En el diario *Haretz* del martes 16 de abril, hay un caricatura en la que Peres, mientras lee *Las uvas de la ira* pregunta a sus generales: "¿Alguien sabe el final?".

La política israelí respecto al Líbano ha consistido siempre en servirse de sus poblaciones civiles para presionar sobre los Gobiernos libanés y sirio para que garanticen una concepción israelí de lo que es tolerable en el sur del Líbano. Esta posición es explicada con alegría en la TV, abordando la cuestión de los refugiados del sur: Tiro ha sido evacuado, ahora se habla de Saida, mañana será Beirut. Se sube a lo largo de la costa y se continúa hasta el momento en que el Gobierno, bajo la presión de las masas de refugiados, aceptará los *diktats* israelíes y los hará aceptar a Siria.

El Gobierno libanés no tiene mucho margen de maniobra, pero Siria sí lo tiene. El tiempo no juega en favor de Israel; creo que en la *comunidad internacional*, incluso en EE UU hay un malestar: no conviene que Israel se pase... Un editorial del *New York Times* decía que Israel había tenido razón para lanzar esta operación, pero que ahora ya era suficiente. Pienso que vamos a vivir una segunda fase: una carrera de velocidad entre los militares israelíes que quieren intentar hacer el mayor daño posible sobre el terreno, multiplicando los bombardeos, continuando los ataques a las centrales eléctricas, que los enorgullece especialmente... (*nota*: esta entrevista fue realizada antes del bombardeo de Qana).

P.: ¿Podría Peres reforzar con esta política las posibilidades de los laboristas en las próximas elecciones?

M.W.: Es una peligrosa jugada de poker. Algunos piensan que esta operación en vez de llamarse *Las uvas de la ira*, debía llamarse *Propaganda electoral*...

Mas allá del cinismo, ¿es eficaz electoralmente tomar como rehenes a centenares de miles de personas para ganar puntos en los sondeos? Soy personalmente

bastante escéptico; no imagino al Gobierno llevando la ofensiva hasta las elecciones, es decir, durante más de un mes. Las medidas diplomáticas ya en curso por parte de los EE UU y de Europa, especialmente Francia, podrían llevar a un acuerdo en unas semanas.

Si Israel firma un nuevo acuerdo que reafirme la prohibición de actuar contra la población civil y una sola bomba cae, incluso en un campo desierto al norte de Galilea, entonces el Gobierno aparecerá débil por haber aceptado un acuerdo que los árabes no respetan. Hay una enorme apuesta que implica, bien continuar la guerra hasta las elecciones, bien darse los medios para impedir toda forma de operación en Israel o contra objetivos israelíes en el extranjero. Israel no puede ganar esta apuesta.

P.: ¿Se ha desmarcado la derecha israelí del Gobierno en esta operación?

M.W.: Oficialmente el Likud, a través de su presidente y candidato a la jefatura del Gobierno, Benyamin Netanyahu, apoya al Gobierno, pero afirma que ahora hay que utilizar la ventaja militar para presionar sobre Siria, para que se comprometa a garantizar un alto el fuego con las organizaciones libanesas guerrilleras. Por otra parte, algunos generales miembros del Likud piden la extensión de la zona de seguridad hasta el río Litani (situado a una veintena de kilómetros al Norte de los límites de la actual zona de seguridad), lo cual es un *remake* de intentos anteriores, como la Operación Litani en la guerra del Líbano de los años 70. De aquí surge un debate: ¿una ampliación de la zona de seguridad que situara a Israel fuera del alcance de los misiles Katiuska resolvería el problema? Por el momento, el Gobierno se opone a esta política. Pero es difícil distinguir lo que hay en todo esto de debate estratégico y de propaganda electoral.

P.: ¿Cuáles son las reacciones en Israel? ¿Se expresa alguna oposición?

M.W.: Las fuerzas pacifistas tradicionales apoyan al Gobierno por dos razones. Primero, porque tienen poca memoria y están persuadidas, o más bien se han persuadido, de que son los árabes los que han empezado, que si no hubiera habido los Katiuskas en el norte esta operación no se habría realizado, lo cual es evidentemente falso ya que los Katiuskas fueron una respuesta a un bombardeo más allá del sur del Líbano, hecho que ha sido admitido por el propio Gobierno en varias ocasiones. Por otra parte, además de esta identificación con la política del Gobierno, hay también argumentos politiqueros ante el horror de la ofensiva israelí, que muestra la TV, del tipo "ahora no podemos permitirnos atacar a Peres; hacemos bloque con él". El movimiento Paz Ahora y el Meretz, que son la izquierda de la coalición en el terreno político y extraparlamentario, rechazan toda posición crítica.

El Bloque de la Paz, que sigue siendo la única expresión regular de una oposición sobre las cuestiones de los Territorios Ocupados o el Líbano, el Movimiento de Mujeres por la Paz y el Frente Democrático, dirigido por el PC, han organizado manifestaciones. Estas iniciativas son muy marginales, pero hay un comienzo de expresión crítica en los medios. Esta operación se parece tanto a las aventuras israelíes en el Líbano durante los veinte últimos años que algunos periodistas, algunos intelectuales, empiezan, poco a poco, a plantear dudas, a hacer

comparaciones con las experiencias anteriores, cuyo balance político y moral ha sido desastroso. Se siente una evolución en los diarios y creo que las críticas van a ampliarse en los próximos días, pero es demasiado pronto para hablar de movilización. Sólo un ala radical está movilizada, pero no ha reagrupado todavía a lo que se llama movimiento pacifista en sentido amplio.

P.: ¿Y las reacciones palestinas?

M.W.: No hay ninguna reacción palestina. No hay que olvidar que estamos ante dos frentes, ambos políticos y humanos: una agresión terrible al Líbano, la transformación intencionada, cínica y declarada de centenas de miles de personas en refugiados, y también el mantenimiento del bloqueo de los Territorios, que destroza la vida de los palestinos, que los hunde en el hambre. Hay un comienzo de toma de conciencia contra el bloqueo, se expresan más posiciones críticas, se preparan iniciativas; estamos obligados a establecer cada semana prioridades para agrupar nuestras escasas fuerzas.

P.: ¿Se mantiene el crédito de Arafat?

M.W.: Por el momento, Arafat intenta gestionar lo que queda de los Acuerdos de Paz con Israel. Se podría decir que se las arregla lo mejor posible en una situación que no tiene arreglo. Intenta satisfacer a los israelíes continuando la represión en todas las direcciones en el territorio que controla, aunque suelta lastre cuando la presión popular se hace demasiado amplia, como hemos visto en las manifestaciones estudiantiles. Intenta obtener fondos, no para permitir un despegue económico, que sigue siendo un sueño, sino para gestionar la miseria. Esta miseria alcanza un nivel sin precedentes en la franja de Gaza, pero también en Cisjordania, debido a las condiciones draconianas del bloqueo. Israel lleva una política de toma de rehenes sistemática: la población palestina está secuestrada para confortar las posiciones israelíes en las negociaciones con los palestinos, la población libanesa para dar satisfacción al Ejército israelí en su batalla, perdida por anticipado, contra la guerrilla del sur del Líbano.

P.: ¿Y para concluir?

M.W.: Hay que estar siempre muy atento cuando Israel hace la paz. Cada vez que Israel firma un acuerdo de paz, hay que meterse en los refugios. Israel ha firmado la paz con el Líbano para volver a guerrear después. Hay una incapacidad israelí fundamental para gestionar una estrategia de paz. El plan diseñado en Washington para normalizar las relaciones entre Israel y sus vecinos no marcha porque Israel no está dispuesta a ir hasta el fin en esta coherencia y vuelve a una escalada que nos hace retroceder catorce años.

ROUGE nº 1681/ 18 de abril de 1996/ París

Traducción: M. Morelli

Dificultades para los sindicatos

Franco Turigliatto

Una serie de dificultades, incertidumbres, divisiones, luchas fragmentadas y con frecuencia aisladas, son características de la situación actual del movimiento obrero italiano, después del extraordinario movimiento de masas que había permitido la caída del gobierno Berlusconi-Fini.

En otoño de 1994, el proyecto gubernamental de contrarreforma radical del sistema de la seguridad social, conquista histórica de la clase obrera en 1968, había chocado contra una resistencia vigorosa que había surgido, de forma espontánea, en las grandes empresas metalúrgicas, pero que enseguida había arrastrado al conjunto de la clase obrera y a los trabajadores de la función pública, dando lugar a la movilización en las calles de millones de personas. En efecto, a los trabajadores y trabajadoras se habían unido parados, estudiantes y jóvenes. Frente a un gobierno que de nuevo volvía a poner en cuestión su papel de mediación y de concertación social, las tres confederaciones sindicales, Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), Confederación Italiana de Sindicatos Libres (CISL) y Unión Italiana del Trabajo (UIL), aunque dispuestas durante mucho tiempo a aceptar un deterioro del sistema de jubilación, se esforzaron entonces por recuperar, generalizar y coordinar este movimiento. Tras haber adquirido una cierta credibilidad sobre la base de esta iniciativa, las burocracias sindicales lograron imponer un acuerdo de compromiso con el gobierno, al mismo tiempo que renunciaban a la convocatoria de una huelga general que, probablemente hubiese derribado al gobierno de Berlusconi. Este compromiso, en la medida en que posponía a junio del 95 la realización de una nueva legislación sobre la cuestión, no resolvió nada. Berlusconi, desgastado por la lucha de masas, tuvo que ceder su puesto a su antiguo ministro de finanzas, el banquero Dini, que fue apoyado por una coalición parlamentaria heterogénea, incluyendo las fuerzas de centro izquierda, cuyo pilar fundamental es el Partido democrático de izquierda PDS (exPC) dirigido por D'Alema, La Liga del Norte y, por otra parte, en el terreno social, por las organizaciones patronales y los aparatos sindicales. Es justamente con estos apoyos del PDS y de los sindicatos que el gobierno Dini podía realizar el proyecto de la patronal: lo que había sido expulsado a patadas por la puerta volvía a entrar por la ventana.

En efecto, el gobierno, de acuerdo con las tres confederaciones sindicales, propuso un proyecto de ley sobre las pensiones de jubilación, que no era muy diferente del propuesto por Berlusconi. Dicho proyecto fue aprobado por el Parlamento en las vísperas de las vacaciones, a pesar de la oposición de los trabajadores y del Partido de la Refundación Comunista.

Se trata de una importante derrota que se suma a otras sufridas a lo largo de los últimos años y que han tenido una repercusión profunda sobre el estado de ánimo y la conciencia de los trabajadores. Una serie de mecanismos de división y de

fragmentación de la clase obrera y de los trabajadores operan desde entonces constantemente: no se trata únicamente de pérdidas en el terreno salarial, por muy importantes que éstas sean, sino también de mecanismos de división que actúan de forma permanente y que tendrán efectos muy negativos en el futuro.

La negociación de los salarios

Los salarios han sufrido un deterioro muy importante. En Julio de 1992, los dirigentes sindicales firmaron un acuerdo que ponía fin a la escala móvil de salarios. Al año siguiente, se comprometieron con el gobierno y la patronal a limitar las reivindicaciones salariales por ramos, al marco de la inflación fijada anualmente por el gobierno. Y en lo concerniente a los eventuales aumentos dentro del marco de las empresas, éstos estarían ligados rigurosamente a los aumentos de productividad, a la calidad y, sobre todo, al balance de las empresas.

Se trataba de acuerdos suicidas que ponían fin a la independencia de las organizaciones sindicales, obstruyendo toda acción reivindicativa adecuada. Hoy, el resultado de estos acuerdos que los trabajadores habían criticado violentamente, están claros para todo el mundo. En 1994 la inflación prevista era del 3,5 % y la inflación real ha sido del 3,9 % ; en 1995 fue aún peor ya que la inflación prevista era del 2,5 % y la inflación real llegó al 6 %. Así pues, los salarios han disminuido en el espacio de dos años un 4 %, lo que viene a significar una pérdida mensual media de 130.000 liras.

Texto de la oposición sindical para el congreso de la CGIL

El Congreso Nacional de la CGIL deberá realizarse en los meses próximos. Las mesas preparatorias comienzan en febrero 1996. La oposición a la mayoría confederal, ligada a la experiencia de *Essere Sindicato*, bajo el nombre de *Alternativa Sindacale*, propone un texto del cual nosotros reproducimos su introducción. Los ejes principales del texto son: reintroducción de la escala móvil de salarios, 35 horas semanales de trabajo sin reducción de salarios, 32 horas en caso de jornada continuada, defensa intransigente de la seguridad social y de los derechos de los trabajadores. *Alternativa sindacale* propone una movilización europea coincidiendo con el 1 de Mayo.

“Un modelo económico y social que destruye los valores, destroza el territorio, acentúa los desequilibrios entre el Norte y el Sur, está a punto de verse reforzado en nuestro país. En el sur, generaciones enteras son excluidas del trabajo mientras que en el norte prevalece un modelo de producción sin reglas ni derechos. En el Sur se proyectan formas de actuación, susceptibles de ser generalizadas a todo el país.

Luchar para cambiar este estado de cosas constituye el objetivo estratégico de una batalla político-social que nosotros proponemos a todos los afiliados de la CGIL. Los sindicatos italianos y particularmente la CGIL han aceptado este estado de cosas al firmar los acuerdos del 31 de julio de 1992 y del 23 de julio de 1993 sobre la abolición de la escala móvil y la política salarial, así como el acuerdo sobre las pensiones de 1995 y han aceptado las compatibilidades económicas, sometiéndose así al marco político existente. Estos acuerdos y especialmente el de las pensiones han sido contestados por los trabajadores y por los afiliados de los sindicatos. Los dirigentes y militantes que comparten esta actitud en el seno de la CGIL proponen un texto para el XIII Congreso en la perspectiva de asegurar una continuidad en las batallas políticas llevadas anteriormente.

El Congreso debe ahora hacer el balance de la línea estratégica y reivindicativa aplicada en el curso de los últimos años. Nosotros proponemos una línea alternativa de cambio radical.

Los trabajadores de la función pública han sido de los más perjudicados ya que, además de la reducción de los salarios, han sufrido las consecuencias de lo que se llama la "privatización de las relaciones de trabajo". En lo que concierne a las condiciones de los asalariados, hay que tener en cuenta además que los datos precedentes hacen referencia a los salarios oficiales y regulares, pero existe un sector amplio de trabajo sumergido que afecta a numerosos trabajadores inmigrados y también italianos, que ejerce una presión suplementaria en el sentido de una reducción de salarios. Las cifras globales son elocuentes: entre 1992 y 1994 la renta nacional ha aumentado un 8,7 % (en liras corrientes), la masa salarial un 2,8 %, la masa de beneficio de los empleadores un 14,8 % y, además, se han producido incrementos considerables en la productividad que sitúan a Italia en los primeros puestos (4 trabajadores italianos producen tanto como 5 japoneses, desarrollo de las exportaciones italianas a causa de la devaluación de la lira, ...). Estos fenómenos han conducido, pues, a un deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores y a un aumento considerable de los beneficios de la patronal.

Por otra parte, la reducción de los salarios presiona necesariamente sobre la realización de horas extraordinarias: en las empresas metalúrgicas se trabaja una media de 45 a 46 horas por semana, cuando según los contratos se deberían trabajar 40 o incluso menos. A todo esto hay que sumar una agravación de la explotación debido a que los sindicatos no son ya capaces de adoptar medidas para ejercer un control sobre la organización del trabajo y los ritmos. Es impresionante constatar como en 1994 se ha producido la muerte de 1.200 personas como

El acuerdo sobre la política de renta no ha garantizado la defensa de los salarios: ha desgastado la autonomía contractual del sindicato. El acuerdo sobre las pensiones, rechazado ampliamente por los trabajadores y los pensionistas, está inspirado en la misma lógica de debilitamiento del conjunto de los derechos, haciendo más vulnerable el Estado de Bienestar.

Nuestro país atraviesa una grave crisis democrática e institucional. En este contexto se han producido procesos masivos de privatización y enormes riquezas y poderes se han concentrado en las manos de unos pocos. Las condiciones de vida de millares de trabajadores y pensionistas se ha deteriorado. Es pues necesario un viraje programático y estratégico rechazando las orientaciones de los últimos años, subordinadas a los imperativos del modelo económico y social existente, que debilitan, dividen y desgarran el movimiento de los trabajadores.

Es necesario reconstruir un movimiento de lucha, una iniciativa fuerte, generalizada y unitaria tendente a reajustar salarios y ganancias y reintroducir un mecanismo de escala móvil. Es preciso definir una plataforma que plantee la cuestión de las horas de trabajo en la perspectiva de una reducción generalizada. Es preciso defender el Estado de Bienestar y relanzar una seguridad social pública adecuada.

Es necesario plantearse la cuestión de ir hacia un modelo de desarrollo diferente y equilibrado. El trabajo manual ha sufrido una marginalización social y material por lo que su valorización debe inspirar toda actuación contractual futura.

Un desarrollo cualitativamente diferente, una función pública autónoma y eficiente, un Estado de Bienestar renovado y un sistema fiscal equitativo deben basarse en una red de poderes, de control y de participación democrática que conlleven un relanzamiento de la autonomía local y del regionalismo.

Son éstos los puntos esenciales para recomponer el movimiento de masas, operar un cambio decisivo, relanzar la CGIL como un gran actor social de cambio. Es sobre esta propuesta que pedimos el apoyo de los afiliados para devolver a la CGIL su dimensión reivindicativa y de lucha de clases, confederal y democrática".

consecuencia de accidentes laborales. En Fiat-Mirafiori de Turín, por ejemplo, se han producido en el curso de un año 2.400 accidentes de trabajo. Pero los defensores del libre mercado pueden mostrarse satisfechos, ya que en el espacio de tres años la productividad en la Fiat ha aumentado un 27%.

En numerosos casos las burocracias sindicales, sin que existieran circunstancias técnicas que lo impusieran, han aceptado que los patronos introduzcan períodos de trabajo adicional por la noche, los sábados e incluso los domingos; con frecuencia se utilizan los pequeños equipos, es decir se emplean a jóvenes los sábados y domingos al margen de las condiciones fijadas por las normativas de contratación. En Melfi, en la nueva factoría de Fiat de la región de Basilicata, los sindicatos han aceptado incluso un régimen contractual diferente al del resto de los establecimientos de Fiat.

Al haber aceptado este enfoque, cada vez es más difícil incluso para la CGIL (las otras confederaciones han aceptado ya el enfoque de la patronal) oponerse a las demandas de los capitalistas que intentan reintroducir tablas salariales diferenciadas según las regiones y/o generalizar los salarios reducidos de contratación, que por otra parte ya existen, en buena medida, bajo la forma de contratos de formación para jóvenes.

Desde el punto de vista del empleo, la situación no es menos inquietante: hay, por lo menos, tres millones de parados, alrededor del 12% de la población activa (más del 20% en el Sur); entre los jóvenes las cifras alcanzan el 40%. Varios procesos de reestructuración están en marcha y amenazan el empleo de varias decenas de miles de trabajadores. Alfa Romeo Arese de la que es propietaria Fiat, ha pasado de 12.000 a 6.000 empleados y amenaza con el cierre definitivo; Olivetti ha pasado en el espacio de cinco o seis años de unos 46.000 trabajadores a un poco más de 26.000; en Telecom (empresa pública) una reestructuración gigantesca pone en peligro 9.000 empleos. La siderurgia, en otro tiempo bastión del sector público que hizo de la Italia de la posguerra una de las principales potencias industriales, ha sido restituida a los *barones* del acero, experimentando un proceso de reducción de empleo que parece que no va a terminar nunca. Para evitar las luchas de resistencia en algunos sectores de la función pública y del transporte en los que los trabajadores disponen de mayores garantías contractuales, el gobierno Dini en colaboración, como es habitual, con la burocracia sindical, se apresta a introducir una nueva y más dura legislación antihuelga.

Lucha parcial y fragmentada

En este contexto, las movilizaciones de los trabajadores se encuentran con dificultades importantes. Sin embargo existen numerosos focos de lucha.

En primer lugar, están las movilizaciones defensivas del sector industrial, sobre todo en algunas empresas que han sido duramente golpeadas por la reestructuración. Por ejemplo, la lucha de los trabajadores de la empresa siderúrgica de Ilva en Tarante, que ha obtenido un primer éxito parcial al oponerse a una reducción drástica de la producción proyectada por el nuevo propietario privado Luchini.

Segundo ejemplo, la larga batalla de los trabajadores de Alenia, una empresa del sector aeronáutico y aeroespacial militar con una mano de obra muy cualificada y técnicos de alta calidad. Esta empresa del sector público está siendo desmantelada y privatizada por partes. Hasta ahora los trabajadores han conseguido impedir la realización de esta operación, especialmente el cierre del taller principal, en Turín con 3.000 trabajadores, exigiendo en cambio su reconversión para producción civil.

La situación es aún más difícil en Olivetti, cuya reestructuración comportaría la reducción de 5.000 puestos de trabajo, o en Italtel (telecomunicación) o en Alfa Romeo Arese, en donde las luchas se encaminan a evitar el cierre de la factoría de Arese previsto para dentro de un año o dos.

Todas estas luchas están aisladas unas de otras. Por ejemplo en la región industrial del Piemonte, duramente castigada por los procesos de desindustrialización, las organizaciones sindicales se han opuesto hasta ahora a unificar las luchas, ni siquiera han apoyado una huelga común de los metalúrgicos. Llegan incluso a teorizar la necesidad de mantener las luchas separadas o incluso la oposición a alguna de ellas como en el caso escandaloso de la metalurgia del FIM-CSIL de Nápoles, ya que en un texto de la dirección sindical se insta a la dirección de la empresa Alenia para que sea más vigorosa en su proyecto de cierre de la factoría de Turín contra el que luchan los trabajadores. En estos casos, los cuadros sindicales de la corriente lucha de clases no han conseguido tampoco una coordinación eficaz para su acción.

Tentativas de recomposición sindical

Una fuerte movilización ha tenido lugar en el sector del transporte (aeropuertos, Alitalia, ferrocarriles, transporte urbano) en el que existen estructuras sindicales alternativas a las tres confederaciones y que se oponen a la aplicación de medidas de contrarreforma de la jubilación. Finalmente hay una lucha de enseñantes que rechazan un contrato que los penaliza, en el marco de una lógica neoliberal de reducción de los gastos en educación; en esta batalla se han incluido los estudiantes que luchan contra los recortes de presupuestos para la escuela pública previstos en la ley de presupuestos así como contra las nuevas normas sobre la autonomía escolar que van en el sentido de la privatización.

Las críticas contra las confederaciones sindicales no cesan de multiplicarse, pero no han conseguido construir una verdadera dirección alternativa. Las manifestaciones de masas organizadas en varias ocasiones —como la de Roma de Junio 1995, impulsada por la corriente lucha de clases con una importante participación— no son suficientes para resolver este problema. En efecto sobre este terreno hay una gran efervescencia que se combina con debilidades políticas.

Desde hace bastante tiempo existen organizaciones al margen de las confederaciones que se han dotado de una verdadera estructura: por ejemplo, algunas Cobas (comité de base) de la función pública, las Representaciones Sindicales de Base (RDB) y la Federación Unitaria de Trabajadores Metalúrgicos (FLMU). Algunas de ellas tienen un peso real en el seno de las empresas y en el seno de algunos sectores, aunque en todo caso sin una fuerza organizativa comparable a la de las organizaciones confederales. En líneas generales se sitúan

en una óptica de sindicalismo alternativo con rasgos sectarios, oponiéndose con frecuencia a participar en las movilizaciones de masas impulsadas por CGIL-CISL-UIL.

El caso de los Cobas-SLAI (Sindicato de los trabajadores auto-organizados) es diferente. Esta organización que ha visto la luz en Alfa-Romeo de Arese y de Pomigliano y que actualmente se ha desarrollado considerablemente, se define como un instrumento transitorio en un proceso democrático de construcción de un sindicato de lucha de clases y adopta una política unitaria de participación en movilizaciones de masas tras eventuales reivindicaciones comunes.

Finalmente en lo que concierne a la CGIL, que sigue siendo el sindicato más fuerte y que reagrupa a sectores importantes de la vanguardia en las empresas, hay que decir que en lo que se refiere a la tendencia *Essere Sindacato* (Ser Sindicado), formada hace algunos años en el curso de la preparación del último congreso, no ha estado a la altura de la tarea y no ha constituido una dirección alternativa. Una parte importante de su dirección se ha mostrado subalterna al aparato confederal, incorporándose de nuevo a la mayoría. Ya en otoño de 1992, en el transcurso de las luchas que en aquel momento tenían lugar, *Essere Sindacato* no supo asumir las responsabilidades de dirección del movimiento rompiendo el marco de los aparatos. Esto supuso el comienzo de un impasse determinante de la crisis de *Essere Sindacato*. Sin embargo, una nueva oposición se está organizando en el seno de la CGIL: ha presentado un documento alternativo para el próximo congreso confederal y parece ser más consciente de la necesidad de presentar a los trabajadores una alternativa de conjunto (ver recuadro).

Lo que aparece como necesario es la coordinación efectiva de los cuadros sindicales que se sitúan en una óptica de lucha de clases, tanto en el interior de las confederaciones como al margen de ellas. En esa perspectiva, la militancia sindical del PRC tendrán un papel muy importante a jugar. Una conferencia reciente de trabajadores/as del Partido ha supuesto un paso en este sentido. Pero los obstáculos principales subsisten y será necesario encarar en el próximo período otros encuentros y debates para precisar la orientación y la práctica de los militantes del partido.

INPRECOR nº 399/Febrero de 1996/París

Traducción: M^a Dolores Vivero

El resultado electoral de Rifondazione

La coalición de centro-izquierda El Olivo ha obtenido una corta mayoría en las elecciones generales italianas del 21 de abril. Esta situación da una especial importancia a Rifondazione Comunista (PRC), que ha obtenido 3.200.000 votos (8%) y un aumento en porcentaje (+2%) y número de votos (+800.000) mayor que cualquier otro partido.

El PRC, considerando que la derrota de la derecha encabezada por el tándem Berlusconi-Fini era el objetivo inmediato más importante, y teniendo en cuenta las características del sistema electoral italiano, estableció un pacto electoral con El Olivo para el reparto de las circunscripciones uninominales. Tras conocerse los resultados electorales, el PRC anunció que permitiría la constitución de un gobierno de El Olivo, pero que defenderá su propia política; el secretario del PRC, Fausto Bertinotti, ha emplazado al líder de El Olivo Romano Prodi a mostrar un signo de cambio en favor de los trabajadores restableciendo la escala móvil de salarios. Prodi se hizo el sordo...

Paolo Ferrero, miembro del Secretariado Nacional del PRC, ha comentado para Rouge los resultados electorales: "Hay que partir de dos consideraciones. En primer lugar, las diferentes organizaciones de derechas reúnen la mayoría de los votos y pasan del 45% en 1994 al 55% hoy. Por consiguiente, la sociedad ha votado más hacia la derecha. Pero como la derecha está dividida, la izquierda ha conseguido una mayoría parlamentaria, aún con menos votos. El único aumento significativo es el nuestro (*nota*: el PDS ha conseguido 40.000 votos más que en 1994 y un 21,4%).

Ahora el centro izquierda sólo tiene mayoría en el Senado y necesita nuestros votos para tener mayoría en el Parlamento. Nosotros vamos a permitir la formación de este Gobierno, votaremos por él, pero no participaremos en él y no haremos un acuerdo con él sobre la base de su programa. Hemos establecido un acuerdo para vencer a la derecha. En adelante, iremos viendo qué hacer sobre cada cuestión, cada propuesta gubernamental.

Ahora queremos construir un movimiento y una opinión pública favorables a las propuestas que hemos desarrollado durante la campaña, por las 30 horas, la escala móvil de salarios, la defensa del Estado social, de la Seguridad Social.

Creo que el problema está en mantener la autonomía del partido y su capacidad para construir un movimiento basado en nuestras propuestas, aprovechando la posición relativamente fuerte en que nos encontramos".



El Ejército Zapatista convoca a la formación de una nueva fuerza política

Edgard Sánchez

El pasado 1 de enero, con motivo del segundo aniversario de su levantamiento armado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) dio a conocer la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona. En esta Cuarta Declaración convoca a la formación de una nueva fuerza política, la que denomina Frente Zapatista de Liberación Nacional.

La convocatoria era esperada desde hace meses porque era el resultado lógico de la Consulta Nacional que hizo el EZLN en los pasados meses de agosto y septiembre. Una de las seis preguntas de la consulta era precisamente si el EZLN debería convertirse en una nueva fuerza política y cómo debería hacerlo. Más de un millón de personas respondieron afirmativamente a la pregunta.

Pero, por otro lado, la convocatoria a la formación de una nueva fuerza política es completamente necesaria en función de la situación nacional. El levantamiento armado del EZLN en enero de 1994, detonó una crisis en el sistema político dominante en México. La crisis no se ha resuelto ni en un sentido ni en otro, sino más bien se prolonga en medio de un deterioro de la situación social y descomposición del propio sistema político. Todo ello indudablemente está provocando también un reacomodo de todas las fuerzas políticas. Todas se encuentran en crisis en este marco de redefiniciones. Desde 1994, el EZLN ha conocido una gran simpatía popular, simpatía también en la base de muchas fuerzas y partidos políticos, y cuenta con una gran autoridad moral y política en medio de esta situación. Sin embargo, la organización del EZLN es básicamente la de una fuerza político-militar, de tal forma que las posibilidades de influir directamente en la situación en el terreno político y de masas se ve disminuida por no contar con una organización propia a nivel nacional y fuera de su estructura militar. Muchas de las iniciativas políticas del EZLN se han quedado cortas por la ausencia de una fuerza propia organizada para llevarlas a cabo. Por todas estas razones es que la convocatoria a formar una nueva fuerza política es de indudable importancia, debe incidir en el reacomodo de fuerzas políticas y por esta vía acercar las posibilidades de una solución a la crisis que agita al país y acercar las posibilidades para que esta eventual salida sea por el lado democrático, popular y con una dinámica revolucionaria.

Siendo tal la importancia de la convocatoria a la formación de una nueva fuerza política, la iniciativa misma debía provocar un gran debate. Es normal, pues aún entre los simpatizantes del zapatismo que estarán de acuerdo en la necesidad de esa nueva fuerza, el pasar a definir sus características principales obliga a una reflexión y debate amplios. Algunos, entre los simpatizantes del EZLN piensan que no, que la palabra zapatista no se discute, simplemente se obedece. Para ellos bastaba suscribir la Cuarta Declaración tal cual está... y esperar el siguiente comunicado de la Comandancia General. Hacen una caricatura de la concepción zapatista de mandar obedeciendo. Es parte de la caricatura de los que, queriendo mimetizar con el funcionamiento de una estructura militar, suponen que en un movimiento político, en una nueva fuerza políti-

ca, habrá de funcionar como tal estructura militar, bajo disciplina y sin discusión.

“Mandar obedeciendo”, como dicen los zapatistas, no quiere decir obedecer al mando sin discusión. Quiere decir que el mando debe obedecer el resultado de la discusión y el consenso de la base. No mandar arbitrariamente. Es una propuesta para el control democrático de los dirigentes, no para el control despótico de las bases.

Por supuesto que en la discusión que ha provocado la convocatoria a la creación del Frente Zapatista distinguimos dos niveles. Por un lado, el debate con aquéllos que no están de acuerdo con el Frente Zapatista, que se oponen a los zapatistas o quienes desde el sistema se burlan y los combaten. Ese debate hay que hacerlo, y desde el movimiento se está contestando. Pero hay otro debate que también tiene que ser clarificado incluso para mejor responder a los adversarios. Es el debate existente en el seno del movimiento simpatizante y solidario con el zapatismo. En este terreno es en el que nos ubicamos para discutir algunos planteamientos de los zapatistas contenidos en la Cuarta Declaración que es necesario clarificar para llegar a acuerdos o para saber, eventualmente, la magnitud de las diferencias. Es un debate que parte de la necesidad y el apoyo a la existencia del Frente Zapatista, pero que aborda varios de los aspectos polémicos de la Cuarta Declaración.

Finalmente, el debate amplio se dio y los propios zapatistas debieron aclarar sus propios conceptos, especialmente con el mensaje de vídeo grabado que envió el subcomandante Marcos el 2 de marzo a un encuentro de comités civiles en la ciudad de Poza Rica.

Frente político y estructura partidaria

El primer tema a debate ha sido la concepción misma del Frente Zapatista. ¿Por qué Frente? ¿Por qué no partido? ¿Por qué frente, pero no de organizaciones, sino de individuos?

Antes de la Consulta Nacional, el PRT y otras agrupaciones socialistas planteamos que, desde nuestro punto de vista, lo mejor era que el EZLN convocará a la formación de una nueva alternativa partidaria y que invitará a otras fuerzas interesadas a hacerlo conjuntamente, aun cuando fuera sobre la base del EZLN.

Ciertamente, la simpatía a favor del EZLN ha sido muy amplia. El EZLN ha insistido en su correcta preocupación de organizar a la “sociedad civil”, a los sin partido. Ejemplo de ello fue la Convención Nacional Democrática (CND). Pero la amplitud del movimiento solidario con el zapatismo ha implicado también mucha heterogeneidad política, lo que le quitó fuerza y eficiencia a la CND. Por eso, pensamos, la nueva fuerza política debería superar la experiencia de la CND en cuanto a coherencia política. Esa mayor coherencia política, pensamos, se lograría con una organización de tipo partidario con incorporación individual y definición en torno a un programa político.

Desde los días de preparación de la consulta sabíamos que este planteamiento sobre un organismo de tipo partidario no es muy popular en el movimiento solidario con el zapatismo. No lo es, en primer lugar, por el desprestigio del actual sistema de partidos. Pero tiene que ver también con una identificación que muy comúnmente se hace entre partido y partido como instrumento electoral. Esta identificación es frecuente también en declaraciones del EZLN. Es decir, identificar la noción de partido con la de partido con registro legal para participación electoral y todo lo que ello implica.

Nos parece que la noción de partido no es obligadamente la de partido electoral. La lucha política que un partido revolucionario debe desarrollar no se constriñe a la lucha electoral. Obviamente, esta idea se basa en nuestra propia experiencia y concepción y convencidos de que una convocatoria zapatista a una nueva alternativa partidaria aceleraría los reacomodos políticos. Tampoco coincidimos con la crítica que hace el subcomandante Marcos en su mensaje del 4 de marzo al decir que un partido político tiene sólo dos momentos de participación para su militancia: la participación en elecciones y las elecciones internas de dirigentes. Nuevamente, se está pensando exclusivamente en la experiencia de partidos electorales y particularmente partidos burgueses. Obviamente, no es la concepción de partido que estamos proponiendo, sino de uno que se organiza efectivamente para participar en la cotidiana lucha de clases y que no reduce su participación a la electoral. El EZLN rechaza, en consecuencia, convocar a la formación de un partido político. Convoca, en la Cuarta Declaración, a un Frente Zapatista. Aparentemente sería esta propuesta una solución para encontrarse con la amplitud y heterogeneidad del movimiento solidario con el zapatismo, constituyendo una fuerza definidamente zapatista, pero al mismo tiempo plural que implicara un frente político. El PRT planteó, en ese contexto, su disposición a participar como tal en un frente político. Sin embargo, en su mensaje del 4 de marzo, el subcomandante Marcos ha señalado explícitamente que no se trata de un "frente de organizaciones" y por tanto quien quiera participar en el Frente Zapatista debe ingresar individualmente renunciando a su organización o ésta debe disolverse como tal para dejar en libertad a sus miembros de ingresar al Frente Zapatista. Así, la propuesta zapatista se queda en medio del camino entre un partido donde efectivamente se ingresa en forma individual y con una estructura en muchos casos similar al organigrama de comités locales, municipales, regionales y estatales que propone Marcos en su mensaje, por un lado, y por el otro, la propuesta de un Frente Zapatista donde, así como el EZLN obviamente no se disuelve, puedan ser parte otras corrientes políticas abiertamente. Por el contrario, el subcomandante Marcos dice en este mensaje que, efectivamente, la afiliación será individual y como el EZLN no se disuelve (y obviamente no puede hacerlo después de haber declarado la guerra al Gobierno) su Comandancia General recibirá las solicitudes de ingreso al Frente Zapatista para su final acreditación y aceptación. Y aunque Marcos afirma que el frente no será de organizaciones, sino un frente de diversos pensamientos donde pueden coexistir "comunistas, trotskistas, o gente sin definición ideológica particular" al mismo tiempo se entiende que eso no quiere decir la presencia de corrientes organizadas como tales en la nueva fuerza política. Para quienes hemos planteado abiertamente nuestra afiliación y militancia políticas esta decisión impide nuestra integración. No se puede, como algunos irresponsablemente han hecho, afirmar que no son militantes partidarios, que están disueltos en la sociedad civil y funcionar, de todos modos, como grupo de interés aparatista, pero en forma encubierta.

Ciertamente, lo anterior no quiere decir necesariamente una ruptura política total del EZLN con fuerzas políticas que han sido solidarias con la lucha zapatista. Al mismo tiempo que el EZLN insiste en defender la idea de un frente amplio opositor que constituya un movimiento para la liberación nacional donde tendrían expresión y lugar un abanico muy amplio y plural de fuerzas, ahora ha propuesto también un nuevo

espacio de encuentro: un frente de izquierda que, a su vez, sea parte del frente amplio opositor. El PRT, aunque habrá de resolver formalmente un pronunciamiento sobre la nueva propuesta zapatista, seguramente estará a favor de continuar con la lucha solidaria con el zapatismo y las demandas por las que se levantó en armas impulsando y participando en el frente de izquierda. Con las críticas que el propio Marcos ha hecho al sectarismo y aquellos "métodos políticos que combatimos" con que se ha venido impulsando el frente amplio opositor por algunas corrientes, se facilita el que también el PRT y seguramente todo un sector de izquierda que participó en la CND oponiéndose al sectarismo, ahora pueda participar también en los esfuerzos por construir el frente amplio opositor. Lucha por el poder, democracia y fin del sistema de partido de Estado.

Otro aspecto polémico de la Cuarta Declaración es la contundente afirmación de que el Frente Zapatista no lucha por el poder. Aparentemente, es contradictorio que una fuerza que ha surgido planteando el fin del sistema de partido de Estado, que le ha declarado incluso la guerra al actual Gobierno, que ha denunciado la responsabilidad del Gobierno y del actual sistema en los males que aquejan al pueblo, que ha reclamado la salida de Salinas y de este Gobierno, que plantea conquistar la democracia, parece contradictorio, repetimos, que esa misma fuerza diga que no lucha por la toma del poder.

Contra el sistema de partido de Estado

Sería equivocado y limitado convertir al zapatismo en una fuerza de presión para lograr cambios o en mero instrumento de presión y reclamo moral para obtener algunas reivindicaciones particulares, gremiales o sectoriales. Pero no es lo que el zapatismo ha significado, especialmente desde el levantamiento de enero de 1994. Precisamente contra los que se cubren con un lenguaje supuestamente radical para limitarse a la lucha reivindicativa gremial, el zapatismo ha llamado a dar una lucha política, nacional, mostrándose como ejemplo al decir que sus demandas no son sectoriales o limitadas a algunos municipios de Chiapas.

Entendemos, por tanto, que para obtener las demandas levantadas por el EZLN y los objetivos planteados hay que dar una lucha fundamental contra el poder, contra el sistema de partido de Estado. Esto ha sido obvio en todo el trayecto de lucha del EZLN. Se requiere acabar con el actual sistema de partido de Estado. No son suficientes algunas conquistas parciales. Acabar con el actual poder, sustituirlo por el poder del pueblo —como plantea la Cuarta Declaración— no es contradictorio con afirmar que el Frente Zapatista no quiere la toma del poder. Efectivamente, la conquista de la democracia no es la mera alternancia de partidos en el poder, por más democrático que parezca o se diga determinado partido. En este sentido, nuestro objetivo no puede ser simplemente sustituir en el actual poder al PRI para poner al EZLN o ahora al FZLN.

Es común que algunos partidos identifiquen la conquista de la democracia con la conquista del poder precisamente para esos partidos. Pero esto no es necesariamente la democracia sino que corre el riesgo de convertirse exactamente en lo opuesto, pues cuando un partido se plantea como objetivo conquistar el poder para sí, toda otra consideración democrática puede ser subordinada a ese objetivo. Entendemos este concepto como parte de nuestra historia como corriente política pues combatimos desde nuestro surgimiento la equivocada identificación entre la

supuesta existencia del socialismo y del poder obrero, con la real existencia del poder de un partido y una burocracia a costa y encima de los trabajadores (aunque se denominara a sí mismo como comunista).

En este sentido, sí podemos coincidir en que no luchamos por el poder. Por esta razón, por cierto, es que tampoco consideramos como parte de la definición de lo que debe ser un partido revolucionario la toma del poder para sí, como insiste en señalar Marcos en sus mensajes.

Que la convocatoria no se trata, sin embargo, de un movimiento político, que no entiende la necesidad de la lucha contra el actual poder y la necesidad de su eliminación, lo confirma la misma Cuarta Declaración en varios de sus enunciados (contra la centralización del poder, de nuevo la idea de que el que mande mande obedeciendo o el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, etc.) Entendemos el planteamiento zapatista como más allá de una lucha reivindicativa o destinada a ser la conciencia moral de los políticos (como algunos obsesivamente quieren limitarla), sino ciertamente para luchar por un nuevo poder, no para el Frente Zapatista, sino para el pueblo reconociendo la pluralidad (regional, política, étnica, cultural que se hace cada vez mas evidente en los últimos tiempos) como implica el planteamiento de oponerse a la centralización del poder.

Y esto tiene que ver con otra concepción que sustenta esta polémica tesis y que se encuentra en varios documentos del EZLN. Nos referimos particularmente al de *Los Espejos*, pero que es una idea presente en otros más. Es la idea de que el objetivo principal en la actualidad es conquistar la democracia y por ello poner fin al sistema de partido de Estado. Es esta la razón por la que es posible y necesario impulsar un Frente Amplio Opositor que incluye una gran pluralidad no sólo política, sino social. Esa pluralidad quiere decir que entre todos podemos tener proyectos de nación particulares, incluso distintos, pero que para poder convencer al pueblo de uno u otro y conquistar su apoyo libremente se requiere de un sistema distinto, de conquistar la democracia. Por ello, pese a nuestras diferencias, todos podemos coincidir en la lucha por la democracia y el fin del sistema de partido de Estado.

Por eso, los que tenemos "el corazón, la voluntad y el pensamiento en el lado izquierdo del pecho", como dicen los zapatistas, sabemos que tenemos un proyecto propio, pero que ese proyecto propio para lograrse requiere conseguir primero el objetivo común, es decir, la democracia para que entonces se pueda luchar por convencer del conjunto de su programa en otras condiciones. Requerimos, como dice el documento de *Los Espejos*, una revolución que haga posible la Revolución. Por eso nuestro objetivo no es en sí el poder. Para esta revolución, el EZLN plantea que "no se trata de la conquista del poder o de la implantación (por vías pacíficas o violentas) de un nuevo sistema social, sino de algo anterior a una y otra. Se trata de lograr construir la antesala del mundo nuevo, un espacio donde, con igualdad de derechos y obligaciones, las distintas fuerzas políticas se *disputen* el apoyo de la mayoría de la sociedad".

Hay, finalmente, otros aspectos polémicos que contiene la Cuarta Declaración que después los propios zapatistas o el subcomandante Marcos han matizado. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la participación electoral. En la Cuarta Declaración aparecía como una definición de entrada, de principios, para participar en el Frente Zapatista. En el mensaje del 4 de marzo, el subcomandante Marcos ha aclarado que

plantean que el Frente Zapatista como tal no participe electoralmente pero que sus integrantes puedan apoyar ciertos procesos electorales. Esto acerca más a una definición táctica en torno a cada caso y no lo que parecía una definición general de no participación electoral haciendo abstracción del nivel de conciencia y organización de las masas. El problema con este planteamiento es que no debe confundir la crítica y rechazo a la actual institucionalidad con el rechazo a toda práctica democrática, incluso electoral, con la que el propio EZLN está comprometido pues es uno de los planteamientos recogidos en la Consulta Nacional para lograr un cambio en las reglas del juego político en el país. Tampoco debe confundir la crítica a la actual institucionalidad y la relación de fuerzas actual como para impulsar e imponer un poder paralelo al existente, aun cuando éste se encuentre en profunda crisis y descomposición. Ahí sí debemos distinguir lo que puede ser el nivel de conciencia y organización popular existente en regiones de Chiapas en comparación con el resto del país, incluso en regiones importantes donde el PAN (Partido Acción Nacional) está ganando elecciones. Ciertamente, hay posibilidad de que el surgimiento del Frente Zapatista pueda cerrar esta brecha nacionalmente, pero siempre a condición de que su línea de acción tome en cuenta estos desniveles de conciencia y organización populares. Todos estos aspectos seguramente continuarán discutiéndose y aclarándose en los próximos meses. Sobre algunos no está dicha la última palabra. Varios eventos ayudarán en los próximos meses a la clarificación y definición del proyecto del Frente Zapatista. Sin mencionar la evolución política en el conjunto del país, habrá que tomar en cuenta los resultados de las mesas de diálogo entre el Gobierno y el EZLN en San Andrés, nuevos encuentros nacionales de los comités civiles, el encuentro para el Frente Zapatista en junio, el Encuentro Intercontinental en julio, así como el desarrollo de la propuesta de un Movimiento para la Liberación Nacional y de un Frente de la Izquierda tal como planteó recientemente el EZLN.

INPRECOR PARA AMÉRICA LATINA n°52/abril de 1996/México



Primer Encuentro Americano contra el Neoliberalismo

Ulises Martínez Flores

“Somos el máximo desafío al neoliberalismo, el absurdo más hermoso, el delirio más irreverente, la locura más humana.”

Subcomandante Marcos

Se realizó con éxito el Encuentro Americano contra el Neoliberalismo. Con la asistencia de cerca de 300 personas, del 3 al 8 de abril pasado, tuvo lugar, en La Realidad, Chiapas, el Primer Encuentro Continental Americano contra el Neoliberalismo y por la Humanidad. El evento, preparatorio del

que esperamos reúna a personas de todo el planeta el próximo 27 de julio, contó con participantes provenientes de Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, Puerto Rico, Ecuador, Brasil, Perú, Chile, Uruguay y Argentina, así como observadores de Francia, Alemania y España.

El pequeño poblado de La Realidad, a unos kilómetros de la ciudad de San Cristóbal de las Casas y una de las múltiples puertas de entrada a la Selva Lacandona, dio la bienvenida a esa heterogénea muchedumbre con una manta que mostraba con orgullo una estrella rojinegra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la leyenda: "Bienvenidos al Encuentro Continental en el Aguascalientes de La Realidad, Chiapas".

Arribar al lugar no fue fácil; a las dificultades del terreno, hubieron de agregarse las que el Gobierno mexicano establece al mantener el cerco militar en el territorio bajo control zapatista. Eso hizo que los trabajos se iniciaran con 24 horas de retraso, después de que los invitados al Encuentro lograran pasar el puesto de control que las autoridades migratorias mexicanas han instalado en las cercanías de La Realidad y a pesar de los vuelos rasantes que aviones de la Fuerza Aérea Mexicana realizan, casi ya como rutina, sobre esa comunidad zapatista.

Pero el sueño se volvía realidad en La Realidad: el grito zapatista de "¡Ya basta!" volvía a ser compartido por voces de muy diversas latitudes.

La voz de arranque de los trabajos la dio el comandante Moisés, quien al filo del mediodía de ese 4 de abril ocupó el presidium del Encuentro junto con otros seis integrantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN y acompañado también de los miembros de la Comisión Organizadora del evento. "La esperanza que nosotros queremos es que la pobreza no exista en el mundo. La revolución sigue, no se detendrá [...]. Es un problema de todos la desigualdad. Sabemos que tuvo un principio, alguien lo hizo, un humano, y nosotros somos humanos, y podemos ponerle fin", afirmó el comandante Moisés, antes de dar paso a la lectura de diversos mensajes de salutación y dar por iniciados los trabajos del Encuentro; estos se desarrollaron a través de cinco mesas de trabajo, durante esa tarde y los siguientes tres días, en que los asistentes sesionaron para discutir en torno a la manera en que se vive y se resiste al neoliberalismo en los planos económico, político, social, cultural e indígena, más una sexta mesa, que a última hora se organizó, para enfocar el tema desde la perspectiva juvenil.

Ese primer día de actividad se cerró con un discurso del subcomandante Marcos, que fue dedicado al compañero Javier Elorriaga Berdegue y a los otros presuntos zapatistas que el gobierno mexicano mantiene presos tras la ofensiva militar del 9 de febrero de 1995.

En su intervención, el jefe militar zapatista denunció la constante presencia militar del Gobierno mexicano, que cuenta con el apoyo de otros países: "la Selva Lacandona ya ha sido visitada por diversas representaciones de los gobiernos de sus países", informó a los asistentes; "nos han visitado los aviones bombarderos, los helicópteros artillados, los tanques de guerra, los satélites espías, los asesores militares y los agentes de todas las dependencias de

espionaje de varios países [...]. Los poderosos del mundo se molestan por nuestra existencia y nos honran con su amenaza. Aciertan, el desafío zapatista es un desafío mundial”.

La internacional de la Esperanza

Más adelante, Marcos se refirió al neoliberalismo como “la internacional de la muerte” que ofrece como doctrina mundial “la rendición y la indiferencia como únicas formas de inclusión; la muerte y el olvido como único futuro para los excluidos, es decir, para las mayorías”. La lucha contra el neoliberalismo es vista por el EZLN como un punto en el que en la actualidad es posible encontrar la unidad de los pueblos para oponer a esa internacional de la muerte lo que el zapatismo ha dado por llamar la Internacional de la Esperanza.

Con esa perspectiva, el subcomandante zapatista se refirió en su discurso a diversos ejemplos que en el lapso de sólo dos días muestran que la resistencia al neoliberalismo en suelo americano es una constante: “[...] en Bolivia, miles de personas se manifestaron en demanda de aumentos salariales y en contra del proyecto de privatización de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos[...]; en Paraguay, los trabajadores iniciaron una huelga general en demanda de aumento salarial del 31% y convocaron a un referéndum sobre las privatizaciones [...]; más de cinco mil estudiantes brasilenos fueron reprimidos por la policía al protestar por la política educativa del presidente Fernando Henrique Cardoso [...]; en Chile, miles de agricultores bloquearon las carreteras del sur del país, en protesta por su inminente ingreso al Mercado Común del Sur, lo que significará el desempleo de más de 800.000 campesinos [...]; centenares de vendedores ambulantes se enfrentaron a la policía peruana cuando pretendían desalojarlos del centro histórico de Lima [...]; fuerzas policíacas antimotines reprimieron a miles de costarricenses en la ciudad de Santa Ana que se oponían a la instalación de un vertedero de basura [...]”.

Ahí estaba el reto para el Encuentro Continental Americano: ¿qué hacer para avanzar en la unificación de esas luchas contra ese enemigo común, el neoliberalismo?

Durante el 5, 6 y 7 de abril, los viejos y nuevos habitantes de La Realidad discutieron, convivieron, bailaron, se enojaron y se volvieron a contentar para, finalmente, el 8 de abril, dar a conocer las conclusiones del Encuentro, que serán presentadas en el Encuentro Intercontinental del 27 de julio próximo.

Entre otros aspectos, las conclusiones de este Primer Encuentro Americano señalaron que a partir de las propuestas zapatistas ha dado comienzo “una reflexión sobre la construcción de un poder alternativo basado en nuevas formas de resistencia sustentadas en la autogestión y la autonomía” opuestos al “individualismo y utilitarismo, principios que conforman el concepto de ser humano en que se sustentan las prácticas neoliberales”. Igualmente, se manifestó la necesidad de emprender luchas conjuntas para renegociar todos los acuerdos comerciales continentales, como el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el Mercosur y el Pacto Andino.

De acuerdo con el informe final, el Encuentro cumplió con su objetivo principal: "Abrir un espacio plural de análisis, reflexión, discusión y propuestas para conocer la realidad en la que cada uno vive y, a partir de allí, buscar los caminos para su transformación".

"Lo hicimos", diría el subcomandante Marcos en la clausura del evento, "En bancas de palo, en esta inestable realidad que nos moja de sudor y de lluvia, bajo la vigilante amenaza de un avión militar, frente a la impertinencia de los vehículos militares y autoridades migratorias, y uno que otro alacrán amenazando nuestro sueño. Lo hicimos".

Y agregó: "La reunión preparatoria americana para el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo ha sido un triunfo. En lugar de limitarse a ser una reunión de preparación o ensayo, se convirtió en un encuentro en sí, en el encuentro de un continente consigo mismo. La calidad de las ponencias presentadas, el trabajo de discusión y análisis en las mesas, las relatorias y las conclusiones, marcan el final de un encuentro, la continuación de un esfuerzo y una lucha, y el comienzo de un sueño que todos hemos sonado en distintas épocas y en formas diversas [...]. Pero esta reunión preparatoria ha sido también eso, una preparación para algo que ya empieza a inquietar a los continentes europeo, asiático y oceánico. Una preparación que preocupa al Poder mundial y que le provoca un miedo que le recorre la columna vertebral de oro y mierda que lo sostiene. El Poder tratará de evitar otros encuentros como el de La Realidad. Y nosotros debemos defender este sueño, traerlo bien guardado en el bolsillo del pantalón y sacarlo cada tanto para una caricia o para un aliento [...]. Hermanos y hermanas de América: el día de hoy, 8 de abril de 1996 y en La Realidad americana, a nombre de los hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, declaro formalmente el final de esta reunión preparatoria, la continuación de la búsqueda de América y el comienzo de los preparativos para el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo que se llevará a cabo del 27 de julio al 3 de agosto de 1996 en las montañas del sureste, Chiapas, México, América, planeta Tierra, sistema solar, universo".

En La Realidad, poco a poco la vida volvió a la normalidad, a su normalidad de pueblo bajo la mira del tanque militar del ejército federal, al permanente hostigamiento de los aviones militares, a como los bulliciosos habitantes que ya se retiraban la habían encontrado cuatro días antes. Aunque también con una piedra más: la primera piedra de la Internacional de la Esperanza, que habrá de seguirse construyendo en las próximas semanas en Berlín, Sidney y Tokio, en los restantes Encuentros Continentales y arribar al final al Encuentro Intercontinental de julio, cuando el Aguascalientes de La Realidad, y los Aguascalientes de Oventic, La Garrucha y Morelia sean nuevamente sede del grito internacional de "¡Ya basta!", bajo la estrella rojinegra del EZLN.

Argentina

A 20 años del golpe

Daniel Pereyra

A las 3.10 de la madrugada del 24 de marzo de hace 20 años, los militares argentinos desencadenaron el enésimo golpe de Estado. No era un golpe más, sino el definitivo. No era obra de una facción militar, sino de las instituciones castrenses con sus mandos a la cabeza, con el pleno respaldo del gran capital nacional e internacional, de la mayoría de los políticos y de la iglesia.

De la brutal y sistemática represión que se desarrolló durante siete largos años, dan testimonio los 30.000 desaparecidos, los presos y torturados, los despedidos de su trabajo, los centenares de miles de exiliados y la práctica desaparición de toda una generación de luchadores.

Hoy todavía perduran las secuelas del golpe, no sólo por la impunidad de que gozan los genocidas, sino por las dificultades para articular la resistencia al neoliberalismo y superar el temor que subsiste en amplias capas de la población. Los retrocesos en el nivel de vida, educación, salud y cultura que se iniciaron en aquellos años han continuado bajos los diversos gobiernos que se sucedieron.

Apelar a la memoria de aquellos días, tratando de explicar lo ocurrido, es una vía necesaria para ubicarse de cara al difícil presente y futuro. Pero la historia no comienza en 1976. Hay que buscar sus raíces varias décadas antes.

Comienzo de la historia: ejército y peronismo

El Ejército argentino tiene una larga tradición de servicio a las clases dominantes. Autor de las matanzas de la Semana Trágica de Buenos Aires en 1919 y de la Patagonia en la década del 20, donde varios miles de peones en huelga fueron fusilados, comienza en 1930 el ciclo histórico de los golpes que arrebatan el poder a los civiles, poniendo en evidencia el creciente intervencionismo de los militares en la vida pública. Fuerzas armadas formadas en la escuela prusiana, con fuertes simpatías por los países fascistas europeos y con un profundo desprecio por los civiles, la cultura, las artes. Aliadas y al servicio de las clases dominantes, en particular de la oligarquía terrateniente, su rol siempre ha sido el de gran represor de los explotados y oprimidos, ya desde el siglo pasado con el exterminio de los pobladores indígenas para facilitar el desarrollo de los inmensos latifundios pampeanos.

El golpe de 1943 tiene lugar en circunstancias atípicas. En medio de la Segunda Guerra Mundial, en extremo debilitados los lazos con Gran Bretaña —la potencia dominante—, en crisis la principal fuente de ingresos externos del agro, con un fuerte desarrollo de la industria sustitutiva de las importaciones inexistentes y en crisis el sistema partidario por las divisiones respecto de la guerra y el modelo de país a desarrollar, el ejército asume un rol bonapartista de arbitraje y control de la sociedad en beneficio de los sectores dominantes. Los militares vislumbran el peligro de una explosión social incontrolable en el marco de una postguerra particularmente crítica, con una clase obrera en rápida expansión e inician una experiencia inédita en Argentina: un ejército y gobier-

no populista, enemigo declarado de la izquierda, y aplicando al mismo tiempo medidas de ayuda social, legislación laboral avanzada y sindicalismo estatizado, todo ello apoyado en una situación económica excepcionalmente favorable. Entre 1943 y 1946 el Gobierno otorga el aguinaldo (paga extraordinaria), las vacaciones anuales se cumplen a rajatabla, así como la legislación de accidentes laborales, la organización sindical se impone en las empresas frenando la prepotencia de jefes y capataces, se hacen efectivos los convenios colectivos por gremio a nivel nacional, suben los salarios, y al mismo tiempo la afiliación sindical se torna obligatoria con descuento de la cuota efectuada por la patronal con destino a los sindicatos únicos con personalidad jurídica otorgada por el Ministerio de Trabajo. En ese período se barrieron del sindicalismo prácticamente a todas las tendencias opositoras, imponiéndose una ausencia total de democracia en las organizaciones obreras. El fácil acceso a la vivienda propia y la existencia de una importante ayuda social dirigida por Evita completa el cuadro. Estos hechos serán decisivos para la formación de una memoria histórica que básicamente aún hoy perdura asociando peronismo y bienestar social. La unidad entre Perón, jefe de Gobierno y del movimiento peronista, la burocracia sindical y las notables mejoras obtenidas se hace total. La debilidad de los partidos y sindicatos de izquierda, su profundo reformismo y su supeditación durante la guerra a Estados Unidos y Gran Bretaña (y a la URSS en el caso del PC) que les hizo boicotear una gran huelga del gremio de la carne, fueron bazas decisivas para el éxito de la empresa populista de los militares. El entonces coronel Perón dirigió esa política que culminó en 1946 con su elección como presidente, contando desde entonces con una todopoderosa burocracia sindical que mantuvo estatizado y controlado al movimiento obrero, tarea realmente fácil ya que contaba con la adhesión de la inmensa mayoría de los trabajadores al Gobierno peronista. Esta es una de las claves de la política argentina del último medio siglo: un gobierno de inicial inspiración militar con un discurso nacionalista y pseudo antimperialista, con fuerte apoyo popular y de los trabajadores, que desarrolló una política populista, concediendo desde el Estado numerosas reivindicaciones no logradas por medio de la organización y la lucha. El resultado fue una paz social de varios años, altamente apreciada por la patronal y todos los sectores dominantes, incluido el ejército, la iglesia y las potencias imperialistas.

Ofensiva contra los trabajadores y derrocamiento de Perón

Esta situación comienza a cambiar en 1953, cuando ya reconstituidas las redes del comercio internacional y ejerciendo Estados Unidos su rol dominante en América Latina, presiona a Argentina que comienza a ceder ante sus demandas. El fracaso de la economía sustitutiva de las importaciones ante la competencia internacional se hace evidente en toda América Latina y la dependencia respecto del capital extranjero se refuerza. En el frente interno, la alianza de los partidos políticos opositores, la iglesia y sectores de las fuerzas armadas con los representantes norteamericanos contribuye a deteriorar la situación ya difícil por la crisis económica y la presencia de una incipiente protesta de sectores sindicales.

En junio de 1955 la Marina lanza un golpe que fracasa, no sin antes cometer una matanza de civiles la aviación naval al ametrallar y bombardear la Plaza de Mayo. Primera matanza de la nueva etapa, luego de la convivencia de civiles y militares

desde 1943 que inicia el camino genocida que lleva hasta 1976. Con este golpe se retoma el rol histórico de las fuerzas armadas al servicio directo de las clases dominantes y de sus planes económicos y se establece una fuerte ligazón con los militares de Estados Unidos que ya no se abandonará. El golpe de 1955 triunfa en su segundo intento en septiembre de ese año y se caracteriza por lo cruento de su accionar, al atacar brutalmente barrios obreros de Rosario y Avellaneda, fusilar a militares y civiles peronistas, intervenir sindicatos y prohibir de hecho la actividad sindical. Las Fuerzas Armadas introducen así la violencia institucional contra las masas desarmadas, que dará lugar luego a sucesivas respuestas populares. El peronismo se derrumba sin oponer resistencia ante el golpe. Entonces comenzó su proscripción como movimiento y el exilio de Perón que duró hasta 1973, lo que consolidó su carácter de líder de los humildes. Es a comienzos de 1956 cuando surge la resistencia, consistente en una reorganización ilegal del movimiento sindical y en la colocación masiva de bombas fabricadas artesanalmente, con escaso poder destructor y prácticamente sin causar víctimas. En su inmensa mayoría los participantes de la reorganización sindical eran peronistas, aunque también participaron diversos sectores de izquierda (trotskistas de Palabra Obrera y otros). El peronismo institucional, los ex altos cargos del Gobierno y el sindicalismo, salvo contadas excepciones, brilló por su ausencia en este proceso.

Una nueva burocracia sindical peronista tomó el testigo y se hizo con el control de los sindicatos tras las elecciones sindicales convocadas por los militares, ya incapaces de frenar el creciente descontento social. En 1958 los militares llaman a elecciones con proscripción del peronismo, que da su voto al radical Frondizi. Las grandes huelgas de 1959 marcan el fin de una etapa caracterizada por las movilizaciones sociales y el comienzo de la renovada influencia burocrática. El Gobierno es jaqueado por los militares descontentos por el protagonismo creciente del peronismo y finalmente destituido en 1962 dando paso a varios gobiernos civiles extremadamente débiles. El presidente radical Illia, elegido en 1963, será derribado en 1966 por otro golpe de los militares que ya no dejarán el gobierno hasta 1973. El general Onganía toma el poder con el apoyo mayoritario de la burocracia sindical y la crisis interna del movimiento peronista se agudiza. La represión se desata brutalmente sobre el movimiento estudiantil y contra los movimientos de huelgas obreras.

A partir del golpe de Onganía una serie de acontecimientos jalona el camino de un ascenso de las luchas populares que se sucederían hasta 1975 con algunos altibajos y que básicamente rechazan la intervención militar y defienden las conquistas de los trabajadores.

La división de la CGT con el surgimiento de la CGT de los Argentinos disidente de la burocracia, proporcionó un referente a los conflictos que surgían. El mayoritario componente peronista de la CGT-A dio fuerza a los sectores combativos de dicho movimiento. El desarrollo de un sindicalismo clasista en la provincia de Córdoba, zona eminentemente industrial, dotó de una vanguardia muy combativa a los trabajadores de todo el país. La ruptura del PC con el surgimiento del PCR (Partido Comunista Revolucionario) en 1967 y la crisis del trotskista PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) en 1968 con el nacimiento del PRT-El Combatiente, dio lugar a la formación de organizaciones de izquierda partidarias de la lucha armada. Ya habían surgido varios grupos armados pero de escasa entidad. En

todas estas crisis fue determinante el surgimiento de sectores que cuestionaban la política de sus direcciones y se reivindicaban del castrismo y la revolución.

La represión a varias movilizaciones estudiantiles, con dos estudiantes muertos por la policía, combinadas con huelgas obreras en diversas regiones del país, culmina en mayo de 1969 con *El Cordobazo*, huelga general semi insurreccional, aunque prácticamente desarmada. Las masas se apoderan de la ciudad y la policía tiene que refugiarse en sus cuarteles. La respuesta es la intervención masiva del ejército, la represión al movimiento sindical y la prisión de los dirigentes combativos.

Es a partir de entonces cuando surgen con fuerza los movimientos armados: FAP y FAR luego subsumidos en Montoneros, el PRT-ERP, FAL, OCPO, GOR, la Fracción Roja del PRT, desarrollan, desde distintas concepciones políticas e ideológicas, la lucha armada contra la dictadura a cuya cabeza se sucedieron los generales Onganía, Levingston y Lanusse. La reivindicación básica de las organizaciones peronistas es el retorno del general Perón (quien las alentaba discretamente), y de las organizaciones de izquierda es esencialmente un programa de tipo socialista, pero lo que las identifica a los ojos del pueblo es su oposición a la dictadura. Y es lo que hace popular sus acciones, lo que les permite sobrevivir a la represión y crecer pese a las bajas que sufren. Las distintas raíces políticas peronistas, comunistas, castristas o trotskistas, las diferentes acciones de aniquilamiento militar, de apoyo a luchas populares o de propaganda armada, son visualizadas como diferencias secundarias frente al objetivo deseado por la inmensa mayoría: expulsar del Gobierno a la odiada dictadura.

Reincorporación de Perón al escenario político

En 1972 Lanusse toma conciencia de la necesidad de un viraje político readmitiendo a Perón en la esfera del poder, como única forma de frenar el ascenso de las masas. Con tal fin convoca a elecciones para 1973, otorgando legalidad al peronismo al lograr un llamado de Perón a cesar las luchas obreras. Se produce una gran movilización electoral que lleva al peronismo a la victoria en esos comicios con el ascenso a la presidencia del candidato Cámpora, seguido durante varios meses de luchas y conflictos con fuerte protagonismo de la izquierda del peronismo y de los Montoneros. Pero el fiel de la balanza ya se ha inclinado hacia la derecha. Alejadas las masas del centro de las reivindicaciones con el retorno de Perón y cesado el accionar armado, los conflictos son encausados hacia el camino institucional. El rol de Perón se clarifica: Cámpora es obligado a renunciar con el consiguiente retroceso de los sectores de la izquierda peronista y es el mismo Perón el que asume la presidencia en octubre de 1973, ya adentrado en el último año de su vida (fallece en julio del año siguiente) y acompañado en la vicepresidencia por su esperpéntica esposa Isabel Martínez. Poco antes de morir se produce su ruptura pública con los Montoneros a los que expulsa de la Plaza de Mayo.

Entretanto las fuerzas armadas amparadas por el paraguas institucional del Gobierno peronista lamían sus heridas y preparaban su retorno al poder y el accionar represivo que reiniciarán muy rápidamente.

La casi totalidad de las organizaciones guerrilleras suspendieron su accionar cuando Cámpora fue electo y se volcaron a la actividad política pública, sea bajo su nombre o a través de organizaciones de masas. Con su prensa en los kioscos, locales abiertos y

actos públicos, contaban con una audiencia nada despreciable. Las banderas de Montoneros y el ERP así como las de otras organizaciones estaban presentes en todas las manifestaciones y eran decenas de miles las personas que las seguían. Recogían así el fruto de su lucha contra la dictadura. Surgieron en esa época organizaciones como la Juventud Trabajadora Peronista, frente sindical de los Montoneros de oposición a la burocracia sindical o el Movimiento Sindical de Bases, órgano equivalente inspirado por el PRT-ERP; esta organización creó el Frente Antimperialista y Socialista que realizó varios congresos con asistencia de miles de delegados que representaban a buena parte de la vanguardia sindical y política del país.

No obstante estos éxitos en el trabajo político el PRT-ERP decidió en septiembre de 1973 reanudar el accionar armado atentando contra varias guarniciones del ejército, lo que no solo lo colocó en el punto de mira de la represión, sino que comenzó a enajenarle el respaldo popular con que contaba. Era incomprensible el ataque armado a un régimen respaldado por la inmensa mayoría de la población. Los Montoneros tomaron igual decisión en 1974, en su caso luego de haber sufrido numerosas agresiones por parte del Gobierno y las fuerzas represivas. La escalada iniciada por el ERP se generalizó poco a poco con el aporte de otras organizaciones armadas. En esta etapa las luchas obreras que se reiniciaron contra los planes económicos del Gobierno peronista y su aliada la burocracia, ya no marcharon al unísono con la lucha armada. Por el contrario y particularmente en el caso del ERP, muchos activistas sindicales fueron retirados de sus tareas para engrosar las unidades combatientes. El intento guerrillero rural en la provincia de Tucumán que impulsó esta organización fue el destino de muchos militantes sustraídos del trabajo de masas. En 1975 la guerrilla tucumana fue combatida y aniquilada por el Ejército siguiendo órdenes expresas del Gobierno de Isabel, quien dio así cobertura legal a una brutal represión que se extendió a toda la población trabajadora de la provincia. La sangría ocasionada al ERP por esa derrota y una posterior operación frustrada en el Gran Buenos Aires contra una importante guarnición del ejército, dañaron severamente a la organización en vísperas del golpe del 24 de marzo de 1976, dejando sumamente mermada su capacidad militar y política.

El carácter extremadamente militarista de ERP y Montoneros en esta etapa está demostrado por sus acciones, consistentes básicamente en grandes operativos contra instalaciones militares, con el empleo de numerosos combatientes, que no eran visualizados por los sectores populares como parte de su lucha y en muchos casos, por el contrario, considerado como un obstáculo. Además se trataba de ataques a un gobierno formalmente democrático, elegido por mayoría popular y considerado legítimo pese a sus medidas antipopulares.

Las luchas populares y la guerra sucia: las AAA

Las medidas que tomó el Gobierno de Isabel en la línea del gran capital, tendentes a controlar a las bases combativas y a reducir los salarios, impulsan un nuevo ascenso de las luchas obreras. En el enfrentamiento con la burocracia se refuerzan los sindicatos clasistas y surgen organismos opositores allí donde la burocracia detenta el poder. Las llamadas Coordinadoras, expresión sindical surgida directamente de asambleas de base y los sindicatos clasistas, lograron impulsar grandes movimien-

tos de huelga en 1975, poniendo en jaque al Gobierno y la burocracia. No obstante esas expresiones combativas y democráticas estaban todavía limitadas a algunos sectores mas combativos y no lograron reunir y centralizar las luchas de la mayoría, ni terminar con el poderío de la burocracia, que aunque debilitada seguía atrincherada en la fuerza de sus aparatos y sus inmensos medios materiales.

Por otra parte la extrema derecha del peronismo que controlaba el aparato del Estado, unida con sectores de la burocracia sindical y política, así como policías y militares adictos al régimen, desataron la guerra sucia contra la oposición sindical y política, con el conocimiento y beneplácito del ejército y del Gobierno. A lo largo de tres años, comenzando en 1973, primero en forma anónima y luego bajo la sigla de las AAA (Alianza Anticomunista Argentina) asesinaron a mas de 2.000 dirigentes y activistas y realizaron numerosos atentados contra locales sindicales y políticos progresistas.

La jefatura de esta siniestra organización era detentada por López Rega, ministro de Bienestar Social y hombre de confianza de Perón y por José Rucci, secretario general de la CGT. La dirección operativa fue confiada al comisario Villar, jefe de la Policía Federal, quien aportó los recursos de esta poderosa institución. Las listas públicas de condenados por las AAA fueron la causa de numerosos exilios desde ese año, así como de abandono de domicilios y puestos de trabajo, contribuyendo grandemente a desorganizar el movimiento popular. En las postrimerías de esta etapa, en 1975, el Ejército de la guarnición de Córdoba puso en marcha el Comando Libertadores de América, versión castrense de las AAA que operó esencialmente en esa provincia y con directa participación de personal militar. Demás está decir que esta guerra sucia fue acompañada por una espiral de represión abierta contra las luchas populares, en un accionar combinado de la burocracia y la policía.

La situación era contradictoria: por un lado todas las organizaciones populares jaqueadas por la represión y debilitadas por los asesinatos, despidos y medidas obligadas de seguridad que conllevaban pérdida de puestos de trabajo y de protagonismo sindical o político. Por otra parte, un movimiento sindical antiburocrático y clasista en ascenso, con organismos alternativos en proceso de crecimiento pero sin una dirección centralizada y fuertemente hostigados por la guerra sucia. Así se llega al golpe del 24 de marzo de 1976.

Cabe formular una pregunta inicial. Si las organizaciones armadas estaban muy debilitadas, si el movimiento sindical combativo no contaba aun con una estructura organizada ni centralizada, si el Gobierno peronista impulsaba una política económica favorable a los intereses del gran capital, si las acción de las AAA habían dañado gravemente el tejido social y sus organizaciones políticas, sociales y culturales, ¿qué necesidad tenían las fuerzas armadas de producir una ruptura del orden constitucional y un genocidio de las dimensiones conocidas, asumiendo los militares la responsabilidad directa del gobierno?

El por qué del golpe

La respuesta es compleja y el camino elegido surgió de todas las anteriores experiencias de los militares.

Tanto en el golpe de 1955 como en el de 1966, las luchas populares y nuevas formas de organización surgieron a poco de haberse impuesto el golpe, pese a la

represión inicial. La violencia institucional represiva fue respondida de forma creciente por una violencia popular más y más desarrollada.

Por otra parte el entorno latinoamericano intranquilizaba a los altos mandos castrenses. La presencia cubana y las numerosas guerrillas que en los 60 y 70 existían en el continente, la frustrada presencia guerrillera del Che en Bolivia, a las puertas mismas de Argentina, les hacían temer el peligro de un contagio incontrolable. De todas formas, ante el peligro armado se sentían capacitados para enfrentarse con éxito y se preparaban desde los años 50, según relata el general Díaz Bessone en su libro *La guerra revolucionaria en Argentina*.

Pero la mayor de sus preocupaciones y desde luego de la patronal y los políticos del sistema, era la radicalización de los trabajadores y amplias capas populares. El líder radical Balbín llegó a decir que había que erradicar a la guerrilla fabril, en clara alusión al sindicalismo combativo. Fallecido Perón, desprestigiados al máximo sus sucesores políticos, en retroceso la burocracia sindical, había un campo expedito para que la vanguardia sindical y política jugara un rol protagónico en las luchas sociales que sin duda se avecinaban.

Los ejemplos de *El Cordobazo* y de las grandes huelgas generales, el surgimiento de las coordinadoras en pleno Buenos Aires, la presencia del sindicalismo clasista, la radicalización de amplios sectores medios, todo ello posiblemente unido en el futuro a nuevos brotes armados con una mayor sintonía con las luchas populares, era lo que más los impulsaba a buscar una solución definitiva.

Simultáneamente los grandes patrones del agro, la industria y la banca reclamaban insistentemente paz y orden, y la aplicación sin trabas de un plan económico que el ministro peronista Rodrigo había intentado imponer sin éxito, jaqueado por las luchas del 75.

La crisis de credibilidad del corrupto e incapaz Gobierno de Isabel y el debilitado accionar de la guerrilla fueron excusas válidas, magnificadas por la prensa, para desencadenar el golpe. Las características de éste dan cuenta de la gravedad que los mandos atribuían a la situación.

Por ello golpe no fue de un sector de las fuerzas armadas, sino de Ejército, Marina y Aeronáutica unidas, con todos sus efectivos y bajo el mando de sus cúpulas y sus comandantes en jefe. Los planes operativos se prepararon meses antes, con asignación de zonas y tareas para cada cuerpo y oficial de mando. Se desató una operación de guerra psicológica a través de todos los medios que logró que una parte de la población viera con simpatía, o al menos con alivio, la intervención militar.

Y en el plano económico se designó como responsable máximo a José Martínez de Hoz, un típico representante de las clases dominantes argentinas, que unía en su persona las características de gran terrateniente de familia tradicional y empresario, además de político de derechas.

La represión se planificó teniendo como principal objetivo sembrar el terror en la población, al tiempo que desarticular las organizaciones populares, en primer lugar las sindicales combativas y aniquilar las ya debilitadas filas guerrilleras.

Además de la ocupación permanente del territorio por las fuerzas represivas, de un virtual estado de sitio y de control policial, se instauró un sistema operativo

consistente en el allanamiento y detención de personas totalmente clandestino, con agentes no identificados ni uniformados, con extrema violencia, seguido del secuestro, tortura y muerte del detenido y finalizando con el secreto sobre su destino. La figura del *desaparecido* sigue aún vigente, puesto que no se ha dado cuenta oficial de las 30.000 personas que corrieron ese trágico destino. Numerosos campos de detención y tortura se instalaron en dependencias militares y policiales, desde los cuales se disponía el destino final de los secuestrados. Los fusilamientos y enterramientos clandestinos, los vuelos arrojando a personas vivas al mar, la quema de cadáveres de muertos en la tortura, el simulacro de muerte en enfrentamiento, son varias de las formas elegidas para mantener el secreto sobre el destino de los detenidos desaparecidos. Incluso con los presos políticos legales procedentes del período anterior al golpe se siguió una política de durísimo hostigamiento, que en algunos casos terminó en suicidio o en asesinato directo, previo traslado fuera de la cárcel, disfrazado de intento de fuga u otro pretexto.

El cierre casi perfecto de este plan estaba dado por el pacto de sangre de toda la oficialidad, que rotativamente participó en las torturas y crímenes cometidos, y ante los cuales daban el ejemplo los máximos jefes visitando las salas de tortura y los campos de detención ilegal, e incluso participando en las ejecuciones sumarias.

No faltó en este operativo siniestro el apoyo espiritual de la iglesia católica, que a través de sus capellanes confortaba a los que regresaban de sus misiones asesinas, y que desde su cúpula de cardenales y obispos —con algunas valientes excepciones— protegió y ocultó los crímenes que se cometían, rechazando los pedidos de ayuda que formulaban los familiares de los desaparecidos.

La patronal por su parte contribuyó entregando listas de activistas e incluso de trabajadores *rebeldes* o de los que sustituían como delegados a los caídos. Muchos fueron detenidos directamente en las oficinas de personal donde habían sido citados por los directivos de la empresa.

En cuanto a los partidos políticos, además del apoyo implícito o explícito que brindaron a la dictadura, fueron muchos los conservadores, radicales y democristianos, que participaron directamente en puestos de gobierno.

Junto con el objetivo de implantar un terror permanente, las fuerzas armadas pretendían hacer desaparecer el recuerdo de los activistas y sus luchas. Contribuyó a sus propósitos un numeroso sector de la población que no quería enterarse de lo que ocurría y prefería la comodidad de preservar su situación personal antes que comprometerse en la lucha contra la injusticia, siquiera fuera a nivel de los más elementales derechos humanos.

Durante años el recuerdo de lo ocurrido y la reivindicación de los caídos corrió por cuenta de un número reducido de personas muy valientes, que asumieron el hecho de que no tenían nada que perder: las Madres de Plaza de Mayo. Algunas de ellas perdieron lo único que les quedaba, la vida, ya que fueron también secuestradas y asesinadas. No obstante persistieron en su denuncia, y con su presencia cada jueves en la Plaza lograron mantener viva la memoria.

Después de la retirada de los militares, surgió otra organización, también muy valiente, la Asociación de ex detenidos-desaparecidos, formada por

supervivientes de los campos que proporcionaron su testimonio sobre los infiernos de los que son testigos supervivientes.

Recientemente se ha creado HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) formada por hijos e hijas de desaparecidos, algunos nacidos en cautiverio, que reivindica la memoria de sus padres como legítimos luchadores. A 20 años del golpe, la memoria de la generación desaparecida renace con fuerza.

El hoy y el mañana

Hoy, un Gobierno arropado con el recuerdo histórico del peronismo, aplica la línea económica neoliberal, como pretendió hacer Rodrigo, el ministro de Isabel, hace 20 años. La misma línea que aplicó Martínez de Hoz bajo la dictadura.

Los gobiernos civiles del radical Alfonsín y el peronista Menem contribuyeron de diversa forma a mantener la impunidad de los criminales que asesinaron a una generación y que ahora se pasean por las calles argentinas.

El resultado de estos 20 años posteriores al golpe son una baja brutal del nivel de vida para la mayoría y un enriquecimiento enorme de una ínfima minoría, gran capital y *personeros* del Gobierno. El pago de la deuda externa como máxima sagrada al servicio de la banca internacional y la liquidación de toda la propiedad estatal en beneficio de esos pagos y de los beneficios de unos pocos aprovechados.

La educación, la sanidad, la cultura, la vivienda han pasado a ser privilegios de minorías. Para garantizar ese orden, se refuerza el aparato represivo y policías de gatillo fácil se enfrentan a las luchas populares y a la juventud sospechosa de rebeldía.

Pero la memoria y la resistencia crecen, lentamente, pero crecen: 100.000 personas, en su mayoría jóvenes, acompañaron a las Madres para recordar el aniversario del golpe. El hilo conductor del pasado y el presente está muy bien simbolizado en estas palabras de los ex detenidos-desaparecidos: "Esta democracia, que es parte de nuestra lucha por la dignidad y la justicia, trae no obstante, las mataduras del terrorismo de Estado, exhibe su carácter de clase, torna mas imperiosa que nunca, la necesidad de rediscutir (y rehacer) aquella revolución de la que se hablaba en los 70".

Por eso, la huella de la resistencia. Nuestra huella, salvada en la ronda de los jueves, abonada en cada lucha por salario, techo, salud, educación, justicia, que se libra por más que las fuerzas sean desiguales, ensanchada por generaciones de jóvenes que quieren cambiar esta realidad. Los ex detenidos-desaparecidos somos militantes políticos opositores desde hace mas de 20 años a esto que el 24 de marzo nos impuso a sangre y fuego, porque resultó que estábamos en el camino cierto y si hacíamos la revolución..... otro gallo cantaría. Nuestro compromiso antes, durante 20 años, después y para el futuro, es enorgullecernos de nuestro pasado-presente de lucha, denunciar a los asesinos y sus cómplices donde se encuentren, a la vuelta de la esquina o en la casa de Gobierno, sabernos parte de una historia revolucionaria que llegará a su madurez si no abandonamos esta huella."



Alemania

Claus Offe

"Yo no veo progreso"

Entrevista de Sandro Orlando

El profesor Claus Offe es uno de los más destacados sociólogos de la Alemania contemporánea. Asistente de Jurgen Habermas, desde fines de los años 60, Offe ha dedicado sucesivas obras a estudiar las contradicciones del desarrollo de los países capitalistas avanzados, concentrándose particularmente en las regulaciones del mercado de trabajo y el Estado de Bienestar. En los últimos años, sus investigaciones se han centrado en la Alemania reunificada y en el estudio comparado de los países de Europa Central y Oriental. Actualmente es profesor de Sociología Política en la Universidad Humboldt de Berlín.

Sandro Orlando: Profesor Offe, comencemos con la crisis del "modelo alemán": el paro ha alcanzado niveles históricos, el sistema de beneficios sociales no puede ser sufragado y la economía alemana pierde competitividad en el mercado mundial. Muchos sostienen que el origen de todos estos males es el alto coste del trabajo. ¿La medida más urgente es rebajar ese coste?

Claus Offe: No se trata de un argumento serio. No existe una relación causal que recomiende la reducción del coste del trabajo como instrumento de una política de empleo eficaz. Tanto más cuanto que medidas de ese tipo reforzarán la resistencia de los empresarios a introducir innovaciones, eliminando así la función motivante que puede tener la existencia de salarios más altos.

S.O.: Es un hecho que el coste del trabajo en Alemania es uno de los más altos del mundo. Y que el coste agregado ha crecido enormemente en los últimos veinte años, Hoy, a cada 100 unidades de salario directo hay que añadir otras 80 de contribuciones a la Seguridad Social, indemnizaciones por paro y enfermedad, jubilaciones ...

C.O.: Es el aumento del paro lo que ha hecho crecer estos costes. En principio, cuantas más sean las personas sin trabajo que disfruten de prestaciones sociales, como el subsidio de paro, mayor debe ser la parte alícuota a pagar por el resto. Una de las características del sistema del bienestar alemán es que es financiado, al menos en dos tercios, por los trabajadores y los empresarios y no a través del ingreso fiscal. En teoría, por lo tanto, si el paro fuera nulo el coste agregado del trabajo debería tender a desaparecer. Viceversa, cuanto más aumente este coste, mayor será el paro. Es un círculo vicioso, un increíble éxito de las leyes de la economía de mercado: el paro acaba por reproducirse a sí mismo. El proceso de reunificación de las dos alemanias no ha hecho sino acelerar esta dinámica. Después de 1990, el número de puestos de trabajo en el Este ha pasado de 9 a 5 millones, lo que en términos reales corresponde a una tasa de paro del 40%, convirtiéndose en una inmensa carga sobre el conjunto del sistema social alemán.

S.O.: ¿Existe una correlación directa entre el elevado coste del trabajo y la pérdida de competitividad de los productos alemanes en el mercado mundial?

C.O.: Alemania es un país exportador, por lo tanto su economía depende en gran parte de su competitividad a nivel internacional. Pero no ha sido sólo el encarecimiento del coste agregado del trabajo el que ha aumentado la desventaja de los productos alemanes en el extranjero. Hay otros dos factores más importantes: la fuerte revaluación del marco y las altas tasas de interés. Desde 1993, por ejemplo, los salarios reales, incluso a pesar de la carga agregada, sólo han aumentado unos pocos puntos porcentuales. Pero en este mismo período, los productos alemanes se han encarecido en el mercado americano en más de un 10% como consecuencia de la revaluación del marco. La cuestión es: como no existe la voluntad política de actuar sobre estos dos factores, que dependen exclusivamente del Bundesbank, sólo queda hacerlo sobre el primero. Pero repito, una terapia causal, del tipo reduzcamos el coste del trabajo y automáticamente tendremos mayor empleo, no tiene el menor fundamento. Cualquier reducción del coste del trabajo puede ser anulada de un día para otro por una revaluación del marco.

S.O.: La defensa a ultranza del marco se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para la economía alemana. A pesar de estar todo el mundo de acuerdo sobre ello en Alemania, el Bundesbank sigue inflexible en su postura contraria. ¿Cómo lo explica?

C.O.: Por razones psicológicas. Porque el miedo a la inflación en Alemania está unido al trauma de la crisis de los años 20, al fracaso de la República de Weimar y la catástrofe que tuvo lugar después. Es un recuerdo aún vivo, casi una fijación neurótica que no se apoya en ninguna consideración de tipo económico. Hasta ahora, ningún político ha osado poner en cuestión la línea del Bundesbank. Ni siquiera se les ha ocurrido pedir a los directivos del Banco que participasen en la mesa redonda Gobierno-sindicatos-patronal para discutir sobre la política económica.

S.O.: El Bundesbank defiende su posición exigiendo el cumplimiento respetuoso de los compromisos adquiridos en Maastricht. Ahora que Alemania ha dejado de cumplir uno de los criterios de convergencia, el de la deuda pública, ¿cree que el objetivo de 1 de enero de 1999 continúa siendo una hipótesis realista?

C.O.: Creo que existen todavía tres posibilidades. La primera, que el objetivo de la unificación monetaria europea sea completamente abandonado, posponiéndolo a un futuro indeterminado. La segunda, que sea aplazado a una segunda fecha acordada, por ejemplo el 2002. Y la tercera posibilidad, en el caso de que se mantenga la fecha de 1999, es que pocos países podrán cumplir los criterios de convergencia. Y no tendrán más remedio que resignarse a entrar en la unión monetaria en una segunda fase. Me parece que es ya un poco tarde para la primera posibilidad. La tercera es rechazada hoy por la mayor parte de los países, con la excepción de Alemania, Francia y Luxemburgo. Queda la segunda posibilidad: el aplazamiento a una nueva fecha. Pero así se minará la credibilidad de los Acuerdos de Maastricht y cualquier país se sentirá legitimado para exigir que se retrase la entrada en funcionamiento de la unión monetaria si el cumplimiento de

los criterios le resulta demasiado difícil. Y de esta manera volveríamos a estar en la primera posibilidad...

S.O.: No es una perspectiva demasiado optimista...

C.O.: Yo sigo siendo escéptico sobre la posibilidad de éxito de la unión monetaria. Europa no existe como Estado; no tiene un auténtico ejecutivo, un poder militar y mucho menos un sistema social homogéneo. La diferencia entre los distintos países es tan grande que actualmente cualquier intento de reducirla a través de la legislación comunitaria sólo puede provocar problemas ulteriores.

S.O.: ¿Se refiere a la directiva comunitaria sobre la movilidad de los trabajadores en la Unión Europea, que la socialdemocracia alemana ha propuesto abolir?

C.O.: Exacto. Las empresas portuguesas o italianas que exporten sus productos al mercado alemán obviamente intentarán por todos los medios aprovecharse y pagar a sus trabajadores con los sueldos más bajos de sus países de origen. Pero ello supone una competencia desleal que perjudica a la empresa alemana, obligada a pagar el coste de un sistema social más desarrollado. Con la consecuencia de que aumenta el número de parados alemanes y se multiplican los conflictos sociales. Y ¿qué ventaja obtienen de todo esto los trabajadores portugueses o italianos? Ninguna.

S.O.: Volvamos a Alemania. ¿Cómo analiza la propuesta de un "pacto por el empleo" del secretario general del sindicato del metal Zwickel?

C.O.: Me recuerda la fábula del zorro y las uvas. El IG Metall no ha obtenido este año los aumentos salariales que quería. Y ahora presenta este fracaso como una concesión, esperando recibir a cambio algo de los empresarios o el Gobierno.

S.O.: Pero al menos así se ha abierto un debate sobre la estrategia para luchar contra el paro que está implicando a todas las fuerzas políticas. Algo se mueve. ¿O no?

C.O.: Yo no veo progreso. Todos los partidos se han encerrado en sus posiciones tradicionales. El sindicato quiere que se paguen las horas extraordinarias con tiempo libre; los empresarios quieren, por el contrario, reducir las vacaciones o los permisos por enfermedad aumentando el número de horas extraordinarias. Son discusiones de los años 70. No tienen ningún interés. En cuanto al interés de los partidos políticos al que se refiere, creo que es sobre todo instrumental. La Unión Demócrata-Cristiana ha planteado de improviso el tema de la política del trabajo, cuando la ha ignorado olímpicamente durante años. Es puro tacticismo. Si los liberales fracasan en las próximas elecciones regionales de marzo, Alemania puede tener que celebrar elecciones anticipadas. Y hay necesidad de recurrir a los temas fuertes para movilizar a los electores.

S.O.: Pero, ¿existe una vía para salir de este círculo vicioso que cada vez produce más paro? Por ejemplo, ¿con una reducción del tiempo de trabajo?

C.O.: Tengo la impresión de que la estrategia política basada en la reducción del horario de trabajo ha agotado su efecto ocupacional porque es vulnerable desde el aspecto humano. ¿El motivo? Sobre todo porque el efecto ocupacional de una

reducción del horario desaparece rápidamente si el precio es una mayor flexibilización del tiempo de trabajo. Y porque la capacidad de los trabajadores de soportar nuevas reducciones salariales he llegado a un límite, ya que nuestro sistema social penaliza hoy las reducciones de salario con pérdida de prestaciones a través del sistema de pensiones que se extienden a toda la vida.

S.O.: Indique al menos una solución.

C.O.: Una podría ser la de instaurar una forma de "salario básico universal", un sueldo para todos aquellos que voluntariamente renuncien al mercado de trabajo con la condición de continuar teniendo una ocupación. En una primera fase, el derecho a percibirlo podría estar condicionado a la obligación de desempeñar cierta actividad en los sectores que hoy están confiados al voluntariado y limitarla a una determinada fase de ésta, tanto en su cualificación como en su retribución. Para financiar esta política de empleo *negativa* es necesario una reforma fiscal radical, que grave duramente el uso de los recursos naturales (el famoso *impuesto verde* sobre carburantes, energía y materias primas). El segundo punto es que en las sociedades del capitalismo avanzado ya no es posible realizar el objetivo del pleno empleo. Es necesario partir de este presupuesto para encontrar nuevas formas de vida.

IL MANIFESTO/24 de enero de 1996/Roma

Traducción: G. Buster



El pacto por el empleo... que nunca existió

Mannuel Kellner

[El "pacto por el empleo" en Alemania fue la gran noticia social del invierno pasado: una respuesta innovadora y solidaria, se decía, al problema del desempleo.

En sólo unos meses, las noticias sociales que llegan de Alemania han cambiado de signo: los empresarios piden dos años de congelación salarial a cambio de que "no se produzcan caídas dramáticas". Un dirigente empresarial no tiene empacho a declarar que "los sindicatos han perdido ya su poder de movilización". Finalmente, lo sindicatos alemanes han organizado un frente de organizaciones "en defensa del Estado social" y se muestran dispuestos a aceptar sacrificios "pero éstos deben ser mayores para los que más ganen". Nuevo sindicalismo se llama esto...

Nos ha parecido interesante recuperar el análisis que realizó hace unos meses el redactor de Inprecor, Mannuel Kellner, sobre el "pacto por el empleo". Esta experiencia, que podría repetirse en otras latitudes, no debe quedar en el olvido].

Sin duda alguna, la propuesta del presidente del IG Metal, Klaus Zwickel, de un "pacto por el empleo" (Bündnis for Arbeit), presentada en su discurso del 1 de noviembre de 1995 en el Congreso de su sindicato, ha tenido una influencia importante en el clima político en Alemania.

Klaus Zwickel lanzó su espectacular discurso en el Congreso de la IG Metall, tras haber sido reelegido como presidente del sindicato por el 92,4% de los votos. Sus propuestas, en efecto, han sorprendido a todo el mundo, incluso a la dirección del sindicato.

Éste es el capítulo central de su discurso: "Ahora, quiero hablar de nuestra contribución al futuro. Se trata de una contribución que podría animar el debate político en materia de lucha contra el paro. Propongo al Gobierno Federal, a los patronos y a sus organizaciones, un pacto mutuo por la creación de empleos, un pacto por el empleo. Este pacto necesita, por consiguiente, un aporte de nuestra parte. Sin embargo, este aporte está condicionado. Se trata de dar y de recibir. Este pacto debe ser aplicado por el Gobierno, la patronal y también por nosotros. Implica igualmente la necesidad de hacer un balance.

Si los empresarios de la metalurgia garantizan por un período de tres años:

- renunciar a los despidos injustificados;
- crear 300.000 nuevos empleos;
- contratar, además, 30.000 parados de larga duración;
- aumentar el 5% anual los empleos de jóvenes, a la vez que aseguran una formación profesional.

Y si el Gobierno se compromete a:

- renunciar a reducir los subsidios de paro y a introducir criterios más severos para tener derecho a los subsidios sociales;
- introducir un reglamento que garantice la oferta en materia de formación profesional a la altura de la demanda existente;
- imponer multas a las empresas que no ofrecen, u ofrecen demasiado poco empleo ligado a la formación.

Entonces, en ese caso, me plantearía negociar un convenio colectivo en materia de salarios en 1997, que contemplara aumentos de los salarios por debajo de las normas vigentes, durante un período determinado, para las personas paradas de larga duración que sean contratadas.

Queridos amigos, sé que con estas propuestas toco tabúes y que voy a provocar probablemente algunas protestas. Sin embargo quiero con este pacto por el empleo mostrar nuestro compromiso en la lucha contra el paro y someter a prueba la disposición de los políticos y de la patronal".

¿Qué tabúes?

Aunque esta propuesta ha suscitado algunas reacciones críticas o indignadas, los delegados, y la mayor parte de los sindicalistas, han acabado por aceptar la iniciativa de Klaus Zwickel.

Pero, ¿qué tabúes ha tocado?

En primer lugar, IG Metall y también la Federación de los Sindicatos Alemanes

(DGB), habían rechazado siempre la argumentación de la patronal que explicaba el paro por el nivel demasiado elevado de los salarios.

Aceptando flexibilizar las reivindicaciones salariales, Klaus Zwickel se une a la lógica patronal que considera que la única contribución de los sindicatos en la lucha contra el paro consiste en aceptar la caída de los salarios reales. No hay que decir que esta caída se viene produciendo ya en estos últimos años, si se tienen en cuenta todas las pérdidas debidas a las medidas antisociales del Gobierno.

En segundo lugar: las resoluciones adoptadas por el Congreso antes de la intervención de Klaus Zwickel, reafirman el rechazo categórico de IG Metall de cualquier tentativa de introducir salarios por debajo de las normas en vigor, aunque sea transitoriamente. Klaus Zwickel con su propuesta pone en cuestión esta resolución.

Pero, ¿por qué la propuesta de Klaus Zwickel, como indican algunos sondeos de diciembre y de enero de 1996, ha gozado de la aprobación de la mayoría de sindicatos y de los trabajadores asalariados?

La respuesta hay que buscarla en tres factores:

1. El descontento acumulado parece contenido por el inmovilismo total de la clase política.

2. La ausencia total de una perspectiva de lucha sindical para invertir el declive del empleo. Las movilizaciones por la semana de 35 horas en 1984-1985 fueron las últimas sobre este tema. En aquel momento, el movimiento sindical, con los metalúrgicos y los trabajadores de gráficas como punta de lanza, había planteado la reducción del tiempo de trabajo, con compensación salarial, para reducir el paro. Este movimiento había obtenido la introducción, poco a poco, de las 35 horas. Pero a causa de la flexibilidad del empleo, su efecto sobre el paro ha sido marginal. Desde entonces, el movimiento sindical ha permanecido a la defensiva tanto en el terreno político como en el ideológico.

3. En este marco, la iniciativa de Klaus Zwickel es considerada como un intento de retomar el camino de la ofensiva. Las reacciones que han seguido a la propuesta parecen confirmarlo.

Las reacciones

En un primer momento, los representantes de la patronal han reaccionado de una forma muy contradictoria. Unos han alabado la iniciativa, otros han denunciado su insuficiencia y su demagogia. Los patronos no se han puesto de acuerdo más que para felicitarse de la aceptación del sindicato de su explicación del paro, atribuido al nivel elevado de los salarios.

Frente a la reacción de la patronal, los medios de comunicación, incluso los conservadores y liberales, han criticado a las organizaciones patronales, invitándolas a sumarse a la iniciativa de Klaus Zwickel, que habría osado poner en cuestión los “dogmas sindicales” y hacer, por su parte, las concesiones que serían necesarias.

Era evidente que Klaus Zwickel iba a obtener el apoyo del SPD (social-demócrata). A continuación, y bajo la presión de la opinión pública, no sólo el

conjunto de las direcciones sindicales adoptó su planteamiento, sino también el Gobierno del CDU/CSU/FDP (conservadores, cristianos y liberales) y las organizaciones patronales. Estas últimas han acabado por aceptar la propuesta de Klaus Zwickel como punto de partida de las negociaciones, a la vez que movilizan a un cierto número de políticos de derechas para multiplicar las propuestas tendentes a dismantelar el sistema de seguridad social y a introducir un sistema salarial totalmente independiente de los convenios colectivos.

Dificultades para la izquierda sindical

La unanimidad sobre el pacto por el empleo ha puesto a las minorías sindicales combativas en una difícil situación. Para comprender la dinámica desencadenada por este proceso, hay que volver a hablar de las negociaciones llevadas a cabo bajo el sello del pacto por el empleo: tanto las del IG Metall con las asociaciones patronales de la metalurgia y el Gobierno, como las de la DGB con los representantes patronales y gubernamentales y, finalmente, en los demás sectores, como el transporte ferroviario.

Para la metalurgia, desde las primeras negociaciones, la noción de “contrataciones garantizadas” ha cedido su lugar a un proyecto de “comisiones paritarias de expertos” que tendrían como tarea calcular cuántos empleos podría salvarguardar una reducción de las reivindicaciones salariales. Toda alusión a la juventud y a la formación profesional fue abandonada por el camino. El 18 de enero, en la segunda vuelta de las negociaciones, fue abordada la cuestión de las horas suplementarias: el IG Metall ha propuesto la compensación en tiempo libre desde la primera hora extra (hoy, la compensación se hace tras la 16 hora del mes). La patronal no estaba en condiciones de proponer un compromiso concreto, por lo que las negociaciones continuarán a nivel regional. El IG Metall ha anunciado ya que estaba dispuesto a hacer concesiones.

El 23 de enero de 1996, en la segunda vuelta de las negociaciones tripartitas (DGB, patronal, Gobierno), se adoptó un documento titulado *Pacto por el empleo y por la preservación de la producción en Alemania*. Este documento declara querer alcanzar el objetivo de una reducción del 50% del paro o crear dos millones de empleos nuevos de aquí al año 2000. Los medios para conseguirlo o quedan difusos, o se integran en la lógica neoliberal del Gobierno de Kohl. La DGB había apoyado la medida del Gobierno de reducir los gastos del subsidio de paro en un 3%. La dirección de la federación sindical justificó su posición porque el Gobierno contaba imponer una reducción del orden del 5%. Esta concesión llenó de satisfacción al ministro de Trabajo Norbert Blum (CDU), que ha declarado ante los medios de comunicación: “Por primera vez ha sido posible reducir una conquista social con el consentimiento directo de la parte social”.

Las negociaciones llevadas a cabo bajo la égida del pacto por el empleo en el sector de los ferrocarriles (sociedad pública en vías de privatización) han concluido en un acuerdo sobre la supresión de 10.000 empleos (el proyecto inicial era de 20.000 empleos). Esto no impide a la dirección sindical enorgullecerse de

su éxito. Por otra parte, el ministro de Transportes, Marrhías Wissman y el director general de la Sociedad de los Ferrocarriles, Heinz Duerr, han declarado que este acuerdo no deberá costar nada y no cambiará en nada la necesidad de una racionalización radical de la empresa.

Construir una nueva relación de fuerzas

El último acuerdo espectacular, a nivel federal, concluido en el marco del pacto por el empleo, trata sobre las pensiones. Conforme a ese acuerdo, los trabajadores que elijan la fórmula "mitad trabajo-mitad pensión" sufrirán una pérdida salarial del 30% y una pérdida del 10% de la jubilación. Sin embargo, el efecto de estos sacrificios sobre la mejora del empleo no está garantizado.

La lógica de concesiones, sin obtener ganancias substanciales a cambio, no podrá sino reforzar considerablemente la crisis del sindicalismo, la resignación y la confusión ideológica frente a la ofensiva neoliberal.

Es imperativo criticar cualquier colaboración en el desmantelamiento de las conquistas sociales. Hay que construir una nueva correlación de fuerzas para negociar. El punto de partida de las luchas deben ser las 30 horas sin pérdida de salario, decisión adoptada en el Congreso de IG Metall. Es necesario obtener no sólo un pacto por el empleo, sino también un pacto por una producción y un desarrollo basados en las necesidades sociales y en criterios ecológicos. Un pacto que incluya a los sindicatos y todos los movimientos sociales y progresistas, dirigido contra el gran capital y su gobierno.

Febrero de 1996

INPRECOR nº 400/ Marzo de 1996/ París

Traducción: Alberto Nadal

Inmigración y refugio en la Unión Europea y en el Estado español

Antonio Gómez Movellán

A partir de los años cincuenta, en Europa, se relajaron los controles de inmigración existentes y se adoptaron unos estatutos de asilados muy avanzados. Ello sin duda tuvo que ver con la expansión económica de ese período. Sin embargo, desde 1974 se comienza a escuchar en los países de la Comunidad Europea la expresión "cierre de fronteras". Con la llegada de la crisis, y el estancamiento económico y el crecimiento del desempleo, todos los gobiernos europeos sin excepción van a reformar sus legislaciones sobre extranjería y asilo. A estas reformas tienen en común algunos rasgos:

- Se refuerza el predominio de las normas estatales sobre convenciones generales internacionales.
- Se produce una mayor dispersión de las normas nacionales creando una mayor inseguridad jurídica para los extranjeros.
- Se incrementan las normas de la policía.
- Se refuerzan los requerimientos para la adquisición de nacionalidad y para la adquisición de residencia legal y acceso al mercado laboral.
- Se refuerzan los requerimientos para la concesión de asilo y se incrementa, en este campo, la discrecionalidad administrativa.
- Se rebajan los requerimientos para las expulsiones de extranjeros.

Hasta la entrada en vigor del Tratado de Maastricht no existían unas políticas comunes —en la Comunidad Europea— en relación a estos asuntos de extranjería pero la supresión de las fronteras interiores previstas en el Acta Única Europea exigía desarrollar unas políticas de cooperación.

Anteriormente a la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, se creó un espacio de cooperación intergubernamental sobre estos asuntos en el cual participaron algunos países de la entonces Comunidad Europea; esos acuerdos se denominaron de Schengen ya que ésta fue la ciudad luxemburguesa donde se firmaron el 14 de junio de 1984. Los Acuerdos de Schengen tuvieron un antecedente en el denominado Grupo de TREVI (cooperación policial contra el Terrorismo, Radicalismo, Extremismo y Violencia Internacional) grupo reunido desde 1976 y que estaba constituido por los ministros de Justicia e Interior de los países miembros de la Comunidad Europea. El Grupo de TREVI estaba encargado de examinar la cooperación relativa a la lucha antiterrorista, narcotráfico, derecho de asilo y políticas de migraciones; de este grupo se desgajó el "grupo ad hoc de inmigración" para examinar estos asuntos y los de asilo junto a un grupo de cooperación jurídica. Estos tres grupos, tras el Tratado de Maastricht de febrero de 1992 han tomado otra dimensión ya que como tales han sido disueltos y constituidos en un solo grupo denominado de "coordinación" que tiene como objetivo proponer iniciativas comunitarias sobre estos asuntos.

De este grupo salió el proyecto de resolución de la ya creada "Europol", embrión de policía europea encargada de asuntos de terrorismo, narcotráfico, crimen organizado e inmigración ilegal.

El acuerdo de Schengen

Se constituye en principio fuera del sistema institucional de la Comunidad Europea, como un acuerdo intergubernamental de algunos países miembros de la misma. Los cinco primeros firmantes del acuerdo fueron los países del Benelux, además de Francia y Alemania. El acuerdo se compone de 32 artículos y no deja de ser una primera declaración de intenciones que ha de desarrollarse en convenios concretos de aplicación. El objetivo del Acuerdo se expresaba con detalle en su artículo 17: "En materia de circulación de personas, las partes intentarían suprimir los controles en las fronteras comunes y a transferirlos a las fronteras externas. Con este fin, los países firmantes se comprometerán a armonizar las disposiciones legislativas y reglamentaria relativas a las prohibiciones y restricciones que se deben aplicar en las fronteras y sobre todas aquellas medidas complementarias necesarias para salvaguardar la seguridad interior y obstaculizar la inmigración ilegal de los Estados no miembros de la Comunidad Europea". Posteriormente a la firma de los Acuerdos se han unido los siguientes países: Italia, Grecia, España y Portugal. El Acuerdo ha sido desarrollado a través de un convenio de aplicación que solo en parte está en vigor.

Este convenio compuesto de 142 artículos pretende establecer los siguientes objetivos:

- Abolición total de los controles en las fronteras interiores.
- Una política común de visas.
- Lucha contra la emigración clandestina y establecimiento de normas comunes de repatriación.
- Establecimiento de redes de cooperación policial y posibilidad de la persecución policial transfronteriza.
- Intercambio de información a través del Sistema de Información Schengen (SIS). La implantación de este sistema ha constituido uno de los mayores obstáculos para la entrada en vigor de la supresión de los controles fronterizos internos ya que en esta base de datos se encuentran los datos de todas las personas extranjeras que han entrado en la comunidad procedentes de terceros países y aquellas a las que ha sido denegada su entrada o tienen procesos judiciales pendientes (la denominada "lista negra"-sic-); el objetivo esencial del sistema de información es el control de las fronteras exteriores.
- Una política de asilo común y el examen por un único país del expediente de asilo.

Además del convenio de aplicación Schengen existen otros convenios intergubernamentales que han afectado a las políticas de extranjería; en primer lugar está el denominado Convenio de Dublín de 1990 por el cual se quiere terminar con el fenómeno de los "refugiados en órbita" o refugiados en éxodo por la Unión Europea intentando encontrar un Estado que se avenga a admitir su

solicitud de asilo. Este convenio establece que serán los países que dejen entrar a una persona de terceros países quienes examinen y resuelvan los expedientes de asilo con efectos para toda la Unión.

Posteriormente a este convenio, que aún no es de entera aplicación, los ministros sobre inmigración de la Unión Europea adoptaron una serie de reglas sobre la materia en reuniones en Londres (1992) y Copenhague (1993). Estas reglas insisten en la necesidad de aplicar en su totalidad el convenio de Dublín y dan una serie de recomendaciones para que los Estados no examinen las solicitudes de asilo denominadas abusivas e infundadas. También en estas reuniones se dan criterios —siempre restrictivos— para la armonización de las legislaciones sobre reagrupación familiar y en materia de expulsión de personas extranjeras.

Como se ha dicho, todos estos acuerdos impulsados en el seno de la Unión tienen sin embargo un carácter intergubernamental y no comunitario. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de Maastricht los asuntos de extranjería, asilo, migraciones, entran de lleno en lo que se denomina el “tercer pilar” y que afectan a los temas de Justicia y de Seguridad interior. El tercer pilar, sin embargo, es el menos comunitario de la Unión Europea ya que la adopción de políticas se producirá por unanimidad y son políticas de coordinación pero que no obligan a la legislación interna. Sólo en el caso de las políticas de visado se obliga a la adaptación de la legislación interna y, de hecho, existen varios proyectos de reglamentos comunitarios para la fijación de listas de países a los que obligatoriamente se les exigirá visado y también un reglamento sobre los controles en las fronteras externas o comunitarias.

Existen problemas de aplicación tanto de orden jurídico interno como —y esto es más importante— de orden político de cada país para establecer normas comunitarias que se superpongan a las normas internas, aunque es indudable que en políticas de visas ya prácticamente nos encontramos con normas de aplicación común o por lo menos con reglamentaciones muy armonizadas y en un futuro existirá un reglamento más detallado de obligado cumplimiento para todos los Estados. En cuanto a la política de asilo las modificaciones constitucionales que han tenido que producirse en algunos países como Alemania indica que estamos a las puertas de normas o reglamentos comunes que afectarán a las reglamentaciones nacionales de asilo. Más difícil será el establecimiento de normas comunes para la nacionalidad y las normas de residencia de extranjeros aunque en todos los países la tendencia es a restringir y obstaculizar el libre establecimiento de trabajadores y trabajadoras de terceros países. Otra tendencia en todas las modificaciones que se vienen produciendo en las reglamentaciones sobre esta materia de extranjería es que se impulsa la discrecionalidad administrativa alejando a estas reglamentaciones de un posible control judicial.

La situación española

En España, pese a ser un país de inmigración reciente, se ha adaptado una legislación sobre extranjería muy restrictiva y, lo que es peor, las modificaciones producidas a partir de los años 80 tienden a endurecerla aún más. No es cuestión de examinar aquí la legislación sobre la materia pero lo primero que hay que decir

es que España está a la cabeza en la aplicación de las decisiones que se han ido tomado en lo que se ha denominado el espacio Schengen. En los años 80 se produce la reforma del Código Civil sobre la nacionalidad, la Ley de Asilo y Refugio de 1984 y su Reglamento de 1985 y la Ley de Extranjería de 1985 y su Reglamento de 1986 el cual ha sido modificado en febrero de 1996. Si la Ley de Asilo y Refugio del 84 era una ley bastante generosa y adaptada a los convenios internacionales, la Ley de Extranjería nació con una vocación restrictiva y policial. Su entrada en vigor supuso que una gran parte de los residentes extranjeros en España se convirtieran en inmigrantes ilegales, de ahí que el Gobierno tuvo que establecer unos procesos de regularización extraordinarios para legalizar su residencia de acuerdo a los nuevos criterios restrictivos de la ley. A partir de los años 90 se producen una serie de reformas normativas, tanto en las leyes como en sus reglamentos, que tienen como justificación el hecho de que el Estado se está convirtiendo en un país de inmigración y que ello, en el contexto de la Europa sin fronteras, supone el control de los flujos migratorios.

El control de flujos migratorios significa que todos los derechos de entrada y residencia legal de personas extranjeras deben estar supeditados a las posibilidades económicas, sociales y de control por parte de los agentes públicos etc... de un Estado y ello da lugar a una total discrecionalidad de las administraciones sobre el derecho de recepción de estas personas. Esta política de control de flujos migratorios es la imperante en todos los países de Europa de ahí que todo el edificio jurídico —en materia de extranjería— construido desde los años cincuenta en los países europeos haya sido demolido por las reformas legislativas impulsadas a partir de los años ochenta. En la proposición no de ley aprobada por el Congreso de Diputados del Estado español en el año 1991 se concreta esta nueva política. Así en su preámbulo se puede leer: “se insta al Gobierno a desarrollar una política activa de inmigración en la que los poderes públicos tomen la iniciativa en la canalización y organización de los flujos de inmigración legal en función de las necesidades de mano de obra de la economía española y de la capacidad de absorción de nuestra sociedad”. Esta orientación es la que se ha seguido ya que a partir de 1993 el Gobierno fija unos contingentes anuales para las autorizaciones de permisos de trabajo para extranjeros no comunitarios. Y también a partir de esta fecha se produce las reformas normativas necesarias para garantizar esta política de cupos. Se comienza reformando la legislación civil sobre adquisición de nacionalidad (Ley 18/1990 de 17 de diciembre) en la cual se suprimen las reglas favorables a las personas emigrantes españolas o su descendencia y se introduce la exigencia de justificación por el interesado de buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española para la adquisición de nacionalidad española. Además, en el caso de adquisición de nacionalidad, se obstaculizan los trámites administrativos de tal forma que una tramitación normal, hoy se puede demorar casi tres años. Se procede a continuación a modificar la Ley de Asilo y Refugio de 1984 por la ley de modificación 9/1994, de 19 de mayo. Esa reforma se justifica por los compromisos que el Gobierno español ha ido adquiriendo en el marco Schengen o en el de la Unión Europea de armonización de legislación en materia de asilo y tiene un sentido claramente restrictivo, tratando de frenar las solicitudes de asilo por la no admisión a trámite.

En fin, si estas han sido las modificaciones legales más significativas habría que añadir que ellas han ido acompañadas por toda una normativa de rango menor que afecta a las condiciones de entrada, de expulsión, de libertades y derechos de los trabajadores extranjeros, de condiciones laborales, etc y que en general significan trabas administrativas y mayores requerimientos. En el caso español todo ello ha ido acompañado, además, por la pérdida de privilegios de los nacionales iberoamericanos en la legislación de extranjería.

En general, esta legislación en España no atiende a la situación de la persona inmigrante con vocación de permanencia en nuestro país y tiende a endurecer todo el proceso del control de entrada de los extranjeros no comunitarios.

El refugio y el asilo

La arquitectura jurídica que, en materia de protección al refugio y asilo se erigió desde los años veinte está, en la actualidad, siendo demolida y en su lugar están apareciendo unas legislaciones más restrictivas y fuera de todo control que no sea el gubernamental o administrativo lo cual puede llegar a poner en cuestión los principios o mínimos internacionales que sobre estas materias existen.

El origen del socavamiento de los principios internacionales establecidos sobre esta materia se encuentra en el desarrollo de las políticas denominadas de "control de flujos de entrada", es decir, en el control administrativo-policial de la entrada inmigratoria.

La justificación de estas políticas de control de la inmigración tanto en Europa, EE UU –recuérdese aquí la crisis de los "balseros" cubanos–, Japón u otros Estados con economías desarrolladas, reside en la incapacidad –se dice– de absorción de nuevos trabajadores y trabajadoras inmigrantes. No cabe duda que la crisis o estancamiento económico de mediados de los 70, y sobre todo el aumento de los niveles de desempleo a partir de los años 80, está en el origen de estas políticas de "control de flujos de entrada". Se considera que la entrada de personas extranjeras debe estar supeditada a las necesidades del mercado laboral y si ello no es así se estaría frente a un problema de seguridad interior, de control de fronteras y, en definitiva, de orden público. Así pues, no es casualidad que desde hace quince años, en la mayoría de los países del Norte, se esté produciendo una verdadera contrarreforma legislativa y jurídica en los asuntos de extranjería y asilo y que está afectando al entramado jurídico legislativo de orden interno o internacional de protección de extranjeros y de asilados construido en un período de pleno empleo y de expansión económica.

Quizás de lo dicho hasta aquí se puede extraer una primera conclusión: las políticas de asilo ya no se consideran políticas con entidad propia, sino que forman parte de las política más general de control de la inmigración.

Otro asunto que debe considerarse es que en la protección internacional del refugio y del asilo no se ha avanzado en nada significativo desde la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo adicional de 1967. Es curioso que sólo en el marco de organizaciones intergubernamentales pertenecientes a Estados del Tercer Mundo se hayan experimentado algunos avances; así, en el marco de la OUA, en la Convención sobre refugiados de Addis Abeba de 1969, se recoge

una definición del refugiado mas amplia que la establecida en la Convención de Ginebra y lo mismo ocurre, en el ámbito Latinoamericano en la Declaración de Cartagena de 1984. En ambos instrumentos jurídicos internacionales se considera a las personas desplazadas por hambre, situaciones de violencia interna o de guerra —que son la mayoría— como refugiadas, trasgrediendo, de esta forma, la concepción muy restrictiva de refugio contenida en la Convención de Ginebra de 1951.

Ello nos lleva a una segunda conclusión: las políticas de asilo forman parte del conflicto Norte-Sur; los Estados del Sur presionan para que la Comunidad Internacional y sus organizaciones —controladas por los Estados del Norte— asuman una concepción más amplia del refugiado y amplíen la protección a los denominados “refugiados de hecho”. Sin embargo la tendencia mundial es a no dar soluciones a los refugiados de hecho ya que cada día entran en la categoría de “refugiados económicos” y por tanto en la inmigración ilegal.

En Europa, la involución en materia de asilo y refugio ha significado una contrarreforma en el ordenamiento interno de los Estados y ha ido acompañada de una armonización legislativa consecuencia de acciones intergubernamentales o incluso de acciones en el marco de la Unión Europea, que para algunos Estados también ha significado, caso de Alemania, la reforma de su Constitución.

Desde las iniciativas tomadas en el Grupo TREVI y su comité adhoc, pasando por el Convenio Schengen y su convenio de aplicación, el Convenio de Dublín de 1990, las reuniones de Copenhague y Londres y las iniciativas —en el marco del tercer pilar comunitario— a través del denominado Comité Coordinador, se han realizado una serie de recomendaciones o de obligaciones de armonización legislativa o —en el caso de la política común de visas— de reglamentos de aplicación inmediata que en general han significado los siguiente:

- Avanzar en la elaboración de listas de países de exigencia de visa que va implicar, para los nacionales de estos países, graves dificultades para la obtención de asilo en la “Europa sin fronteras”.
- Creación de procedimientos extraordinarios de rápida resolución de “inadmisión a trámite de demandantes de asilo”.
- Establecer criterios discrecionales para las resolución de solicitudes de asilo que se consideran “abusivas” o “fraudulentas”.
- Acabar con el asunto de los “refugiados en órbita” o en busca de país de asilo a través de la regla de que sea un único país el que examine la demanda de asilo o la inadmisión a trámite.
- Considerar a las personas desplazadas por violencia o guerra no como refugiadas sino como, en el mejor de los casos, “protegidas temporales”, como el conflicto Yugoslavo ha demostrado.
- Transferir a las compañías aéreas y de transporte una función de “autoridad estatal” en el control de fronteras.

En general lo que se pretende es que en el espacio de la “Europa sin fronteras” los trámites de asilo sean cada vez, en su resolución, más discrecionales y alejados del control jurisdiccional y que se vaya adquiriendo una conciencia comunitaria de

que la mayoría de los demandantes de asilo son, en verdad, inmigrantes que no quieren someterse a las cada vez más restrictivas leyes de extranjería y que se reduzca la condición de refugio a las de persecución "por razones muy fundadas". Como recientemente denunciado la organización especializada de Naciones Unidas, ACNUR, la Unión Europea está ya en el límite de la Convención de Ginebra de 1951.

Toda la política sobre asilo y refugio de la Unión Europea, o de los espacios intergubernamentales creados en su interior, responde a una concepción proteccionista del "orden y la seguridad interior", alimentando con ello las ideologías racistas y xenófobas en la Europa y no es casual que, en materia de extranjería una de las primeras realizaciones de la Unión Europea haya sido la de poner en pie la denominada "Europol".

El caso español

En España la involución en la política de asilo ha seguido a la involución experimentada en la política de extranjería que ya hemos comentado y que en materia de refugio y asilo se ha plasmado en la modificación de la ley de 1984.

Las principales contrarreformas que introduce la ley de modificación de asilo son las siguientes:

- Se establece un sistema de "inadmisión a trámite de las solicitudes de demanda de asilo", que puede significar el rechazo en frontera o la salida obligatoria de la persona solicitante por resolución administrativa y sin tutela judicial efectiva.
- Se acaba con la diferencia entre refugio y asilo por "razones humanitarias", lo que significa que solo podrán obtener asilo quienes estén contenidos estrictamente en la Convención de Ginebra de 1951.
- La inadmisión a trámite o la denegación de asilo en España significa, en la práctica, la imposibilidad de demandar asilo en otro país de la Unión Europea.
- Se eleva a la categoría legal, las "solicitudes abusiva" o "manifiestamente infundadas" y además sin control jurisdiccional efectivo.
- No se consideran a las personas desplazadas por guerras como refugiadas. Esta situación ha provocado que en el caso del conflicto Yugoslavo, estas personas no hayan sido aceptadas como refugiadas sino como figuras extrajurídicas de "protección temporal" que no les hacían partícipes de los derechos que los refugiados suelen tener.

En cuanto a la ampliación práctica de la política de asilo estamos asistiendo a una política de aplicación restrictiva de la ya restrictiva Ley de Asilo utilizando además el asilo como un arma más de la política exterior, premiando a los gobiernos amigos o enemigos con las demandas de asilo, en definitiva, condicionando la resolución de las demandas de asilo a criterios políticos en la determinación de "países seguros" o "países peligrosos".

El caso español, que no es el más llamativo, es sin embargo significativo. Durante 1993 hubo 13.000 personas que solicitaron asilo en España. En ese mismo año se resolvieron la solicitud de asilo de 16.250 personas y sólo 1.287 adquirieron el estatuto de asilado. Pero si estas cifras ya de por sí son graves, más

graves son los criterios empleados por países de procedencia. Así de las 608 personas de nacionalidad cubana que solicitaron el asilo en el año 1993, 160 lograron adquirir la condición de asiladas. Sin embargo de las 397 personas de nacionalidad Colombiana que solicitaron asilo en ese mismo año sólo 1 persona logró alcanzar la condición de asilada. Otro caso: de las 224 personas de nacionalidad iraquí que solicitaron asilo en 1993, 86 adquirieron la condición de asilo; sin embargo de las 93 personas de nacionalidad marroquí que solicitaron asilo en ese mismo año ninguna logró alcanzar esta condición. Estos datos demuestran, sin lugar a duda, no sólo la existencia de una política restrictiva en materia de asilo sino que los criterios utilizados son claramente de condicionalidad política utilizando esquemas propios de la guerra fría, destrozando toda la filosofía de los derechos humanos.

Comentario final

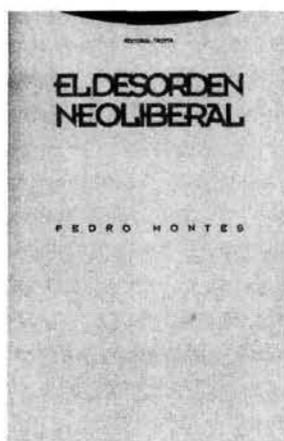
En los países miembros de la Unión Europea existen cerca de siete millones de extranjeros con residencia legal lo que representa menos del 3% de la población comunitaria. Los extranjeros y extranjeras en situación de estancia ilegal representa, según diversas fuentes, cerca de tres millones.

No estamos –pese a lo que normalmente se afirma– en un momento de vastas oleadas de movimientos migratorios; esos movimientos fueron muy intensos desde finales del siglo XVIII y tuvieron mucho que ver con la expansión colonial del capitalismo. Ciertamente la revolución en los sistemas de transportes y las cada día más marcadas divisiones entre el Norte y el Sur anuncian una presión migratoria intensa. Sin embargo, los flujos migratorios tienden a autorregularse y la caída del empleo en las economías del Norte ponen un límite natural a la intensificación de estos flujos. En Europa, hoy vivimos un período en que se pretende controlar administrativamente los flujos migratorios, y la denominada políticas de “cupos” es la concreción de esta tendencia. El espacio Schengen y el control de las fronteras externas pretenden precisamente regular los flujos migratorios. La “Europa Fortaleza” es una realidad. El liberalismo que propugna la Unión Europea –al parecer– sólo rige para algunas cuestiones, pero desde luego no para los flujos migratorios donde el proteccionismo es lo imperante. Es esta política proteccionista y antisolidaria la que está fomentado el racismo y la xenofobia en Europa. Es triste, pero lo que se pretende es regular los flujos migratorios en función de las necesidades del mercado laboral. Así que no es fácil hacer una predicción sobre el futuro de la inmigración en Europa. Todo dependerá del desarrollo demográfico y de las capacidades productivas, pero, en cualquier caso, todo está preparado para que los flujos migratorios no trastornen el “orden” de la segura Europa.

Finalmente una consideración sobre la izquierda y la política de inmigración. En cuanto a la socialdemocracia es evidente que ésta, desde los gobiernos o desde la oposición, ha adoptado o más bien ha impulsado las políticas de la *Europa Fortaleza*. En cuanto a las corrientes alternativas, sindicatos y partidos de tradición comunista, la políticas seguidas han sido de contestación a las medidas restrictivas de los gobiernos y de la Unión Europea, además de parti-

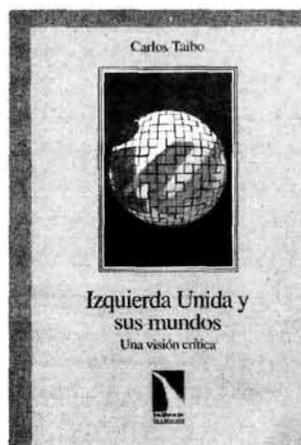
cipar en iniciativas de solidaridad más elemental. Sin embargo, en el conjunto de la sociedad y de los trabajadores y trabajadoras, estos programas de resistencia no son bien vistos ya que el desempleo es el argumento esencial utilizado para la justificación de las políticas reguladoras de los flujos migratorios y es en este terreno donde la izquierda política con más vinculaciones institucionales empieza a flaquear: se empieza por aceptar la política de los cupos de entrada y se puede acabar por negar el derecho de asilo a los refugiados económicos.

Madrid, 8 de marzo de 1996



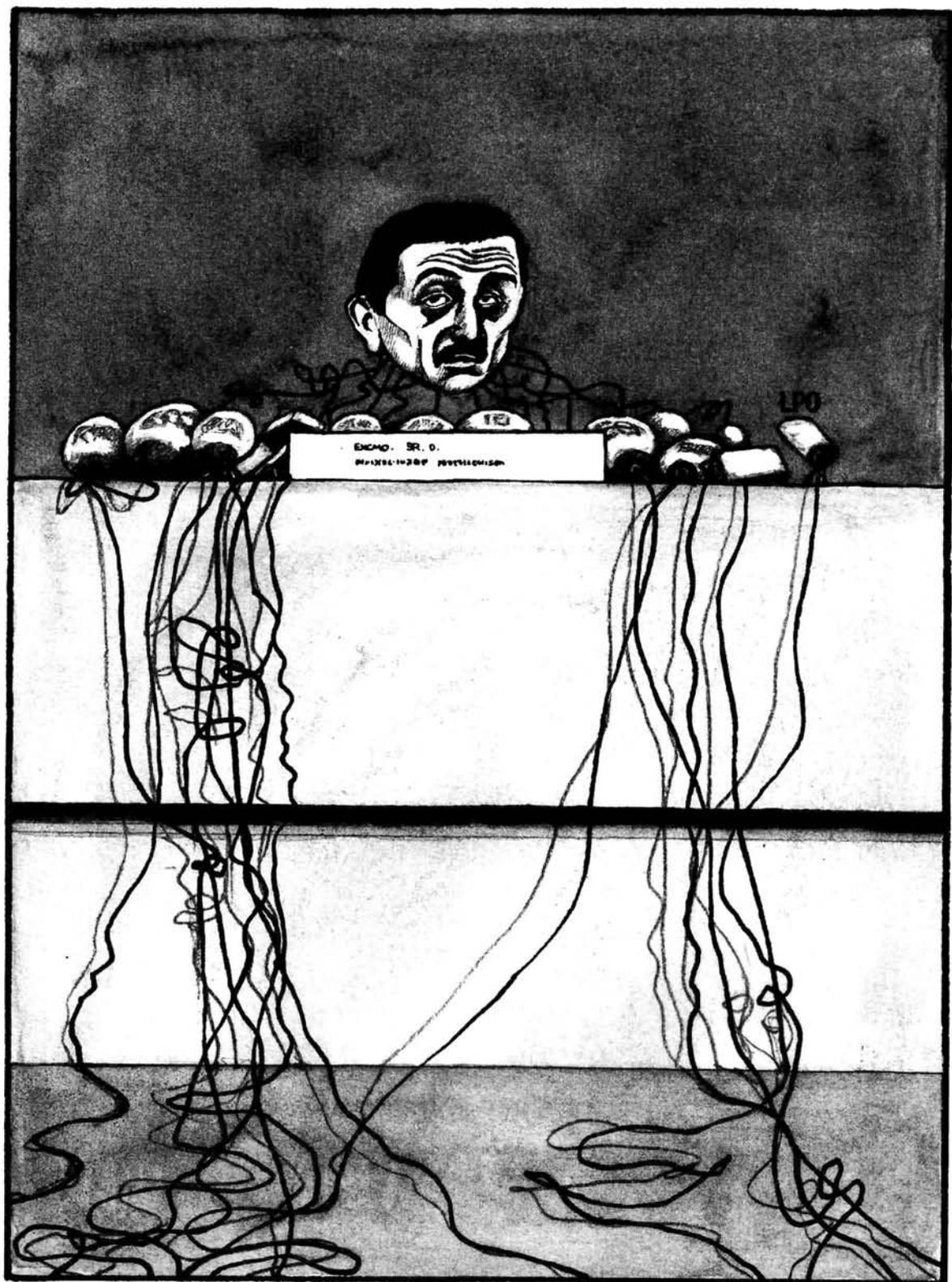
Pedro Montes
El desorden neoliberal
206 pp.

Ed. Trotta
Sagasta, 33
28004 Madrid
Tel.: 593 90 40
Fax: 593 91 11



Carlos Taibo
Izquierda Unida y sus mundos. Una visión crítica
127 pp.

Los libros de la Catarata
Fuencarral, 70
28004 Madrid
Tel.: 532 05 04
Fax y Módem: 532 43 34



1 El encharcamiento

Don José María Aznar, teórico de la feminidad normativa

Celia Amorós

Ha sido muy comentada la frase del líder del Partido Popular pronunciada durante la campaña electoral en respuesta a las preguntas de un reportero acerca de cuáles eran las cualidades que valoraba más, respectivamente, en un hombre y en una mujer: "En un hombre, la lealtad, la responsabilidad, etc. Y, en una mujer, el que sea mujer... mujer". Hay que agradecerle a Don José María el que haya sido tan explícito. Felipe González ironizaba acerca de que tan brillante frase se la debían de haber asesorado. Obviamente, no hace falta. El imaginario masculino tiene muy claro lo que quiere decir con esta aparente tautología, que puede formularse como tal en la medida en que es un claro lugar de consenso, en que funciona como guiño entre los varones: una mujer reduplicada es una mujer como debe ser, es decir, que está donde debe estar, es decir, donde los varones le hemos prescrito que esté. A esta concepción según la cual ser mujer equivale a vivir de acuerdo con un conjunto de prescripciones, de *heterodesignaciones*, le llamamos las feministas *feminidad normativa*. Del hecho de pertenecer al sexo biológico femenino se derivan una serie de enunciados de *debe*: debe ser una excelente esposa y, por tanto, si es esposa de político, hacer algún discreto *pinito* en el espacio público –"detrás de todo gran hombre hay una gran mujer", y si el caballero sólo da para talla mediana, la mujer habrá de ser de talla mediana o tendrá que ir siempre encogida–.

La anécdota es reveladora de que la ideología de la feminidad normativa se presenta como algo tan obvio como elaborado en la mentalidad de quien, si Don Jordi no lo remedia, será el presidente de Gobierno de todos los ciudadanos y ciudadanas –ciudadanas ciudadanas, tendría que ser en este caso– del Estado

español. Y se le podría recomendar que, para ir entrenándose en la lides del reconocimiento de “hechos diferenciales” que la implacable lógica de los pactos políticos le impone, se inspirara en todo lo que espontáneamente le sugiere el hecho diferencial femenino y lo tomara como modelo. Catalunya, en definitiva, tiene nombre de mujer: será cuestión de valorar en ella el que sea Catalunya... Catalunya. De ahí a volverse un profundo teórico del fenómeno de los nacionalismos no hay más que un paso.

Lo malo —y aquí empezamos a perder el humor— es que estas concepciones de la feminidad normativa se plasman, a veces de forma no tan explícita, en los programas políticos. Y el desmantelamiento del Estado de Bienestar, el cutre Estado del Bienestar que tenemos —pero menos da una piedra— se producirá por el eslabón más débil: los recortes en la asistencia social serán menos sangrientos si hay mujeres mujeres —enfermeras natas, al fin y al cabo— que restañen las heridas en la familia, esfera de ejercicio del ciudadano que les es adjudicada por definición. Y si disfraza el paro femenino, miel sobre hojuelas: el paro femenino no ha sido nunca verdadero paro para la derecha —ni para muchos sectores de izquierda, todo hay que decirlo— pues sólo el perfil de género masculino es aquél que se configura como el del proveedor. Esfuerzos de años y años de lucha feminista por romper estas representaciones inerciales y arbitrar mecanismos compensatorios pueden verse seriamente frustrados.

La discriminación positiva

Ciertamente, costó Dios y ayuda hacer entender al militante medio del PSOE —e incluso a bastantes de IU— el sentido de la discriminación positiva. Se objetaba, y algunos lo siguen haciendo, que es contraria a la noción misma de igualdad para todas las personas de mérito en el acceso a los puestos de responsabilidad. Como si la abstracción “persona de mérito” realmente funcionara cuando, obviamente, no es el caso —de otro modo no operarían los eficaces filtros estructurales que determinan el “techo de cristal” para las mujeres—. La función de la discriminación positiva, tal y como yo la entiendo al menos, no es tanto la de representar a las mujeres como mujeres como si de un estamento se tratara^{1/} —lo que de un modo u otro acaba remitiendo a algún presupuesto esencialista— como el hacer posible que la abstracción “persona de mérito” funcione aproximándose cada vez en mayor medida al ideal normativo de una democracia como participación y representación en el gobierno de una sociedad de individuos. En el límite, la variable sexo-género sería aleatoria y, en esa medida, la participación y la representación de los genéricos masculino y femenino en la política tenderían a corresponder a su distribución real en la población. La izquierda, pese a sus reticencias, tiene cierto entrenamiento histórico en lo que podríamos llamar la hermenéutica de la sospecha aplicada al presunto funcionamiento de las abstracciones —¿son igualmente *ciudadanos* el patrón y el obrero, el negro y el

^{1/} En este breve espacio no puedo abordar el debate de la teoría política feminista entre quienes, como Carole Pateman, proponen una ciudadanía de las mujeres como mujeres y las que, como Chantal Mouffe, mantienen posiciones radicalmente nominalistas según las cuales el sujeto político del feminismo es un constructo discursivo contingente. Me siento más cercana a las posiciones de Mouffe, pero no exactamente por las mismas razones que ella aduce, tributarias en buena medida de concepciones posmodernas.

blanco, el sindicalista y el inmigrante?-. Y, en la medida en que tiene una trayectoria democrática, puede distinguir entre lo que significa el no-funcionamiento de hecho de las abstracciones y la deseabilidad, en el ámbito normativo, de que las abstracciones legítimas, sin las que nuestra tradición democrática difícilmente conservaría su sentido, sean coherentes y eficaces. Gracias a ello, ha sido, pese a todo, posible convencerla de que la cura del déficit de legitimidad democrática que la invisibilidad de las mujeres en el espacio público conlleva no puede ser otra que la homeopática, es decir, el tratamiento de una discriminación con acciones positivas destinadas a quienes la padecen (acciones que son, en un sentido redundante, discriminatorias de quienes no se ven afectados por el handicap, pues, por definición, no van destinadas a ellos). Tenemos un 20% de mujeres en el Parlamento –poco, desde luego, pero sin las cuotas no hubiéramos avanzado ni un paso– gracias a la presión del discurso y la práctica feminista, la permeabilidad al mismo de significativos sectores de la izquierda, la hipocresía de algunos otros –obligados a tributar el homenaje que el vicio patriarcal debe rendir a la virtud democrática– y la necesidad de la derecha de estar a la altura de las circunstancias.

Pues, ciertamente, también el PP ha presentado mujeres en sus listas –¿serán mujeres mujeres o irán disfrazadas de lagarterana?-. No aceptarían, por supuesto, la lógica de la cuota: se da por hecho que en su partido toda *persona de mérito* encuentra su lugar. El que sea hombre o mujer es irrelevante; si las mujeres son la excepción, ello sólo prueba que el que una persona de mérito sea mujer es un hecho excepcional. En este nivel, pues, se da por descontado que funciona de hecho la abstracción *persona de mérito*: sería incongruente y discriminatorio para los varones arbitrar un mecanismo ad hoc que promueva a las que pertenecen al sexo femenino. Es curioso, sin embargo, que, en la mente del señor Aznar, la abstracción persona con cualidades meritorias no funciona espontáneamente para nada –en la mujer sólo cuenta su feminidad–, y no parece probable que, justamente, el líder sea una excepción respecto de la tónica de los varones de su partido y, me atrevería a decir, de las mujeres. Es sabido que las mujeres políticas de la derecha, salvo raras excepciones, tienen una forma de autoconciencia propia del becario desclasado: demarcadas del genérico femenino como su referente de origen, ellas siempre han sido individuos, no han sufrido los efectos de su heterodesignación como mujeres. Ergo, si atienden al discurso de su líder, deberían asumirse como anomalías cósmicas. Pero, como no llegan a esa conclusión –es difícil vivirse a una misma como anomalía cósmica, y contestar el discurso del líder deber ser arriesgado, sobre todo si se hace en solitario–, deciden que la correcta es otra más confortable y para ellas más gratificante: la mayoría de las mujeres no son meritorias. De aquí podría salir un discurso misógino: la que quiere y vale puede, ergo las demás, o no quieren –no son esforzadas– o no pueden son tontas. Como el discurso misógino a estas alturas es políticamente impresentable, el discurso de la derecha sobre *la mujer* no tendrá más remedio que desdoblarse en dos discursos y en sus dos políticas respectivas. Tendremos, así, por una parte, el discurso liberal puro y duro –en el límite, el discurso a lo Margaret Thatcher que afirmaba no deberle nada al movimiento feminista, en un ataque de amnesia de lo que representó la lucha sufragista, sin la cual la *dama de hierro* estaría en su casa tricotando, con alambre quizás– para el que sólo existe la

igualdad formal de oportunidades en esa selva de individuos donde los meritorios sin duda prevalecen, mujeres inclusive. Nada, pues, de subvenciones para organizaciones de mujeres para la realización de programas de igualdad y otras monsergas por el estilo (como botón de muestra –y aún no empezó Cristo a padecer!– la dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid ha anulado la convocatoria de estas subvenciones en 1996 con el pretexto de una convocatoria bianual) ^{2/}. Carece de sentido, por supuesto, un Instituto de la Mujer a secas. Lo cambiarán por uno de la Mujer Mujer –ya se ha hecho algún ensayo en ese sentido en la Comunidad Valenciana–, es decir, por Institutos de la Familia como lugar donde debe estar la Mujer Mujer. El discurso liberal puro y duro se dobla de este modo de otro discurso que tiene entre nosotros una vieja tradición, el de la democracia orgánica del franquismo, reciclado ahora en clave del discurso conservador republicano made in USA.

Mascota del nuevo pacto

Pero ¿acaso no vivíamos ya en una sociedad de individuos? Por supuesto, vivimos en una sociedad –se dice– de individuos o de *personas* –a veces se prefiere este lenguaje, más en la línea demócrata-cristiana– a efectos de no reconocer la existencia de hecho de los géneros, entre otras muchas desigualdades sociales relevantes: de este modo, se puede obviar el reconocimiento de que una sociedad de *personas o individuos* no es nuestra realidad, sino un desiderátum por construir que requiere intervenciones políticas precisas interruptivas de los mecanismos del mercado –con sus inevitables efectos de segregación entre los géneros que refuerzan, a su vez, la adscripción de las mujeres a los roles familiares–. Se pretende así que la abstracción funciona donde no funciona –es decir, en el terreno de ser– para no plantearse la instrumentación –política– de sus condiciones de posibilidad en el ámbito del debe ser. Así, en medio de la ceremonia de la confusión del uso de las abstracciones donde no procede –ni puede ser, por tanto, sino mistificador– se oirán cosas tan peregrinas como que el que haya un Instituto de la Mujer es una forma de discriminar a las mujeres. ¿Y acaso un Instituto de la Familia no discrimina a los individuos –femeninos, sobre todo– que quieran hacer proyectos de vida al margen de las normativaciones del Señor Aznar? Sin duda, pero difícilmente encontraríamos una excepción a un fenómeno recurrente en la historia del patriarcado: cuando un grupo de varones se vive como grupo ascendente y como relevo de quienes estaban en el poder y van a ser descabalgado propone, como rúbrica y mascota del nuevo pacto, un tipo de mujer que tiene como su referente polémico la que tenían ellos –en este caso, la de la cuota– y que no es emblemáticamente la mujer mujer. “Mujer es lo que tenemos nosotros”, venían a decir los burgueses a los aristócratas de *l’Ancienne Régime* cuando forjaron su nuevo modelo de mujer doméstica frente a la frívola aristócrata de los salones que no

^{2/} Cfr. “Paralización de Actividades en Asociaciones de Mujeres”, por Isabel Gutiérrez, Vocal del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid, en *Mujeres en Acción*, Fundación Dolores Ibárruri, Invierno 1995, nº 14 Isabel Gutiérrez afirma que “en ninguno de los artículos de la Orden 432/1995, de 16 de marzo, de Consejería de Presidencia... consta la bianualidad de la misma. Si el espíritu y los norma hubiera sido éste la partida presupuestaria se habría duplicado y los programas presentados hubieran tenido que diseñarse para dos años, algo que en ninguno de los casos ha ocurrido”.

amamanta a sus hijos. Lo que equivale a autoinstituirse en los verdaderos hombres, legitimándose de este modo para mandar arropándose en los valores éticos que encarna la forma de vida que propicia la compañía de la "mujer mujer".

Sólo falta que Ana Botella tome como su libro de cabecera las obras de su tocayo, el ilustre ginecólogo —que tenía, por cierto, ideas tan elaboradas como su marido sobre la feminidad normativa— Botella... y Lluisiá. De paso, aprendería a pronunciar el segundo apellido y mataría así dos pájaros de un tiro.

En cuanto a las mujeres a secas, las que sabemos que no se nos designa como individuos, pero queremos serlo sin desmarcarnos de nuestro genérico —promocióndolo por el contrario, justamente, a genérico de individuos femeninos—, me temo que vamos a tener que volver a ejercer buenas dosis de voluntarismo. No perdamos, sobre todo, lo que hemos llegado a adquirir de cultura de pacto. Pactos interpartidarios dentro del espectro de la izquierda y de lo —muy poco, desde luego— que pueda haber de aprovechable en el centro-derecha. Salvemos lo que podamos, a toda costa, avanzando. Que nuestras conquistas no sean muros de arena.



2 El encharcamiento

Andalucía: los límites de Izquierda Unida

Javier González Pulido

Izquierda Unida **1/** ha sufrido en Andalucía una muy severa derrota política. La dimensión de la victoria del PSOE, producida en unas circunstancias a priori adversas, es indisociable del fracaso de las expectativas de IULV-CA.

En un contexto de baja movilización y autoorganización social, la mayoría del pueblo andaluz ha mostrado un muy razonable miedo a la derecha. Nada que objetar a esta sensata prevención en donde se han mezclado la memoria histórica, el instinto clasista y la intuición de que la derecha atacaría subsidios y ayudas

1/ El nombre oficial de la organización federada de Andalucía, jurídicamente soberana, es Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IULV-CA). Utilizo la sigla IU en aras de la brevedad.

esenciales para la subsistencia. El problema radica en que el beneficiario de este rechazo ha sido el partido de Felipe González y José Barrionuevo; una fuerza que comparte con la derecha los trazos gruesos de la política económica, un mismo modelo de Estado y de sociedad y que, además, se ha demostrado en Andalucía manifiestamente incapaz de atajar el desempleo o reducir el subdesarrollo andaluz.

Sin embargo, parece obvio que, para el pueblo de izquierdas, aunque PSOE y PP hagan bastantes cosas parecidas, no son lo mismo. IU ha pagado el no tener la suficiente sensibilidad para actuar teniendo siempre presente esta paradoja. Además, no hay que olvidar que, aunque fuera tras duras presiones sociales y a través de las conocidas *reestructuraciones no traumáticas*, el Gobierno del PSOE consiguió en su último tramo mantener abiertos los astilleros de Cádiz y Sevilla; Santana de Linares; Intelhorce de Málaga o Cervezas Alhambra de Granada.

La táctica

Sabiendo que Felipe González no permitiría bajo ninguna circunstancia que en Andalucía se produjera acuerdo equilibrado alguno entre PSOE e IU, fue un grave error iniciar la legislatura accediendo a la presidencia del Parlamento Andaluz con el apoyo de la derecha. A causa de una pueril obsesión por reflejar institucionalmente su crecimiento electoral, IU le regaló a González la imagen de la pinza con la que excusar sus posteriores negativas (“No cambio ni un punto ni una coma”; “Se puede gobernar sin la confianza del Parlamento”, Chaves dixit). Que se arguyeran razones de control democrático; que el PSOE hiciera posteriormente lo propio en el Parlamento catalán o que la actividad parlamentaria real desmintiera la existencia de la pinza, resultó políticamente inoperante.

IU, por su parte, dilapidó abundante pólvora en salvas inútiles (Defensor del Pueblo, etc), alimentando la propaganda del PSOE, al engolfarse en inexplicables, improductivas y accesorias confrontaciones con el Gobierno Chaves. Unidas a una constante actitud versallesca ante el PP, consecuencia de un torpe maquiavelismo parlamentario de salón, generaron suficiente e innecesaria confusión sobre las razones últimas de la actuación general de IULV-CA. La letra de los acuerdos nacionales aprobados por IU la situaba enfrente del PSOE por la política de derechas que practicaba y del PP por su naturaleza derechista; la práctica y el discurso público nacional, por contra, generaban una imagen de confrontación limitada al PSOE en la que no se destacaban suficientemente los temas y problemas políticos de fondo (deuda histórica, Presupuestos, etc) de los secundarios y formales.

La dura oposición desarrollada por IU en los Ayuntamientos de capitales gobernadas por el PP no consiguió equilibrar finalmente este escenario. Además, la tolerancia ante los contados casos en que IU accedió a alcaldías gracias al apoyo del PP y sobre todo, la forma en que se explicó la táctica municipal de no votar alcaldes del PSOE para evitar el acceso del PP, achacándola de forma vergonzante a insalvables diferencias programáticas locales cuando era obvio que en las grandes ciudades estaba realmente ligada a la situación política nacional, como así reconocía el PSOE, tampoco contribuyeron precisamente a conferir credibilidad al discurso de IU. El trauma aún vivo en el PCA por su experiencia municipal de acuerdos con el PSOE entre 1979-1983, hizo el resto para acabar de retorcer un planteamiento autónomo en origen razonable.

El éxito en la popularización de la iniciativa reivindicativa de la llamada deuda histórica (más bien, parcial deuda autonómica) con Andalucía quedó como hecho aislado por falta de nervio y coherencia nacionalista.

Los aliados

A IU, como era de prever, le han fallado los presuntos aliados. Las bases y cuadros medios del PSOE no se han movido un milímetro de la senda marcada por el líder indiscutible. Renovadores y guerristas han demostrado ser, hasta el último minuto, dos caras de la misma moneda. La inexistencia de un ala izquierda, gestada sobre bases políticas y no de mera lucha de aparatos, en el seno del PSOE ha hecho imposible el encuentro de interlocutores. Aunque tampoco la opción por *el frente único por la base*, desarrollada por la dirección de IU, habría ayudado precisamente a encontrarlos.

Las direcciones de la COAN y UGT, por su parte, instaladas políticamente en la Europa de Maastricht, han preferido al Gobierno con el que pactaban y del que recibían subvenciones que a la fuerza que los apoyaba en los conflictos industriales y en las huelgas generales. De otra parte, la ausencia de una política sindical propia de IU —conservada como espacio reservado para el PCA— le impedía abrir vías alternativas como fuerza política con el movimiento sindical en su compleja pluralidad (SOC, CGT, USTEA...) o estabilizar relaciones con sectores y estructuras críticas de CC OO.

Y en lo que toca a los otros movimientos sociales, muy débiles, ha sido IU la que ha fallado no estando suficientemente presente por mera carencia de militantes (lo que es consecuencia de su estructura afiliativa) o bien defraudándolos, como cuando votó globalmente el nuevo Código Penal que incrementa la represión sobre los insumisos. En este episodio —que no puede adjudicarse sólo a la influencia de Nueva Izquierda— se evidenció que, llegado el caso, primaba el temor a una presunta marginalidad y el aura de respetabilidad que confería el apoyo al PSOE, sobre el mantenimiento de una actitud programática consecuente, quedándose al lado de uno de los pocos movimientos sociales activos de izquierda y con composición mayoritariamente juvenil.

Con todo ello, IU ha marchado en soledad. Ciertamente ha movilizado en solitario a una parte de sus adherentes (15.000 personas en la manifestación de Granada; con más de 20.000 afiliados y 600.000 votos) pero sin conseguir una conexión estable ni con fuerzas o sectores sociales ni una presencia activa en la calle y en las organizaciones sociales que le permitiera contrapesar la ofensiva mediática en su contra.

Coyuntura y campaña

Una vez que González llama al orden a Chaves, le hace desdecerse del acuerdo presupuestario sobre parte de la deuda —que hubiera desmantelado la tesis de la pinza— y consigue simultanear andaluzas y generales; IULV-CA se presenta a sí misma como fuerza de gobierno. Elabora su programa y su discurso ^{2/} pensando en un futuro acuerdo de coalición con el PSOE y a la vez, durante toda la campaña,

^{2/} En el Consejo Andaluz de IULV-CA, celebrado en Sevilla el 3 de Diciembre de 1995, el *Marco del discurso político* aquí descrito, con el que IU concurre a las elecciones andaluzas es aprobado por todos los presentes, con la excepción de quien firma este artículo.

omite la polémica contra un PP crecido y continúa centrando únicamente sus baterías sobre los mismos dirigentes del PSOE con los que se encontraría forzada a negociar, según su propia calificación como fuerza de gobierno.

IULV-CA no introduce en su programa y en su discurso instrumentos políticos consecuentes a los propósitos que enuncia para resolver la situación de Andalucía. El proyecto nacional de país alternativo queda sobre el papel como una simple frase feliz sin contenido. En tanto PSOE y PP evidencian un claro proyecto para Andalucía –región española subdesarrollada pero subsidiada o región subordinada dejada al arbitrio del libre mercado– IU comparece desdibujada sin una propuesta política propia que permita elevar el nivel del debate electoral, relacionar entre sí presente y futuro del país y saltar el bloqueo bipartidista PSOE-PP. En lugar de asumir la construcción de la nación andaluza, sustentándola políticamente desde la superación del marco estatutario y la reivindicación de Soberanía Nacional; IULV-CA hace apología del Estatuto que ha permitido la actual subordinación política, económica y cultural de Andalucía convirtiéndolo en su eje programático en fiel adaptación del discurso estatal que hace lo propio con la Constitución española. Paralelamente y como sustituto ineficaz de la carencia de ese proyecto nacional, declaraciones dirigidas hacia un desconocido empresariado dinámico andaluz, diluyen el contenido clasista de la propuesta electoral de IU. Con una baja implicación de la afiliación **3**, tan complejo pasado y ausencia de diseño nacional de futuro, no es de extrañar que el pueblo andaluz de izquierdas atendiera mayoritariamente sólo a su fundado miedo a la derecha.

Pasado, presente, futuro

IU nace como creación del PCE; a medias como respuesta táctica a su desastre electoral de 1982 y como consecuencia de su evolución eurocomunista **4**. Hereda de su progenitor el compromiso constitucional imprimido durante la Transición y una estrategia socialdemócrata que sustenta el cambio social en la acumulación de fuerza institucional apoyada, eso sí, en la movilización social, sin perspectiva de ruptura o enfrentamiento con el Estado. Su estructura también se trasplanta: una organización de afiliados a los que sólo se exige su acuerdo político general y una cuota; articulada por los cargos públicos y los permanentes, en la que el voto de los militantes activos vale lo mismo que el del adherente nominal. Fundamentalmente, el giro que realiza el PCE y consecuentemente IU, pasando de la defensa de una salida compartida a la crisis capitalista a la oposición a la política neoliberal más la asunción en sus textos de elementos feministas y ecológicos y la apertura a integrar en su seno otras culturas de la izquierda –que vienen a su vez

3/ La débil actividad desarrollada llega hasta el punto de que en el Consejo Andaluz posterior a las elecciones, alguna candidata electa, molesta por la baja participación, llega a proponer que se reformen los Estatutos para que, junto a la cuota, se exija como condición para mantener el derecho a voto el participar en el trabajo de las campañas electorales y ser interventor/a en las mesas electorales. Tan significativo como el requerimiento en sí mismo es la omisión de cualquier otra condición en períodos no electorales.

4/ Ver, Ernest Mandel, *Crítica del Eurocomunismo*, Editorial Fontamara, Barcelona, 1978. Aparte de algunos de sus pronósticos optimistas desmentidos por la evolución histórica, el libro de Mandel sigue siendo muy instructivo y sugerente; particularmente sus capítulos I, IX, X y XI, que cuentan con multitud de elementos que, más allá de la anécdota, se mantienen vigentes

de otros fracasos políticos— la convierten en espacio de encuentro, en punto de referencia electoral y en instrumento de resistencia a la reestructuración capitalista en algunas naciones del Estado. Elementos programáticos democrático radicales (ahora parcialmente cuestionados por algunos en aras del pragmatismo) como la defensa del control parlamentario frente al poder e impunidad de los Ejecutivos se suman también al proyecto.

Algunos acontecimientos previos a las elecciones /5 y la dinámica dominante en los debates postelectorales, vuelven a llamar la atención no sólo sobre las debilidades existentes en IU en todo lo que no es política económico-social o laboral sino también sobre la fragilidad de algunos progresos que antaño se daban por irreversibles.

Reducir esta tesis sólo a la aparición del Partido Democrático de la Nueva Izquierda sería un error. Sin ir más lejos, destaca en el Documento presentado para el próximo Congreso del PCA que, aparte de “observar que en los países del Este surgen nuevas respuestas”(?) /6, se apuesta contundentemente por “la necesidad de que todas las comunidades tengan las mismas cuotas de autogobierno y competencias que aquellas comunidades llamadas históricas”, rechazando la confederación, reafirmando “por la defensa del Estatuto de Andalucía” y “recordando el carácter solidario del Título VIII de la Constitución surgida en el 78, frente a las tendencias contrarias impulsadas por los nacionalistas catalanes”. Una posición que, en resumen, está calcada del discurso tradicional del agravio comparativo de los andalucistas, asumido también siempre que le ha convenido por el PSOE y que en nada sirve para construir desde un proyecto de izquierda una posición propia de Andalucía como nación en el nuevo contexto político abierto tras el 3 de Marzo.

Todo ello induce a pensar que entramos en un período político en el que la izquierda nacionalista andaluza habrá de trabajar con esfuerzo.

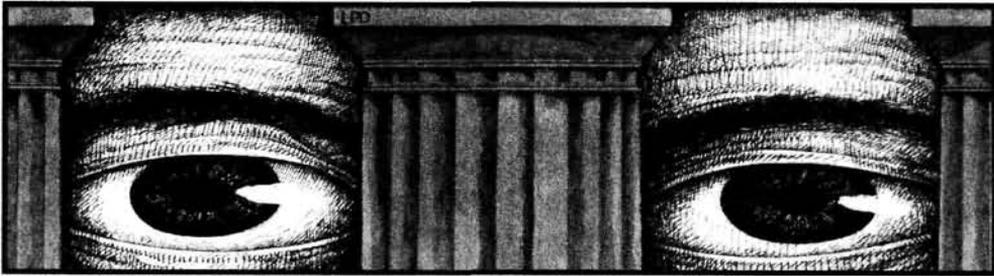
Andalucía, 18 de Abril de 1996

Javier González Pulido

5/ Votación del GATT; firma del Pacto de Toledo sobre las pensiones; el apoyo citado al Código Penal o la visita de Anguita a la colonia de Melilla reafirmando la españolidad de la plaza “porque aparece en la Constitución” (sic), entre otros.

Particular importancia política tiene como -tal cual era previsible- desarrollando lo aprobado en la IV Asamblea Federal se niega el Derecho a la Autodeterminación en el Programa Electoral estatal para las elecciones de Marzo de 1996 (pags. 221-222). Allí se afirma que “El proceso federal que IU propugna se inscribe en el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, como forma de expresión de la necesaria concordancia de voluntades de las ciudadanas y ciudadanos y los pueblos de España en la construcción del Estado federal”. Es decir, se rechaza el pronunciamiento singular de la nación que reclama su derecho a decidir su destino estatal y se fuerza un proceso uniforme, pactado y consensuado; ligando además su presunta autodeterminación sólo y exclusivamente a la opción federal española sin contemplar ni la independencia ni la confederación. Más o menos, la posición de Yeltsin sobre Chechenia.

6/ En la sección “A debate” y sin ningún comentario editorial, *Nuestra Bandera-Utopías*, revista teórica del PCE, en su número 167 de enero-marzo, pp. 139-146 publica un artículo de Guenadi Ziuganov, “Doce lecciones de Historia”.



3 El encharcamiento

Desde el ecologismo

Ladislao Martínez

Un amigo, que tiene la delicadeza de reconocer que sólo me llama para proponerme embolados, me pide un artículo sobre el inesquivable tema de las elecciones. Por fortuna el tema queda bastante abierto, porque así puedo centrarme en la suerte que IU ha corrido en ellas.

Me gustaría avanzar mi tesis central anticipadamente: creo que ninguna fuerza de izquierdas que merezca tal nombre puede obtener en los países de Europa Occidental un porcentaje elevado de votos. Digamos que como máximo un 15%, o siendo muy optimistas un 20% de los votos de un país de la UE (hablo de país o Estado y no descarto resultados mejores en un área más restringida). Una situación que no preveo que cambie en los próximos 10 años. Como se ve, se trata de una tesis que tiene la ventaja de poder ser claramente verificada o refutada.

Guarda esto relación con la caracterización que el ecologismo hace de las sociedades occidentales como sociedades opulentas en las que el nivel de consumo de la mayoría de la población supera con creces la satisfacción de las necesidades materiales básicas. No hay contradicción entre esta afirmación y el hecho de que se produzca en las mismas una creciente marginación de sectores de población que, ocasionalmente, son también crecientes. La discusión sobre el papel de la clase obrera, su relación con los sectores excluidos, su proyección electoral... excede con mucho las pretensiones de estas notas. Pero tengo la impresión de que muchas de las discusiones sobre la consideración del PSOE –si de izquierdas o derechas–, de su base social y electoral... expresan el temor a formularse frontalmente la pregunta de cómo son nuestras sociedades.

Una segunda consideración pasaría por explicitar algo que todo el mundo reconoce en conversaciones distendidas pero que rara vez aparece en los análisis escritos que se producen después de la elecciones: resulta casi imposible atender a las demandas que aparecen en los sectores sociales más dinámicos y con mayor deseo de transformación social y al tiempo crecer siempre electoralmente en sociedades opulentas. Una fuerza de izquierdas debe, por tanto, vivir en continua tensión entre la necesidad de incorporar con celeridad las nuevas críticas y valores que le permiten ser *izquierda* en situaciones de rápida mutación social, y mantener

una representación lo más amplia posible para disponer de eficacia política. Afortunadamente tampoco lo contrario es cierto, el máximo rendimiento electoral no se consigue a base de *conservadurismo* incorporando sólo aquellas reivindicaciones que ya hayan ganado cierta audiencia social, que no planteen ningún problema a la hora de ganarse una imagen de responsabilidad (con tres “r”, que es como lo pronuncia Antonio Gutiérrez)... porque para esto electores y electoras suelen preferir las opciones genuinas que ofrecen menos riesgo.

Resulta evidente que aceptar la existencia de un límite electoral como el señalado contradice la idea de *sorpasso* entendida como mejora de los resultados electorales del PSOE. Haría falta para ello un derrumbamiento del PSOE que no se vislumbraba ni en los peores momentos de los escándalos de 1995. Creo además que existía una visible contradicción entre la idea de *sorpasso* y el discurso de las dos orillas, ocupada una por IU y la otra por el PP y el PSOE. Y es que, si sólo IU estaba en la izquierda, no necesitaba adelantar a nadie para ser la fuerza hegemónica de un espacio que con nadie compartía. Reconociendo que estas últimas líneas tienen mucho de discusión sobre titulares periodísticos —algo a lo que creo que se debe renunciar si se tiene la pretensión de ser mínimamente riguroso— sí sirve para ilustrar el escaso cuidado con que se han lanzado a veces consignas e ideas fuertes en la lucha política.

Automatismos que no funcionan

Una primera idea a someter a reflexión es la de que el deterioro de un partido socialista en el gobierno implica necesariamente que las fuerzas a su izquierda salgan beneficiadas electoralmente. Si la experiencia de países cercanos prueba algo es desde luego que dicho automatismo no funciona. Aunque con sistemas electorales distintos —cuyos efectos son más importantes de lo que se supone— ésta parece ser la lección de los casos de Francia con la derrota electoral socialista que precedió al acceso de Chirac a la presidencia; el de Portugal antes de iniciarse la era Cavaco; la derrota del Gobierno de Papandreu en Grecia agobiado por problemas de corrupción (su rehabilitación posterior es otro hecho sobre el que reflexionar); o el derrumbamiento de casi toda la clase política italiana que afectó especialmente al Partido Socialista que virtualmente desapareció. Es cierto que el comportamiento de las izquierdas de dichos partidos socialistas fue muy distinto; y así los comunistas griegos llegaron a formar un gobierno *catártico* con la derecha, mientras que el PDS, tras realizar una significativa mutación que lo llevó hasta a cambiar de nombre, postuló la unidad con el PSI de Craxi hasta un minuto antes de que éste tomara el avión para evitar ir a la cárcel,... pero en ningún caso se produjo un claro aumento electoral.

Tampoco creo que los planteamientos que ha venido desarrollando Nueva Izquierda hubieran proporcionado mejores resultados. Y me refiero, no sólo a la posibilidad de que en las actuales circunstancias hubiera podido desarrollarse una política de gobierno más de izquierdas si IU no hubiera “pecado de maximalismo”, sino incluso si una política más realista habría posibilitado acceder al gobierno o a una mayor influencia sobre él. Porque aunque pretenden hacerlo pasar por obvio, no es ni mucho menos claro que en medio de la tremenda

crispación política que se produjo, una mayor moderación hubiera implicado un mayor número de votos. A título de ejemplo los resultados de IC son apreciablemente peores que los de IU en el conjunto del Estado, pese a que ha tenido casi seguidos varios procesos electorales en los que ha podido manifestar con cierta claridad un mensaje más matizado. Aunque también es cierto que el PSC estaba en la oposición y no en el Gobierno catalán, lo que le evitaba cierta erosión.

El verdadero obstáculo para un gobierno de izquierdas tras un reequilibrio de votos PSOE-IU en beneficio del segundo es paradójicamente los que pierde el primero por su derecha, ya que abstención casi no ha habido en las dos últimas elecciones generales. Cualquiera que sepa cómo funciona el sistema electoral en este país percibe con claridad que un mayor número de escaños para el hipotético tándem sólo se consigue con una mayor diferencia de votos entre PSOE e IU y que por el contrario si IU roba electorado de izquierdas al PSOE lo más probable es que el número total disminuya, imposibilitando entonces la formación de gobierno. Y desde luego sería masoquista suponer que IU tiene responsabilidad en dicha pérdida de votos por la derecha.

Aunque el argumento más fuerte que encuentro contra las tesis de NI es que en la actual situación política, definida por un contexto internacional especialmente desfavorable y con un PSOE cuya dirección ha realizado apuestas estratégicas marcadamente derechistas (reforma laboral, apoyo incondicional a Maastricht, desmantelamiento del sector público...), no resultaba posible una colaboración política más estrecha, sin destrozar la cultura de izquierdas y sin abandonar a su suerte a los sectores sociales más desfavorecidos e interesados en un cambio. A ello conviene añadir que no ha existido ni un gesto por parte del PSOE para realizar una colaboración con IU en la gran política del Estado.

No obstante tampoco puede afirmarse que los resultados electorales sean satisfactorios: más bien habría que empezar a reconocer que constituyen un cierto fracaso ya que deberían haberse acercado a lo que señalé al principio como límite alcanzable.

No soy de la opinión de que una fuerza como IU decida su suerte electoral en la campaña, por lo que las razones de los pobres resultados habría que buscarlas en la práctica política de los últimos años.

Un factor determinante es la falta de credibilidad que ofrecen las alternativas que presenta IU. Una fuerza a la que se pretende presentar "como de otra galaxia" que opera en una sociedad opulenta está obligada a disponer de alternativas creíbles y razonables para todos los grandes problemas en que su posición difiere notablemente de las restantes formaciones. Y debe tener además la capacidad de transmitir las a la sociedad. Creo que ambas cosas han faltado. Por otra parte los escasos ayuntamientos en los que IU ejerce el gobierno sin depender de acuerdos demasiado limitantes con otras formaciones, no siempre cumplen la función de "pequeños laboratorios" que muestran que es posible caminar de otra manera.

Otro hecho que ha influido decisivamente es la imagen que se ha proyectado sobre IU de ser una fuerza que hacía el juego "a la derecha" y que dificultaba "la gobernabilidad de las instituciones". Creo que la verdadera responsabilidad en este caso ha sido no haber sabido esquivar con un poco más de inteligencia los

disparos que se le dirigían en este sentido evitando incurrir en errores que, por el contrario, permitían realizar esta lectura.

Discurso autónomo crítico

En cualquier caso soy de los que creo que a IU siempre se le habría acusado de hacer la pinza con el PP, a menos que hubiera mantenido una actitud política subalterna frente al PSOE. De hecho la expresión empezó a circular sobre todo a raíz de la actividad de IU de denuncia de los casos de corrupción y los GAL. Y no acabo de ver qué otra cosa podría haberse hecho apreciablemente distinta de lo que se hizo en estos dos casos.

Quizá el problema estuvo tras las elecciones andaluzas primero y las municipales y autonómicas después. Faltó la fineza necesaria para haber sabido conjugar el mantenimiento de un discurso autónomo, muy crítico con el PSOE en lo relacionado con los temas antes señalados y su política económica, con una política menos beligerante en los grandes gestos en los niveles más bajos de la administración. O dicho con otras palabras la pretensión de romperle la espina dorsal al felipismo para así forzar la unidad de la izquierda con un PSOE purificado de sus graves pecados, pecó de excesiva visceralidad y de falta de agudeza en el análisis. En muchos municipios donde el PP era la lista más votada, pero el número de concejales del PSOE e IU formaban mayoría, se permitió a aquél obtener la alcaldía cuando quizá la norma debió haber sido apoyar la elección de alcaldes del PSOE estableciendo con ellos una relación que podía variar según los casos entre la cooperación o la oposición complementada con movilizaciones. Sólo en caso de problemas graves de corrupción municipal o de gestión nefasta se justificaba el gobierno del PP. Otro tanto de lo mismo ocurrió en Asturias.

Visto retrospectivamente no deja de tener cierta ironía que fueran los sectores más izquierdistas de IU quienes defendieran vehementemente una posición de la que se derivaba una consecuencia indeseada pero no por ello menos *fatalmente inevitable*: gobiernos del PP en poblaciones importantes y con enorme carga simbólica.

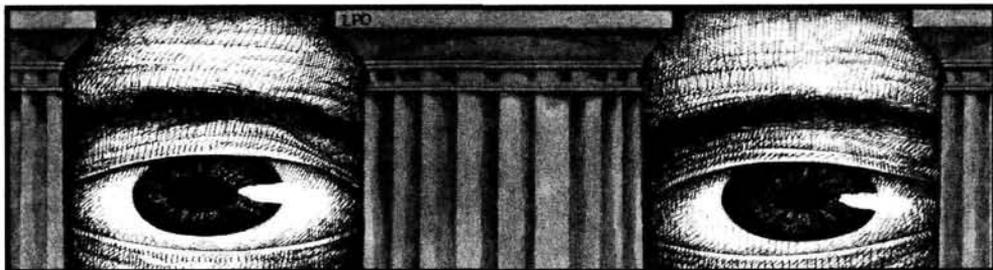
La inconsistencia ha presidido la práctica política en este campo. Un día se argumentaba que no se podía pactar con un alcalde porque el PSOE era el GAL y en la campaña electoral se tendía la mano al mismo partido para salir del lodazal. Es cierto que casi todo el PSOE cerró filas con su dirección para silenciar las críticas por el terrorismo de Estado pero al tiempo parece claro que ni un mejor resultado electoral de IU aumenta la talla moral de sus hipotéticos socios, ni que la forma más inteligente para provocar la insurrección de las bases sea aumentar la distancia que separa de ellas. La paradoja se vuelve brutal cuando se percibe que además se hace preciso mirar con lupa de muchos aumentos para ver las diferencias en muchos municipios entre la práctica del PSOE y de IU. El gravísimo problema es que *la nueva forma de hacer política* es hoy poco más que una consigna vacía de contenidos (no deja de ser pertinente la pregunta de cuán diferente en realidad puede ser la política) y que pese a todas las declaraciones públicas en IU hay *mucho socialdemócrata enmascarado a la*

espera de tiempos mejores por lo que hubo que exagerar los gestos externos para evitar la fuerte tentación. Tengo la impresión de que era algo así como pregonar vehementemente la castidad hacia el exterior para intentar aliviar en uno mismo las tentaciones de la carne.

El resultado en Andalucía debe ser considerado como malo. Parece claro que el voto fluctuante que permite conseguir claros avances electorales (como fueron los de las anteriores autonómicas andaluzas) es extremadamente volátil y muy sensible al argumento de la gobernabilidad. Y que evidentemente en ellos hizo mella el discurso de la pinza. No creo que deba además hacerse abstracción de los problemas reales: en Andalucía es el sitio donde más capacidad de movilización tiene IU y donde efectivamente más lo ejerció para intentar explicar su proyecto. No basta pues con movilizar (otra pregunta es quién y cómo moviliza), es preciso no cometer errores. Y a toro pasado parece claro que no convenían esas elecciones autonómicas y que por tanto el error quizá fue no votar los presupuestos.

Otro factor que influyó negativamente fue el enfrentamiento entre la dirección del PCE y la de CC OO y la imagen pública proyectada de dominio absoluto de aquél sobre IU. No está de más precisar que aceptar la influencia del enfrentamiento no es sinónimo de reconocer la responsabilidad. Por mi parte creo que en CC OO se ha producido la batalla entre dos líneas sindicales distintas y mis simpatías están claramente del lado de los "perdedores". Por más que haya actitudes y personas que no puedan considerarse distintas de las de la mayoría.

Las elecciones en cualquier caso marcan el inicio de una nueva etapa en la que tengo la impresión de que el PP tratará de alcanzar el gobierno casi a cualquier precio. A ello le lleva la propia experiencia de Aznar que prueba que una vez alcanzado el poder, aunque sea en precario, es posible una ampliación electoral que puede derivar incluso en mayorías absolutas. IU debe tomar nota de ello cuanto antes, porque uno de los más graves errores en que podría incurrir sería obsesionarse con la situación del pasado



4 El encharcamiento

Las calabazas del 3 de marzo

Enric Tello

A quienes tenemos el corazón de izquierdas nos ha alegrado que la victoria del PP haya sido tan pírrica y seguimos con curiosidad la difícil gobernabilidad de los resultados del 3-M. Pero no podemos olvidar que estos resultados han sido francamente malos para cualquier proyecto transformador. El arte de Felipe González como encantador de serpientes, que nos recuerda el pulso que nos ganó con malas artes en el referéndum de la OTAN hace diez años, ha conseguido que mucha gente le votara con la intención de *parar a la derecha*. Los resultados están a la vista: el voto del miedo ha conseguido que la victoria del PP fuera pírrica, pero no ha podido evitarla; en cambio sí ha conseguido debilitar a la izquierda, aplazando la necesaria regeneración del PSOE.

Sin embargo, no sirve de nada lamentarse del poder manipulador de Felipe González si, a la vez, no intentamos responder a nuestra pregunta: ¿qué pasa con IU-IC-Els Verds? ¿Por qué la gente no confía más en nuestro proyecto? No podemos buscar coartadas. Esta vez el batacazo ha sido general: para la fórmula IU-V-CA nucleada por un PC inamovible en Andalucía, y para la coalición IC-Verds con el PSUC pasado a mejor vida en Catalunya; para el “anguitismo” incomprensible del PC e IU de Aragón, y para los supuestos “renovadores” de IU del País Valencià (tan incapaces de llegar a un acuerdo con Los Verdes como la dirección anguitista de Madrid), etc. Hay que atreverse a preguntarse el por qué. Si hay cosas de Anguita que producen rechazo, ¿cuáles son y por qué? Si las mismas u otras atraen a otra gente, ¿por qué? Si Felipe engatusa al personal, ¿cuál es el secreto de su éxito?

Me parece que el conjunto de IU-IC-Els Verds hemos cosechado cinco calabazas en el examen del 3-M.

Primera calabaza: la credibilidad del proyecto

En IU-IC-Els Verds falta todavía mucha capacidad de propuesta creíble o de credibilidad de la propuesta (como se quiera llamar). La “España en positivo” de Felipe era, como propuesta de izquierdas, pura realidad virtual. Pero nos ha hecho daño. Para mucha gente, para la mayoría, la realidad virtual es la nuestra y la

izquierda *real*, la que puede parar el peligro real de la derecha, es la de Felipe. Es surrealista, pero es así.

Ante esta situación podemos limitarnos a pedir la dimisión del pueblo por burro o miope. Esto es lo que parece hacer la dirección de IU, sin recordar el sarcasmo de Brecht. Esta actitud no sirve de nada. Si hemos recibido calabazas, lo mejor es que hagamos los deberes.

Para aprobar la primera asignatura es necesario profundizar en nuestro mensaje y nuestro proyecto. Preguntarnos si nuestro discurso conecta con la vida real de mucha gente y con lo que les preocupa. Nos falta credibilidad porque nos sobra doctrinarismo. El doctrinarismo no favorece la radicalidad de un proyecto. Hace que el proyecto mismo parezca alejado de la realidad de la gente, que es una realidad compleja, dinámica, a menudo contradictoria. Hace que el mensaje parezca fantasmagórico, como de otro mundo. Esto podía no ser un problema tan grave cuando había una gran fe en *otro mundo* posible, alimentada por el espejismo de que estaba a la vuelta de la esquina de Europa, en la *patria* socialista soviética. Pero en este final de siglo, cuando debe decirse que el único otro mundo posible, alternativo al existente, está en la gente misma, en su capacidad de pensar con la cabeza y sentir con el corazón, y de unirse a más gente con ideas y sentimientos comunes, la actitud doctrinaria sólo sirve para impedir la implantación del proyecto alternativo.

El lastre del doctrinarismo se manifiesta principalmente en una cosa: seguir pensando y actuando en términos de *contradicciones principales* y cuestiones *secundarias*, de sujetos revolucionarios *prêts-à-porter* y aliados ocasionales. Me parece un doctrinarismo obnubilador seguir pensando y actuando como si la clase obrera fuera un sujeto en formación de combate que está reclamando realmente un cambio (¡pero después no vota como debiera!) y que todo el problema consistiera en su dirección. Anguita dijo en uno de sus mítines que el 3-M el pueblo debía decidir qué general quería para dirigir el combate. Lo que pone los pelos de punta no es sólo la retórica militarista de la frase; es la propia idea de que exista un ejército formado, predispuesto al combate, que sólo espera que un buen estratega lo dirija.

La propuesta del proyecto rojiverde violeta solo ganará credibilidad si deja la *contradicción principal* en un cajón y es capaz de empezar a trabajar desde la simultaneidad de contradicciones y de la pluralidad de los sujetos a los que invita a actuar. Esto implica que equilibremos los dos polos que son los destinatarios de nuestro mensaje: aquéllos (y aquéllas) a quienes interpelamos. Por un lado, naturalmente, los poderosos, nuestros antagonistas. Pero, por otro lado, debemos prestar mucha más atención al mensaje que dirigimos a la gente, a las personas que llamamos a incorporarse a un proyecto de transformación social. No podemos dar por sentado que el sujeto del cambio que proponemos ya existe. No existe: debemos construirlo. Por eso es tan importante que el mensaje sea, como mínimo, tan plural, diverso, complejo y articulado como la vida real de las personas que son sus destinatarias.

Segunda calabaza: los mensajeros

La rigidez y el doctrinarismo del mensaje va de la mano con la unilateralidad y el hieratismo del mensajero. Falta pluralidad en las voces. Faltan colores en las consignas y caras en las listas. Falta una dirección más colegiada y una mayor

capacidad de trabajar en la diversidad. A mediados de los ochenta, Convocatoria por Andalucía, Iniciativa per Catalunya e Izquierda Unida fueron creadas justamente porque la lucha contra la OTAN hacia surgir unas energías sociales de izquierda que los partidos comunistas, en pleno declive electoral, no eran capaces de recoger y expresar políticamente. Diez años después, la pluralidad de la izquierda social real sigue sin reflejarse en las caras, las voces y los mensajes de IU-IC-Els Verds.

Esto es cierto sobre todo en Madrid, porque tanto en Andalucía como en Catalunya (con dos orientaciones bien distintas) la presencia de los verdes y otros colectivos (el SOC y su entorno en Andalucía, el Espai rojiverdivioleta en Catalunya) abre un poco más el espectro. Pero, a pesar de las diferentes tonalidades nacionales y regionales, en todas partes se acaba imponiendo la bipolarización entre el anguitismo vertebrado desde el PCE y la opción socialdemócrata tradicional representada por la mal llamada *nueva izquierda*. Muchas personas no nos sentimos identificadas con ninguna de estas opciones. Hay más gente, otros discursos y otras referencias. Los verdes y la opción rojiverdivioleta (que Jaime Pastor perfilaba en las páginas de *El Viejo Topo*) son las más vertebradas orgánicamente. Pero ni éstas, ni otras energías sociales procedentes del feminismo, del pacifismo o de los movimientos de solidaridad, encuentran verdadera cabida en IU. Y todavía menos se ofrecen oportunidades de expresión externa a estas personas y corrientes, por medio de las candidaturas y los diseños de las campañas electorales; ni en la IU dominada por el PCE (en Madrid o Zaragoza, por ejemplo), ni en la IU dominada por la vieja *nueva izquierda* (en Valencia, por ejemplo).

Tercera calabaza: la conciencia de la propia función

Somos una formación política que va contracorriente en un contexto de clara hegemonía neoliberal. Un análisis elemental de la situación indica que la opción por una política transformadora, que rompa con los consensos de la vieja socialdemocracia y el nuevo liberalismo de final de siglo, es completamente contradictoria con el objetivo del *sorpasso*. Tanto en el terreno electoral como en el sindical, pretender que una opción radicalmente disidente pueda ser mayoritaria, hoy por hoy, supone desconocer la situación social real. A pesar del paro y de la precariedad laboral, no es cierto que la clase trabajadora sea actualmente una base social dispuesta al reto de un cambio radical. No es cierto que esta mayoría sólo pueda perder sus cadenas. Mucha gente trabajadora tiene miedo de perder muchas cosas, y sólo quiere cambios *dentro de un orden*. Si el PSOE es considerado todavía como la izquierda *real* por tanta gente, y nosotros somos vistos como izquierda virtuosa y virtual, no es sólo porque Felipe González sea un gran embaucador. Tiene que ver con la relación entre el proyecto y el sujeto.

La pluralidad de situaciones, conflictos y dimensiones de la realidad permiten que, de vez en cuando, algunas propuestas nuestras calen en la gente, agrietando el muro hegemónico del *pensamiento único*. Los siete millones de votos del referéndum de la OTAN, la huelga general del 14-D, las movilizaciones contra la

guerra del Golfo, el impacto puntual de las campañas antinucleares o de ciertas propuestas ecologistas, la difusión molecular del feminismo, el cuestionamiento del actual modelo de ejército por la insumisión y la objeción, o las simpatías desveladas por las acampadas del 0,7 son diversos ejemplos de la posibilidad de desafiar al pensamiento único. Por eso es tan importante dejar a un lado la *contradicción principal* y los sujetos *prêts-à-porter* y combatir el pensamiento único dominante con un verdadero *pensamiento plural* alternativo y no con un *pensamiento único* doctrinario.

Pero no conviene engañarse sobre la base social que, aquí y ahora, se adhiere a un pensamiento globalmente alternativo y coherente. Bastante gente puede apoyar algunas de nuestras propuestas, y éste es el camino para arrancar mejoras o concesiones concretas: reformas dentro del sistema conseguidas gracias a la cuña de los que queremos cambiar de sistema. Pero las personas que defendemos un verdadero proyecto alternativo al orden social existente, sólo somos una pequeña cuña disidente. Mientras la situación social y cultural no dé un vuelco, la base de esta cuña disidente sólo podrá conseguir más del diez o doce por ciento de los votos si la propia cuña se hace menos afilada, es decir, mucho menos radical.

Hablando claro: en la situación política actual, la única opción coherente para intentar el *sorpasso* electoral del PSOE sería ceder la dirección del proyecto a la *vieja* opción socialdemócrata que representan los supuestos *renovadores* de IU. Pero si no se quiere esta vía (como no la queremos los verdes y la gente del espacio rojiverdeviolenta) y se quiere mantener la radicalidad transformadora de un proyecto verdaderamente alternativo, entonces el objetivo no puede ser el *sorpasso*. Pero si el objetivo no es el *sorpasso* ¿cual es el lugar de la gente alternativa en el juego político existente?

Cuarta calabaza: la falta de una cultura del pacto y del conflicto

Paradójicamente (¿o no?) la negativa a contemplar pactos municipales y autonómicos con el PSOE ha contribuido a reforzar el bipartidismo. Si una fuerza política que se sabe una cuña disidente renuncia de entrada a combinar el conflicto y el pacto, ¿qué le queda? *Dentro* del juego político establecido, el pacto es el principal instrumento al alcance de una pequeña cuña radical. Estimular el primitivismo político que identifica el pacto puntual con la bajada de pantalones o el cambio de camisa es una forma muy eficaz de arrojar piedras al propio tejado.

La demagogia de la campaña del PSOE, que invitaba a escoger entre Felipe o Aznar, hubiera funcionado peor si mucha gente hubiera confiado en la *fuerza de los pequeños a través del pacto*. La historia de la *pinza* tiene mucho de realidad virtual mediática. Pero de nuevo hay que reconocer que les ha funcionado y, muy probablemente, porque conectaba con una cultura política atávica que siente temor por las situaciones *ingobernables* y sólo confía en los Goliats bipartidistas. Una vez más, David ha perdido. Es necesario que afine la puntería.

Sé muy bien el riesgo que corro escribiendo esto desde donde lo hago. En IC el reflejo mayoritario es: "primero pactar, después pensar" (y esto condiciona la dinámica de toda la coalición IC-Els Verds). Pero en IU domina el reflejo

contrario: "pactos, ni pensarlo". El problema de fondo, como dice un editorial de la revista *En Pie de Paz* titulado "Elogio del conflicto", es que en los dos casos pacto y conflicto se consideran incompatibles. Sin embargo, el pacto es una forma de conducir el conflicto, y sólo tiene sentido en un proceso de conflicto. Ninguna fuerza transformadora puede renunciar al conflicto como instrumento de transformación de la realidad. Pero ninguna fuerza transformadora puede renunciar al pacto como forma de conducir el conflicto. Renunciar al conflicto es perder el alma. Pero no nos jugamos el alma en cada pacto. La izquierda alternativa necesita un curso acelerado de filosofía política de la no violencia.

Quinta calabaza: falta capacidad participativa

Igual que hace diez años, en el referéndum de 1986, Felipe González nos ha vuelto a ganar gracias al dominio (en todos los sentidos de la palabra) de los medios de comunicación. Hace diez años, después del golpe de la OTAN, ya valoramos que la única arma contra el dominio mediático era que *la gente hablara con la gente*: sólo la confianza que da la relación personal, la participación ciudadana en la red asociativa y en la vida política más próxima, en el barrio y la ciudad, podían desviar los ojos de la tele y liberar el cerebro del poder mediático.

IU-IC-Els Verds no hemos conseguido que nuestras coaliciones electorales sean verdaderos proyectos ilusionantes y participativos (y en esto las calabazas son para todos, ¡sin matices!). Nuestro proyecto ni invita, ni facilita, ni dedica realmente energías para conseguir la participación efectiva de la gente por la base.

La profesionalización de la política lo domina casi todo. El trabajo voluntario, donde aguanta, es un rescoldo que se apaga. De este modo, Felipe González siempre nos ganará la partida. También nos la ganará si, ante la impotencia, acabamos admitiendo que las cosas sólo se pueden hacer como las hacen ellos. Hacer como ellos y querer ser otra cosa es incoherente. Hacer como ellos, coherentemente, es emprender la vía para acabar *siendo como ellos*.

La falta de participación por abajo puede estar relacionada con la falta de una cultura política del pacto por arriba. Si todas las energías de la gente vinculada activamente al proyecto no se canalizaran sólo en el terreno electoral y parlamentario, como se hace actualmente. Si nuestras coaliciones fueran polícromas y asamblearias. Y si una parte fundamental de la actividad de nuestras coaliciones polícromas y asamblearias fuera el trabajo social, la lucha ciudadana en sus múltiples ámbitos, entonces no habría tanto miedo a desglosar dos o tres puntos de nuestro programa para pactar con el PSOE u otra fuerza política. El pacto no se vería como un problema de todo o nada, de sacrificar el alma a la razón o viceversa. Porque las cuestiones que no se pudieran conseguir con un pacto no quedarían en barbecho: seguiríamos trabajando activamente por ellas en la lucha social.

Hay gente que cree que coalición electoral y dinámica asamblearia son dos cosas incompatibles. Está por ver: hay que experimentar, equivocarse y aprender. La pluralidad de colores, sujetos, problemas y energías sociales que es necesario unir en un proyecto debe hacerse visible en toda la actividad electoral y parlamentaria. Al mismo tiempo, las personas que participan del proyecto han de poderse

encontrar cara a cara, hablar de tú a tú, han de aprender a negociar y actuar políticamente unidas a través de una dinámica asamblearia. No digo que sea fácil. Pero pretender encorsetar toda la pluralidad de energías de la izquierda real en una única formación política que integre todas las diferencias en una síntesis superadora, no es una tarea más fácil. Es sencillamente imposible.

Desde el principio el Espai rojiverdivioleta ha considerado que la nota más baja de la coalición IC-Els Verds en Catalunya era en dinámica participativa. Tímidamente, en todas nuestras intervenciones públicas, hemos reclamado extender la coalición por la base con una dinámica asamblearia. Me parece que después de sufrir los efectos de tres convocatorias electorales seguidas y del batacazo del 3-M, quizá ha llegado la hora de proclamar: "Estamos hartos. Viva la asamblea".

Traducción: Martí Causa

(De *Un altre full*, boletín editado por l'Espai Roig-Verd-Violeta y el Centre de Treball y Documentació)



5 El encharcamiento

Elecciones en Euskadi

Pedro Ibarra

Las recientes elecciones –contra los pronosticadores de grandes vuelcos– han exhibido sobre todo la consolidación de determinadas tendencias apuntadas desde el principio de la década. En general en el conjunto del Estado y en particular en alguno de sus territorios o naciones; en concreto en Euskalherria. Me fijaré especialmente en el espacio vasco, para hacer al final una breve consideración acerca del resto del Estado.

El punto de partida (y probablemente de llegada) es la evolución negativa del voto nacionalista. Pero antes de cuantificar y tratar de explicar este proceso descendente conviene hacer una precisión, o más exactamente intentar contestarse a una pregunta y sus correspondientes ramificaciones. ¿Cuál es el voto nacionalista?, ¿todos los votantes al PNV, son nacionalistas? ¿ningún voto a IU o

aún al PSE-EE, es nacionalista?, ¿qué es, maldita sea, ser una nacionalista vasco? Se supone que una correcta contestación a la última pregunta, arrojará luz sobre todas las demás. Pero me niego a meterme a fondo en tal pantano, por lo que sólo aportará algunas pistas de sentido común para mejor enmarcar el problema.

Algunas pistas

-No deberíamos identificar la exigencia inmediata de independencia con el nacionalismo. Ello dejaría fuera a la mayoría de los votantes del PNV. La última encuesta de *Euskobarómetro* concede un 25% a la opción independentista, muy poco más que la suma de votos de HB y EA.

- Tampoco está claro que nacionalista sea aquel que se sienta especialmente abrumado y preocupado por la cuestión del autogobierno en general. En la encuesta citada, el autogobierno aparece en el ante último puesto, el 11, del *ranking* de preocupaciones de la sociedad vasca. Si aplicamos este criterio, casi nadie sería nacionalista.

- Si desplazamos el enfoque al terreno cultural, definiendo al nacionalista como aquél que, sin más, se siente miembro de una comunidad diferenciada –y le gusta sentirse así– tendríamos que incluir a muchos votantes de IU y el PSE-EE que consideran perfectamente compatible tal sentido de pertenencia con un proyecto político estatal.

Quizá, al final, lo que defina a un nacionalista sea que vote a un partido que se autodefina como nacionalista. Como, evidentemente, para este viaje no necesitábamos tantas alforjas, añadiré alguna precisión más. Es nacionalista en la medida que afirma, con su voto al partido nacionalista correspondiente, su pertenencia a la comunidad diferenciada vasca, en la medida que asume el hecho de que el partido al que vota pretende un mayor autogobierno (al margen del mayor o menor entusiasmo que le produzca dicha pretensión, la apoya porque cree que ello es una consecuencia natural –simbólica y material– de su identidad colectiva) y sobre todo porque cree que quien mejor define los intereses de su comunidad son aquéllos que definen como prioritaria precisamente la acción política dirigida a ésa su comunidad (ciertamente este último comportamiento político es fronterizo con el regionalismo, pero en cualquier caso también es nacionalista).

Bajo este enfoque, quedarían muy escasos votantes del PNV fuera de la denominación. Antes sí existían potenciales electores del PP que votaban al PNV por exclusivas razones de ley, orden y eficacia administrativa. Pero hoy estos votantes se han reencontrado con su partido natural, el PP. Es probable que en muchos votantes del PNV esa emoción identitaria con consecuencias políticas, sea muy tenue, pero existe y en cualquier caso no estamos discutiendo ahora sobre intensidades emotivas nacionalistas, sino simplemente de proyectos políticos. La cuestión puede ser más dudosa en el caso de algunos votantes de IU (¿también del PSE?) donde pueden existir nacionalistas –tal como acabamos de definir– de izquierdas que rechazan la violencia del MLNV y por tanto se niegan a votar a HB. Sospecho, sin embargo, que no son demasiados.

A la vista de estas consideraciones, y con las debidas reservas, sí creo que sigue siendo un baremo comparar entre sí la evolución del voto del bloque de formaciones que se autodenominan como nacionalistas (PNV, EA, HB, y EE

hasta 1992), frente a los que no se definen como tales (PP, PSOE, IU y UA).

En principio, en las autonómicas municipales sigue ganando el bloque nacionalista. Pero las diferencias con el otro bloque se han reducido notablemente. Así en las autonómicas de 1990 logró el 65,39% del voto y en las municipales de 1991 el 65,24%. Sin embargo, 1994 y 1995 desciende al 56,44% y 53,89% respectivamente. Por el contrario el bloque no nacionalista pasa en las autonómicas del 30,40% al 43,40% y en las municipales 30,98% al 41,28%. Podría alegarse que el acercamiento no es tan llamativo en cuanto que el voto de EE, que hemos incluido en el bloque nacionalista en 1990 y 1991, no era un auténtico voto nacionalista. Pudiera ser. Pero en cualquier caso no parece que casi ningún voto de esa *ambigua* formación nacionalista derivó posteriormente a partidos nacionalistas. Además la ganancia comparativa del voto no nacionalista (13% en tres autonómicas y 11% entre municipales) casi dobla los votos de EE de principios de la década (7,68% en las autonómicas de 1990 y 6,78% en las municipales de 1991).

Si las diferencias disminuyen en las confrontaciones más cercanas, la brecha desaparece y se invierte en las lejanas, en las españolas. En 1993 ambos bloques empataron: 47,6% cada uno. Pero en 1996 vence el bloque no nacionalista, 48,9% contra el 45,50%.

El voto nacionalista desciende en sus opciones radicales. El goteo de HB se ha convertido en caída libre. En las autonómicas de 1994 consigue frenar la tendencia negativa. Pero a partir de la ponencia *Oldartzen*, a partir de su absoluta supeditación a la estrategia de ETA, la permanente pérdida de votos (del 18,33% en las autonómicas de 1990 al 12,3% en las generales de 1996) constituye ya un hecho irreversible. Quizás HB le reste importancia al mismo, porque ha decidido despreciar la participación institucional. Pero la realidad es que también a través de las elecciones, HB pide el apoyo a ETA; y cada vez hay más vascos que desprecian su opción violenta. HB tiene menos votos y cada vez su voto se ruraliza más. Así por ejemplo de las 37 poblaciones de Bizkaia en donde logra más del 20% de los votos, 30 tienen menos de 1.000 habitantes, 4 menos de 2.000 y 3 menos de 10.000; a su vez HB no llega al 10% en las 8 poblaciones vizcainas de más de 25.000 habitantes.

EA mantiene un electorado fiel en Gipuzkoa pero poco a poco va perdiendo votos en los otros territorios históricos. EA corre el peligro de mantener sus apoyos casi exclusivamente en lealtades locales y en el carisma de su líder. Y por otro lado una de sus bazas históricas fuertes —el discurso anti PNV—, no lo ha podido utilizar a fondo en los últimos tiempos en la medida que ha compartido gobierno con él.

El PNV es el socio fuerte del bloque nacionalista. Crece en las autonómicas y crece en las generales. El PNV compensa la pérdida de votos por las causas que luego veremos con votos de otros partidos nacionalistas, y participando en la correspondiente cuota de nuevos votantes o ex abstencionistas. Y ello porque el PNV es identificado por mucha gente con “los que hacen cosas concretas”, con la Ertzaintza (la institución situada en segundo lugar en el *ranking* de valoraciones de la encuesta citada), con los impuestos que se pagan en las Diputaciones y además con un discurso nacionalista suficientemente otorgador de diferencia y pertenencia colectiva, pero escasamente exigente y mucho menos aventurero. Y a mucha gente le gusta eso; exactamente lo que representa el PNV. Ni más ni menos.

En todo caso, y en las cifras de conjunto, el nacionalismo pierde adeptos y se modera. Las causas pueden ser muchas y por supuesto todas discutibles. Apunto un par de ellas.

La violencia de ETA ha generado significativas bajas en el voto nacionalista a HB y probablemente también a algunos anteriores votantes al nacionalismo moderado, en cuanto que ahora identifican violencia y nacionalismo. Probablemente estos últimos votos hayan derivado hacia partidos estatales, aunque ello no parece que haya sucedido respecto a los antiguos votantes de HB (salvo contadas excepciones a favor de IU). Por ello hay que añadir otra razón, sin duda conectada a la anterior. En general el nacionalismo vasco transmite hoy una cierta imagen de confusión. No aparece demasiado claro cuál es el proyecto nacional y social (¿más Estatuto o superar el Estatuto?, ¿conservadores o socialdemócratas?) del nacionalismo moderado y las propuestas progresistas del nacionalismo radical aparecen mediatizadas y oscurecidas por el cegador referente de la violencia. Ambigüedad y muerte retraen al potencial votante nacionalista quien pide algo más que simbología identitaria y votar “a los de casa de toda la vida”.

El voto no nacionalista

Pasemos ahora el bloque no nacionalista. El irresistible ascenso del PP (del 8,1% en las autonómicas de 1991 al 14,9% en las generales de 1996) se construye ciertamente en la recogida de votos de la extinta UCD/CDS. Pero no sólo. El PP crece con votos nuevos y antiguos, antes disfrazados dentro del nacionalismo moderado. Y ello en la medida que logra romper la barrera del miedo y la culpa de muchos potenciales votantes, a los que ha logrado convencer —a través de una nueva hornada de líderes más *locales*— que no hay porqué tener vergüenza de autodefinirse como español y de derechas (o de centro derecha); por añadidura ello puede promocionar hasta una actitud valiente, emocionante, ante la vida (“diré que soy del PP aunque me peguen un tiro los de la ETA”) para diferentes grupos de pardillos derechosos.

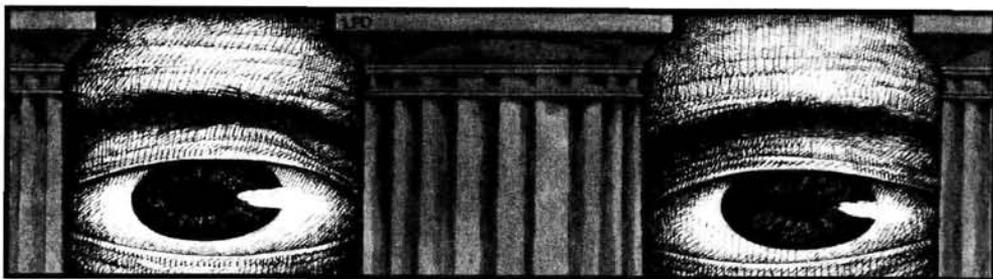
A pesar de todo los pesares el PSE-EE permanece incombustible. Ni GALes, ni corrupciones parecen hacerle mella. Pero no conviene equivocarse. El voto a los socialistas no es, en línea general, el de enchufados, amigos de la corrupción o partidarios del GAL. El voto del PSOE se nutre de aquéllos a los que no les gusta nada ni el nacionalismo ni la derecha.

Otra espectacular ascensión es la de IU (1,40% en las autonómicas de 1990 a 9,2% en las generales de 1996). Crece con los votos de la desaparecida Euskadiko Ezkerra y también, aunque bastante menos de los previstos, con desencantados del PSE. Pero no todos son préstamos o robos. También parece que IU recoge un nuevo voto joven de izquierdas ligado a movimientos y asociaciones sociales que rechaza al nacionalismo radical. Por ahí parece que puede tener futuro.

La consideración sobre IU me lleva a una muy escueta reflexión final del panorama electoral estatal, ceñida a esta última formación política (de lo ocurrido al PSOE y al PP pueden extrapolarse al contexto estatal algunos de los anteriores apuntes sobre su conducta electoral en Euskadi).

Da la sensación que IU pierde, en el terreno de juego socialdemócrata, la competición con el PSOE. Es decir, el electorado, a pesar del discurso programático de IU, no percibe grandes diferencias cuantitativas, y por supuesto ninguna cualitativa, en las ofertas de mantenimiento/reforzamiento del Estado de

Bienestar. El PSOE, a pesar de sus objetivas prácticas neoliberales, consigue aparecer en los periódicos electorales como el paladín de las igualdades públicas frente a los afanes privatizadores del PP, oscureciendo sistemáticamente las propuestas de IU. Por ello sería el momento de preguntarse si no debería IU apostar seriamente por su otra estrategia política. Aquélla dirigida a reconstruir desde abajo, pacientemente, el débil tejido social de la izquierda. El verde, el violeta, el blanco... y por supuesto, el rojo.



6 El encharcamiento

¿Hacia un pacto estable de las derechas?

Jaime Pastor

Los resultados electorales del 3-M no han sido, desde luego, los deseados y esperados por la derecha española, pero no por ello dejan de constituir el cierre de un ciclo presidido por el predominio del PSOE en la vida política. Habrá que ver, no obstante, si lo que se va a producir en los próximos años es un simple *paréntesis* antes del retorno de Felipe González a la Moncloa o, por el contrario, a lo que asistimos es a un proceso de gradual consolidación de la hegemonía de las derechas en el Estado español.

Es por esto último por lo que apuesta la mayoría de los *poderes fácticos* españoles y transnacionales en función, sobre todo, del objetivo principal dirigido al cumplimiento de los criterios y el calendario de convergencia de Maastricht. Pero para ello, la dirección del Partido Popular, carente de la mayoría *suficiente* en el Parlamento, se está viendo obligada a dar un giro copernicano respecto a lo que ha sido una de sus principales señas de identidad, la defensa del nacionalismo español y la actitud excluyente ante los nacionalismos *periféricos*.

Estas parecen ser, por ahora, las dos grandes cuestiones en las que las derechas han de ponerse de acuerdo. La primera, relacionada con la política económica y social, va a crear escasos problemas en su seno: se trata de proseguir la

desregulación del mercado laboral, las privatizaciones y los *ajustes* en los gastos sociales que ya los gobiernos de Felipe González han practicado durante los últimos años. La dificultad está ahora en que el factor tiempo es decisivo y que para ello hará falta disfrazar las medidas en nombre de la *eficacia* y la *modernización* para intentar mantener pasivos a los principales sindicatos.

Como hemos podido comprobar en las reuniones del foro de Davos, en las recomendaciones del Instituto Monetario Europeo (que aconseja recortes de gastos en sanidad y pensiones) y, sobre todo, en las propuestas del G-7 (en donde ni siquiera se ha condenado la extensión del trabajo infantil y, en cambio, se ha apostado claramente por el modelo *americano*), el neoliberalismo sigue avanzando y sólo provoca pérdida de confianza empresarial cuando, como en Estados Unidos, sube el empleo... Del Estado de Bienestar prometen que quedarán aquellos derechos sociales *residuales* que, con la ayuda de la *sociedad civil* privada, sirvan para atenuar al menos el potencial desestabilizador del aumento del paro y del trabajo precario. En resumen, los objetivos del capitalismo en esta nueva fase de acumulación y de competencia más salvaje siguen hallando sus límites en la necesidad de mantener, al menos en regiones como la nuestra, un grado básico de legitimación social que evite la reproducción de movilizaciones como la que se dio en diciembre pasado en Francia.

En esas condiciones no será difícil que la labor del gobierno del PP pueda contar con el consenso o la neutralidad de la mayoría de las fuerzas parlamentarias para llegar a formar parte del *núcleo duro* de la Unión Europea, si bien pueden darse diferencias respecto al ritmo y a la táctica a aplicar en determinados sectores, en particular los pensionistas.

Reforma del Estado

En cuanto al reconocimiento de la existencia de distintas naciones dentro del Estado español y a las consecuencias que se derivan en el reparto competencial y, más allá de esto, en la reforma del Estado autonómico, éste es sin duda el *test* fundamental de la actual coyuntura política. Porque es ya bastante obvio que si el PP no ha conseguido una mayoría *suficiente* en estas elecciones, va a ser muy improbable que la obtenga en el futuro. Se está extendiendo, por tanto, la convicción de que si se quiere garantizar la *governabilidad* y la *estabilidad* del sistema político, éstas exigen una colaboración entre las distintas, pero no por ello opuestas, derechas. Porque, por mucha vocación acaparadora de votos que tenga Aznar, el techo alcanzado en lugares como Catalunya es suficientemente demostrativo de que sigue teniendo un déficit de credibilidad democrática no sólo entre las gentes de izquierda sino también entre quienes continúan viéndolo como expresión de un nacionalismo español intolerante.

De esta forma, siendo un tanto *clásicos*, podríamos decir que el interés común capitalista favorece un acercamiento de posiciones entre PP, por un lado, y CiU y Coalición Canaria e incluso el PNV, por otro. Pero su identificación con nacionalismos hasta ahora enfrentados exige entrar en un incierto juego de cooperación y competición en el que, a cambio del no cuestionamiento del Estado-nación español y el apoyo a la investidura de Aznar, éste les compense con concesiones suficientemente visibles a su *nacionalidad* en ámbitos como el de la

financiación, el institucional o el simbólico. Como estamos viendo, no parece imposible que lleguen ahora a un término medio lleno de compromisos y promesas a concretar. Habrá que valorar, por tanto, cuál es el alcance de los acuerdos y qué tensiones genera en el seno de cada uno de sus partidos y, más concretamente, en sus capas más jóvenes.

De lograrse un consenso relativamente estable entre estas fuerzas, nos encontraríamos ante un avance histórico de las derechas que significaría el definitivo comienzo de un nuevo ciclo político. Pero es en todo caso prematuro considerar que un acuerdo entre élites políticas en aras de la *governabilidad* vaya a provocar en tan escaso tiempo un cambio de mentalidades en sus electorados respectivos y en lo que ha sido la construcción social de unas identidades nacionales tan enfrentadas.

Por eso tampoco hay que descartar que el apoyo a la investidura de Aznar por Pujol tenga una continuidad limitada en el tiempo, dirigida principalmente a evitar unas elecciones anticipadas, a cumplir con el calendario de Maastricht y a sacar la mayor tajada posible en competencias autonómicas. Después, posiblemente resurjan las tensiones y los conflictos derivados de las políticas contradictorias que practique el PP y de los *agravios comparativos* procedentes de las otras Comunidades Autónomas, particularmente de aquéllas que, como Galicia, también se consideran nación o de otras gobernadas por el PSOE por razones de oportunismo político.

En ese contexto es significativo que la actitud de la dirección del PSOE sea la de apoyar que CiU pacte con el PP, al mismo tiempo que pretende aparecer como defensor de *España* y del *Estado* así como de la solidaridad entre Comunidades Autónomas. Su voluntad de no actuar como fuerza *desestabilizadora* en materias como la de Maastricht se combinaría así con un nacionalismo español de "izquierdas" muy peligroso, especialmente en la versión extrema de populistas como Rodríguez Ibarra. Esa podría ser una táctica que le sirviera para prepararse a la hipótesis de unas elecciones anticipadas e incluso, como ya ha sugerido Enrique Múgica, a ofrecerse para pactos explícitos con el PP sobre *cuestiones de Estado*, en el caso de que entrara en crisis la alianza de éste último con CiU.

Las relaciones del PP con el PNV van a ser probablemente más difíciles y van a depender mucho de cuál vaya a ser la vía de compromiso que alcancen para responder al problema de la violencia de ETA. Porque, por muy condenable moralmente que sea —que lo es— la actividad de esta organización, es evidente que la política puramente represiva no ha impedido la continuidad de su escalada y el apoyo social de un sector de la población vasca. La búsqueda de una salida dialogada y negociada —en público y/o en secreto— y, en todo caso, un mayor desarrollo de su poder autonómico parecen ser las propuestas que Arzallus y Ardanza ponen encima de la mesa. Y en todo esto puede ser más difícil una colaboración más estrecha a la vista de la fuerza que tiene el discurso *antiterrorista* sin concesiones en las bases del PP y de promesas electorales como la, por ahora aplazada, de endurecer el Código Penal contra el sector abertzale.

¿Y la izquierda?

Si en el campo de las derechas, vemos que se puede ir produciendo la construcción gradual y conflictiva de un bloque compuesto de partidos de ámbito español y nacional-regional, en cambio en la izquierda el 3-M ha significado el refuerzo,

pese a su derrota, del *felipismo*, mientras que IU no ha logrado capitalizar el desgaste político sufrido por aquél en los dos últimos años.

Se trata de uno de los peores resultados posibles. Porque, con *todo lo que ha llovido* (como no se cansan de recordar sus acólitos y publicistas), el hecho de que Felipe González haya logrado concentrar el *voto útil contra la derecha* supone un bloqueo de cualquier giro a la izquierda de este partido, al menos en el corto y medio plazo. Con esto no se quiere decir que no pueda haber, desde la oposición, cambios en el discurso y en la práctica institucional e incluso no institucional; pero éstos se van a dar dentro de un marco de referencia *social-liberal* y de monopolio de poder partidario que, en ausencia de una removilización social, convierten en ilusoria cualquier orientación táctica sistemática de *unidad de la izquierda*, ya venga desde Izquierda Socialista, desde Nueva Izquierda o... desde las direcciones sindicales.

Porque si al dato anterior añadimos el retroceso de IU en las elecciones andaluzas y su estancamiento en las generales, nos encontramos con que lo que pretende ser el polo de referencia para la reconstrucción de una izquierda transformadora y alternativa ha perdido credibilidad y fuerza de arrastre. En sus resultados ha influido, sobre todo, el clima de miedo a la derecha y desmovilización social, pero no por ello hay que olvidar la negativa influencia que han tenido factores como el discurso del *sorpasso*, el doble rasero en la táctica empleada en más de una ocasión respecto al PSOE y al PP, el protagonismo del PCE en los últimos tiempos o sus malas relaciones con muchos movimientos sociales **1/**.

Mirando hacia adelante, es probable que dentro de IU se acentúen las tensiones entre los distintos proyectos que conviven en su seno. No es cuestión ahora de caracterizar cada uno de ellos, aunque, siendo esquemáticos, podríamos referirnos fundamentalmente a tres: uno sería aquél que busca reconstruir una corriente socialdemócrata dispuesta a defender lo que queda del Estado de bienestar y resignada a hacerlo en el marco de las reglas del juego neoliberales (en realidad, es lo que parece que hace el PDS de d'Alema en Italia); otro sería el que aspira a resistir a esa ola neoliberal con un reformismo *fuerte*, nacional-estatalista y sectario; otro, en fin, el que está convencido —y no sólo se adhiere formalmente— de la necesidad de refundar un proyecto de nueva formación política *roji-verde-violeta*, superadora de la socialdemocracia y de los partidos comunistas y basada en una visión alternativa al neoliberalismo y a una política institucional que ha contribuido a desmovilizar a los y las de abajo.

No pretendo identificar los proyectos con siglas determinadas, porque considero que las fronteras dentro de IU no están claramente establecidas entre cada una de sus organizaciones, colectivos o corrientes. Menos aún tras el 3 de marzo cuando se está imponiendo un período de reflexión, reorientación y reestructuración interna. Por eso es un error reforzar de hecho, como está ocurriendo hace algún tiempo, el peso de los partidos dentro de IU, ya que esto contribuye a ocultar la

1/ Para una mayor explicación del balance poselectoral que algunos hicimos dentro IU, me remito a la contribución que presentamos a la Presidencia Regional de Madrid y al Consejo Político Federal de IU Manuel Garí, Jesús Jaén, Decio Machado, Luis Peris y yo mismo (*Tras el 3 de marzo*, 8 de marzo 1996); también, la Declaración *Después de las elecciones generales*, de Izquierda Alternativa de Madrid, marzo 1996.

diversidad interna, particularmente en el PCE, y, sobre todo, impide la mezcla y el avance hacia la transformación de IU en lo que teóricamente quiere ser: un *movimiento político-social* que vaya más allá de la vieja forma partido y que llegue a confluir con mucha gente alternativa que se encuentra fuera de esa organización.

En ese contexto el peso mayor de uno u otro proyecto va a depender de cuáles sean las respuestas que vayamos dando a los retos de la nueva etapa política y de la removilización social que seamos capaces de generar; pero también de que los partidos presentes en IU vayan renunciando a su protagonismo y permitan el libre debate de ideas y el respeto a la pluralidad interna en el marco de la construcción en común de una nueva identidad colectiva.

Naciones, federalismo y solidaridad

Hay además un problema central que atraviesa al conjunto de IU y frente al cual todavía está escasamente preparada la mayoría de sus dirigentes y afiliados y afiliadas. Me refiero al que tiene que ver con la realidad plurinacional del Estado español. Por poner un ejemplo, si releemos hoy la resolución sobre Modelo de Estado de la IV Asamblea Federal de IU, sus autores deberían reconocer, como mínimo, que ésta ha quedado desbordada en aspectos importantes por el debate que está hoy al orden del día entre las mismas élites políticas y *mediáticas*.

La tradición españolista de la mayoría de la izquierda y el consenso que sobre esta cuestión se asumió durante la transición política pesan como una losa a la hora de tomar una posición audaz y radicalmente democrática que vaya más allá de las declaraciones solemnes sobre la plurinacionalidad y la federalidad que emplean hoy personajes de pasado franquista como Fraga. Por eso uno de los grandes desafíos que tiene IU en este nuevo ciclo es precisamente el de saber hacer compatibles tres objetivos: la defensa y extensión de los derechos sociales del mundo del trabajo y de los excluidos en todo el Estado; la exigencia del reconocimiento del derecho a la autodeterminación y, por tanto, de la construcción democrática –y no impuesta– de un Estado federal; y la lucha contra los desequilibrios territoriales entre unas zonas y otras. Oponer la solidaridad social e interterritorial al derecho al autogobierno sería caer en el peor de los populismos y nos haría extraños compañeros de viaje de sectores del españolismo menos liberal.

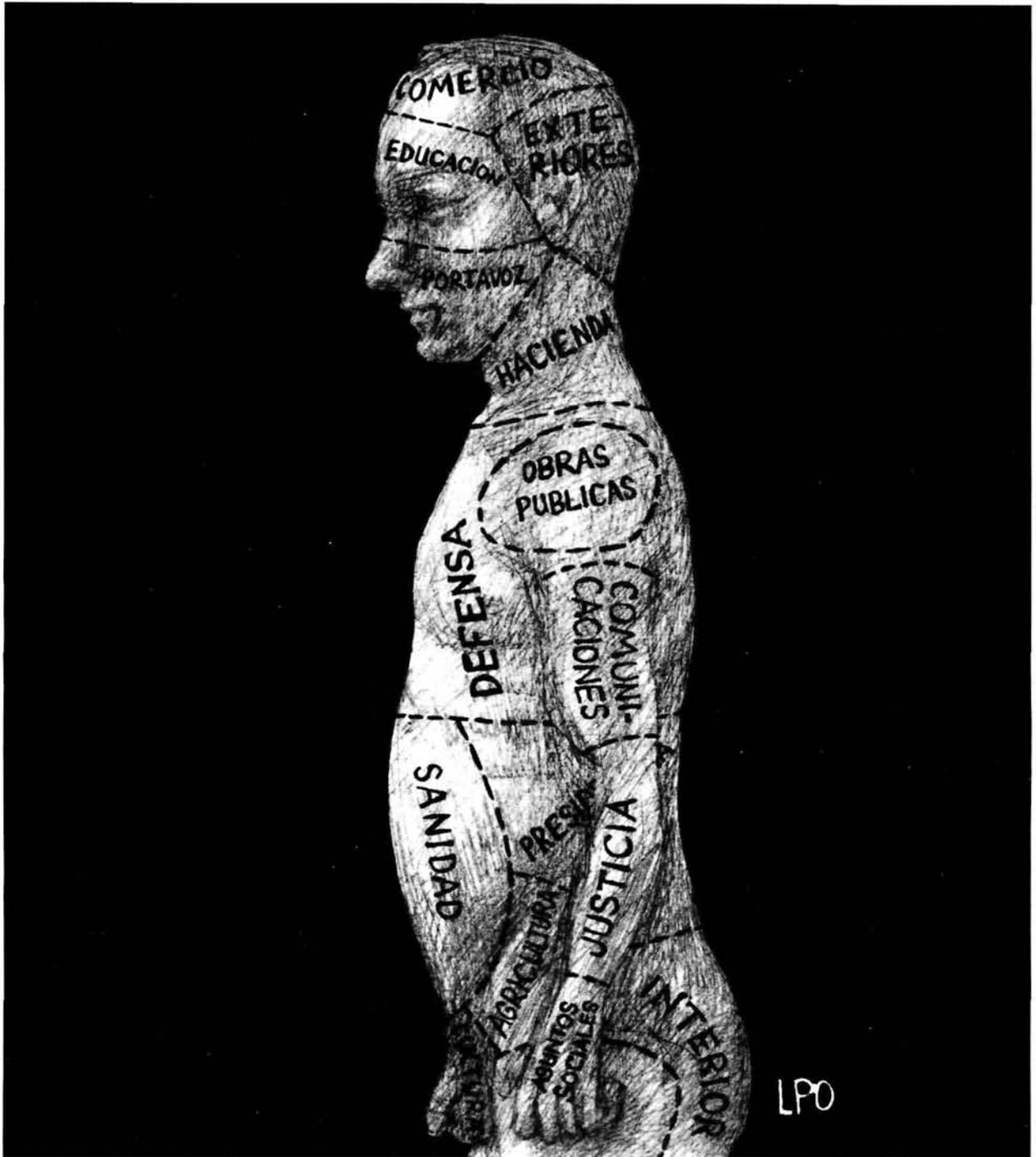
Porque no se trata de ignorar que detrás de las negociaciones entre Aznar y Pujol hay unos intereses de clase y una ideología neoliberal que actúan a favor de compartir y reforzar una misma política económica y social. Pero no sólo hay eso: existe también la urgencia del reconocimiento, aunque sólo sea por razones de *gobernabilidad*, de que una mayoría de la población catalana se considera una nación. La tarea de la izquierda, sobre todo la que está fuera –en este caso– de Catalunya es, primero, saber deslindar en cada ámbito concreto entre, por un lado, lo que no es más que una aceptación tardía de algo derivado del derecho al autogobierno y, por otro, lo que puede ser el contenido concreto o el uso insolidario de determinada competencia por parte del gobierno de Pujol; y, segundo, exigir que el debate sea público y multilateral con el fin de ir a la raíz del problema: la necesidad de una reforma constitucional que refleje en todos los

ámbitos la plurinacionalidad, reconozca la autodeterminación de los pueblos que la reclamen y avance hacia un federalismo desde abajo, capaz de respetar simultáneamente la igualdad y las diferencias nacionales. De esta manera, ofreciendo una alternativa diferente tanto de las derechas como del PSOE, podremos ir generando una cultura política federalista dentro del conjunto de la izquierda social y de la propia Izquierda Unida que evite desgraciadas confrontaciones entre nacionalistas de un lado y de otro, o que se limite a reproducir el *agravio comparativo* de unas Comunidades Autónomas frente a otras **12**

Por esa vía debería ir también una solución dialogada y pacífica al conflicto vasco, como muy bien sostiene Elkarri en una carta dirigida a IU cuando afirma: "Por qué esperar a treguas de ETA u otras condiciones para desarrollar las propuestas de solución, la búsqueda de intereses comunes. Por qué no hacer un mayor esfuerzo en desarrollar las propuestas como el Estado federal, y el reconocimiento del derecho de autodeterminación, a fecha de hoy, y en nuestro marco concreto. Este esfuerzo de análisis y propuestas es lo que puede hacer avanzar la paz en el país, no reproducir lo que ha fracasado tantos años: la solución policial y los inmovilistas *pactos por la paz*".

La reinención de un federalismo asociado al nuevo internacionalismo que hay que fomentar en este fin de siglo es una labor político-cultural que tiene mucho que ver con nuestra oposición a Maastricht y con la necesidad de construir social y democráticamente otra idea de Europa. Porque no se trata de replegarse al marco de cada Estado-nación sino de buscar una nueva relación entre los trabajadores, los pueblos, las naciones y las regiones de Europa, dispuesta a hacer frente a un neoliberalismo *globalista* que, en palabras de Alain Touraine, está conduciendo a la "deconstrucción de las sociedades europeas". Quizá avanzando por el camino que proponemos podríamos llegar algún día, como se ha atrevido a sugerir alguien tan poco sospechoso de antiliberal como Manuel Castells, a proponer la "desconexión" con los otros dos ejes de la "Gran Tríada" (Norteamérica y Japón...) y a establecer nuevas relaciones de cooperación con los pueblos de la *periferia*.

2/ Por desgracia, el grupo de trabajo IU-IC relativo al Estado federal, del que formo parte, todavía no ha llegado a un acuerdo definitivo sobre el documento presentado para su discusión posterior en ambas organizaciones.



Neoliberalismo

Balance y perspectivas para la izquierda

Perry Anderson

Comencemos con los orígenes de lo que se puede definir como neoliberalismo en tanto fenómeno distinto del mero liberalismo clásico, del siglo pasado. El neoliberalismo nació después de la Segunda Guerra Mundial, en una región de Europa y de América del Norte donde imperaba el capitalismo. Fue una reacción teórica y política vehemente contra el Estado intervencionista y de bienestar. Su texto de origen es *Camino a la Servidumbre*, de Friedrich Hayek, escrito en 1944. Se trata de un ataque apasionado contra cualquier imitación de los mecanismos del mercado por parte del Estado, denunciada como una amenaza letal a la libertad, no solamente económica, sino también política. El blanco inmediato de Hayek, en aquel momento, era el Partido Laborista inglés, en las vísperas de la elección general de 1945 en Inglaterra, que este partido finalmente ganaría. El mensaje de Hayek es drástico: “A pesar de sus buenas intenciones, la social-democracia moderada inglesa conduce al mismo desastre que el nazismo alemán: a una servidumbre moderna”.

Tres años después, en 1947, en cuanto las bases del Estado de Bienestar en la Europa de posguerra efectivamente se constituían, no sólo en Inglaterra sino también en otros países, Hayek convocó a quienes compartían su orientación ideológica a una reunión en la pequeña estación de Mont Pèlerin, en Suiza. Entre los célebres participantes estaban no solamente adversarios firmes del Estado del Bienestar europeo, sino también enemigos férreos del *New Deal* norteamericano. Entre la selecta asistencia se encontraban, entre otros, Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Ludwig Von Mises, Walter Eukpen, Walter Lippman, Michael Polanyi y Salvador de Madariaga. Allí se fundó la Sociedad de Mont Pèlerin, una suerte de franco-masonería neoliberal, altamente dedicada y organizada, con reuniones internacionales cada dos años. Su propósito era combatir el keynesianismo y el solidarismo reinantes, y preparar las bases de otro tipo de capitalismo, duro y libre de reglas, para el futuro. Las condiciones para este trabajo no eran de todo favorables, una vez que el capitalismo avanzado estaba entrando en una larga fase de auge sin precedentes –su edad de oro–, presentando el crecimiento más rápido de su historia durante las décadas de los 50 y 60. Por esa razón, no parecían muy verosímiles los avisos neoliberales de los peligros que representaba cualquier regulación del mercado por parte del Estado. La polémica contra la regulación social, entre tanto, tuvo una repercusión mayor. Hayek y sus compañeros argumentaban que el nuevo igualitarismo (muy relativo, bien entendido) de este período, promovido por el Estado de Bienestar, destruía la libertad de los ciudadanos y la vitalidad de la competencia, de la cual dependía la prosperidad de todos. Desafiando el consenso oficial de la época, ellos argumentaban que la desigualdad era un valor positivo –en realidad imprescindible en sí mismo–, de la que precisaban las sociedades occidentales. Este mensaje permaneció en teoría más o menos 20 años.

La llegada de la gran crisis del modelo económico de posguerra, en 1973, cuando todo el mundo capitalista avanzado cayó en una larga y profunda recesión, combinando, por primera vez, bajas tasas de crecimiento con altas tasas de inflación, cambió todo. A partir de ahí las ideas neoliberales pasaron a ganar terreno. Las raíces de la crisis, afirmaban Hayek y sus compañeros, estaban localizadas en el poder excesivo y nefasto de los sindicatos y, de manera más general, del movimiento obrero, que había socavado las bases de la acumulación privada con sus presiones reivindicativas sobre los salarios y con su presión parasitaria para que el Estado aumentase cada vez más los gastos sociales.

Esos dos procesos destruirían los niveles necesarios de beneficio de las empresas y desencadenarían procesos inflacionarios que no podían dejar de terminar en una crisis generalizada de las economías de mercado. El remedio, entonces, era claro: mantener un Estado fuerte, sí, en su capacidad de romper el poder de los sindicatos y en el control del dinero, pero parco en todos los gastos sociales y en las intervenciones económicas. La estabilidad monetaria debería ser la meta suprema de cualquier gobierno. Para eso era necesaria una disciplina presupuestaria, con la contención de gasto social y la restauración de una tasa *natural* de desempleo, o sea, la creación de un ejército de reserva de trabajo para quebrar a los sindicatos. Además, eran imprescindibles reformas fiscales para incentivar a los agentes económicos. En otras palabras, esto significa reducciones de impuestos sobre las ganancias más altas y sobre las rentas. De esta forma, una nueva y saludable desigualdad volvería a dinamizar las economías avanzadas, entonces afectadas por la *estanflación*, resultado directo de los legados combinados de Keynes y Beveridge, o sea, la intervención anticíclica y la redistribución social, las cuales habían deformado tan desastrosamente el curso normal de la acumulación y el libre mercado. El crecimiento retornaría cuando la estabilidad monetaria y los incentivos esenciales hubiesen sido restituidos.

La ofensiva neoliberal en el poder

La hegemonía de este programa no se realizó de la noche a la mañana. Llevó más o menos una década, los años 70, cuando la mayoría de los gobiernos de la OCDE trataba de aplicar remedios keynesianos a las crisis económicas. Pero, a final de la década, en 1979, surgió la oportunidad. En Inglaterra fue elegido el Gobierno Thatcher, el primer régimen de un país capitalista avanzado públicamente empeñado en poner en práctica un programa neoliberal. Un año después, en 1980, Reagan llegó a la presidencia de los Estados Unidos. En 1982, Kohl derrotó al régimen social-liberal de Helmut Schmidt en Alemania. En 1983, en Dinamarca, Estado modelo del bienestar escandinavo, cayó bajo el control de una coalición clara de derecha el Gobierno de Schluter. En seguida, casi todos los países del norte de Europa Occidental, con excepción de Suecia y de Austria, también viraron a derecha. A partir de ahí, la onda de derechización de esos años da un fundamento político para salir de la crisis económica del período. En 1978, la *segunda Guerra Fría* se agravó con la intervención soviética en Afganistán y la decisión norteamericana de incrementar una nueva generación de cohetes nucleares en Europa Occidental. El ideario de neoliberalismo había incluido siempre, como un componente central, el

anticomunismo más intransigente de todas las corrientes capitalistas de posguerra. El nuevo combate contra el imperio del mal —la servidumbre humana más completa a los ojos de Hayek— inevitablemente fortaleció el poder de atracción del neoliberalismo político, consolidando el predominio de una nueva derecha en Europa y en América del Norte. Los años 80 vieron el triunfo más o menos incontrastado de la ideología neoliberal en esta región del capitalismo avanzado.

Ahora bien, ¿qué hicieron, en la práctica, los gobiernos neoliberales del período? El modelo inglés fue, al mismo tiempo, el pionero y el más puro. Los gobiernos Thatcher contrajeron la emisión monetaria, elevaron las tasas de interés, bajaron drásticamente los impuestos sobre los ingresos altos, abolieron los controles sobre los flujos financieros, crearon niveles de desempleo masivos, aplastaron huelgas, impusieron una nueva legislación anti-sindical y cortaron los gastos sociales. Y finalmente —ésta fue una medida sorprendentemente tardía—, se lanzaron a un amplio programa de privatización, comenzando con la vivienda pública y pasando en seguida a industrias básicas como el acero, la electricidad, el petróleo, el gas y el agua. Este paquete de medidas fue el más sistemático y ambicioso de todas las experiencias neoliberales en los países del capitalismo avanzado.

La variante norteamericana era bien distinta. En Estados Unidos, donde casi no existía un Estado de Bienestar del tipo europeo, la prioridad neoliberal era más la competencia militar con la Unión Soviética, concebida como una estrategia para quebrar la economía soviética y, por esa vía, derrumbar el régimen comunista en Rusia. Se debe resaltar que, en la política interna, Reagan también redujo los impuestos en favor de los ricos, elevó las tasas de interés y aplastó la única huelga seria de su gestión. Pero, decididamente, no respetó la disciplina presupuestaria; al contrario, se lanzó en una carrera armamentista sin precedentes, comprometiendo gastos militares enormes que crearon un déficit público mucho mayor que cualquier otro presidente de la historia norteamericana. Pero ese recurso a un keynesianismo militar disfrazado, decisivo para una recuperación de las economías capitalistas de Europa Occidental y de América del Norte, no fue imitado. Sólo Estados Unidos, a causa de su peso en la economía mundial, podían darse el lujo de un déficit masivo en la balanza de pagos que resultó de tal política.

En el continente europeo, los gobiernos de derecha de este período —a menudo de perfil católico— practicaron en general un neoliberalismo más cauteloso y matizado que las potencias anglosajonas, manteniendo el énfasis en la disciplina monetaria y en las reformas fiscales, más que en los cortes drásticos de los gastos sociales o en enfrentamientos deliberados con los sindicatos. Con todo, la distancia entre estas políticas y la de la socialdemocracia de los anteriores gobiernos era grande. Y mientras la mayoría de los países de norte de Europa elegía gobiernos de derecha empeñados en distintas versiones del neoliberalismo, en el sur del continente —territorio de De Gaulle, Franco, Salazar, Fanfani, Papadopoulos, etc.—, previamente una región mucho más conservadora políticamente, llegaban al poder, por primera vez, gobiernos de izquierda, llamados euro-socialistas: Mitterrand en Francia, González en España, Soares en Portugal, Craxi en Italia, Papandreu en Grecia. Todos se presentaban como una alternativa progresista, basada en movimientos obreros o populares, contrastando con la línea reaccionaria de los gobiernos de Reagan, Thatcher, Khol y otros del norte de Europa. No hay duda, en efecto, de que

por lo menos Mitterrand y Papandreu, en Francia y en Grecia, se esforzaron genuinamente en realizar una política de deflación y redistribución, de pleno empleo y de protección social. Fue una tentativa de crear un equivalente en el sur de Europa de lo que había sido la socialdemocracia de posguerra en el norte del continente, en sus años de oro. Pero el proyecto fracasó, y ya en 1982 y 1983 el Gobierno socialista en Francia se vio forzado, por los mercados financieros internacionales, a cambiar su curso dramáticamente y reorientarse para hacer una política mucho más próxima a la ortodoxia neoliberal, con prioridad para la estabilidad monetaria, la contención presupuestaria, las concesiones fiscales a los capitalista y el abandono del pleno empleo. Al final de la década, el nivel de desempleo en Francia era más alto que en la Inglaterra conservadora, como Thatcher se jactaba en enseñar. En España, el Gobierno de González jamás trató de realizar un política keynesiana o redistributiva. Al contrario, desde el inicio el régimen del partido en el poder se mostró firmemente monetarista en su política económica: gran amigo del capital financiero, favorable al principio de la privatización y sereno cuando el desempleo en España alcanzó rápidamente el récord europeo de 20% de la población activa.

En cuanto a ello, en otro extremo del mundo, en Australia y Nueva Zelanda, el mismo patrón asumió proporciones verdaderamente dramáticas. Sucesivos gobiernos laboristas sobrepasaron a los conservadores locales de derecha con programas de un neoliberalismo radical —en Nueva Zelanda, probablemente es el ejemplo más extremo de todo el mundo capitalista avanzado, desmontando el Estado de Bienestar mucho más completa y ferozmente que Thatcher en Inglaterra—.

Alcances y límites del programa neoliberal

Lo que demostraban estas experiencias era la hegemonía alcanzada por el neoliberalismo como ideología. En un principio, solamente gobiernos explícitamente de derecha radical se atrevían a poner en práctica políticas neoliberales; después, cualquier gobierno, inclusive los que se autoproclamaban y se acreditaban como de izquierda, podían rivalizar con ellos en celo neoliberal. El neoliberalismo había comenzado tomando a la socialdemocracia como su enemiga central, en países de capitalismo avanzado, provocando una hostilidad recíproca por parte de la socialdemocracia. Después, los gobiernos socialdemócratas se mostraron más resueltos en aplicar políticas neoliberales. No en toda la socialdemocracia: al final de los años 80, Suecia y Austria aún resistían la onda neoliberal de Europa. Y fuera del continente europeo, Japón continuaba también exento de cualquier tentación neoliberal. Pero, en los demás países de la OCDE, las ideas de la Sociedad de Mont Pèlerin habían triunfado plenamente. Cabría preguntarse ahora cuál era la validación efectiva de la hegemonía neoliberal en el mundo capitalista avanzado, por lo menos durante los años 80. ¿Cumplió o no sus promesas? Veamos un panorama de conjunto.

La prioridad más inmediata del neoliberalismo era detener la inflación de los años 70. En ese aspecto, su éxito fue innegable. En el conjunto de los países de la OCDE, la tasa de inflación cayó de 8,8% a 5,2% entre los años 70 y 80, y la tendencia a la baja continúa en los años 90. La deflación, a su vez, debía ser la condición para la recuperación de las ganancias. También en este sentido, el neoliberalismo obtuvo

éxitos reales. Si, en los años 70, la tasa de ganancia en la industria de los países de la OCDE cayó cerca de 4,2%, en los años 80 aumentó 4,7%. Esa recuperación fue aún más impresionante considerando Europa Occidental como un todo: de 5,4 puntos negativos pasó a 5,3 puntos positivos. La razón principal de esa transformación fue, sin duda, la derrota del movimiento sindical, expresada en la caída dramática de número de huelgas durante los años 80 y en la notable contención de los salarios. Esta nueva postura sindical, mucho más moderada, a su vez era en gran medida el producto de un tercer éxito del neoliberalismo, o sea, el crecimiento de las tasas de desempleo, concebido como un mecanismo natural y necesario de cualquier economía de mercado eficiente. La tasa media de desempleo en los países de la OCDE, que había sido de alrededor de 4% en los años 70, al menos se duplicó en la década del 80. También fue este un resultado satisfactorio. Finalmente, el grado de desigualdad —otro objetivo sumamente importante para el neoliberalismo— aumentó significativamente en el conjunto de los países de la OCDE: la tributación de los salarios más altos cayó un 20% a mediados de los años 80 y los valores de la bolsa aumentaron cuatro veces más rápidamente que los salarios.

En todos estos aspectos —deflación, ganancias, desempleo y salarios— podemos decir que el programa neoliberal se mostró realista y obtuvo éxito. Pero, a final de cuentas, todas estas medidas habían sido concebidas como medios para alcanzar un fin histórico, o sea, la reanimación del capitalismo avanzado mundial, restaurando altas tasas de crecimiento estables, como existían antes de la crisis de los años 70. En este aspecto, sin embargo, el cuadro se mostró absolutamente decepcionante. Entre los años 70 y 80 no hubo ningún cambio significativo en la tasa media de crecimiento, muy baja en los países de la OCDE. De los ritmos presentados durante la onda larga expansiva, en los años 50 y 60, sólo queda un recuerdo lejano.

¿Cuál es la razón de esta paradoja? Sin ninguna duda, el hecho de que —a pesar de todas las nuevas condiciones institucionales creadas en favor de capital— la tasa de acumulación, o sea, la inversión efectiva en el parque de equipamientos productivos, apenas si creció en los años 80, y cayó en relación a sus niveles —ya medios— de los años 70. En el conjunto de los países del capitalismo avanzado, las cifras son de un incremento anual de 5,5% en los años 60; 3,6% en los 70 y sólo 2,9% en los 80. Una curva absolutamente descendente.

Cabe preguntarse aún por qué la recuperación de las ganancias no condujo a una recuperación de la inversión. Esencialmente, puede decirse, porque la desregulación financiera, que fue un elemento tan importante en el programa neoliberal, creó condiciones mucho más propicias para la inversión especulativa que para la productiva.

Los años 80 asistieron a una verdadera explosión de los mercados cambiarios internacionales, cuyas transacciones puramente monetarias terminan por reducir el comercio mundial de mercancías reales. El peso de las operaciones puramente parasitarias tuvo un incremento vertiginoso en estos años. Por otro lado —y este fue, digamos, el fracaso de neoliberalismo—, el peso de Estado de Bienestar no disminuyó mucho, a pesar de todas las medidas tomadas para contener los gastos sociales. Aunque el crecimiento de la proporción del PNB consumido por el Estado fue notablemente desacelerado, la proporción absoluta no cayó, sino aumentó, de más o menos 46% a 48% del PNB medio de los países de la OCDE durante los años

80. Dos razones básicas explican esta paradoja: el aumento de los gastos sociales con el desempleo, que costaron billones al Estado, y el aumento demográfico de los jubilados en la población, que condujo al Estado a gastar otros tantos billones en pensiones.

Por fin, irónicamente, cuando el capitalismo avanzado entró de nuevo en una profunda recesión, en 1991, la deuda pública de casi todos los países occidentales comenzó a reasumir dimensiones alarmantes, inclusive en Inglaterra y Estados Unidos, en tanto que el endeudamiento privado de las familias y de las empresas llegaban a niveles sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Actualmente, con la recesión de los primeros años de la década de los 90, todos los índices económicos se tornaron mucho más sombríos en los países de la OCDE, donde hoy la desocupación alcanza a los 38 millones de personas, aproximadamente dos veces la población actual de Escandinavia. En estas condiciones de crisis tan aguda, era lógico esperar una fuerte reacción contra el neoliberalismo en los años 90. ¿Tuvo lugar? Al contrario, por extraño que parezca, el neoliberalismo ganó un segundo aliento, por lo menos en su tierra natal, Europa. No solamente el *thatcherismo* sobrevivió a la propia Thatcher, con la victoria de Major en las elecciones de 1992 en Inglaterra. En Suecia, la socialdemocracia, que había resistido el embate neoliberal en los años 80, fue derrotada por un frente unido de la derecha en 1991. El socialismo francés salió bastante desgastado de las elecciones de 1993. En Italia, Berlusconi —una suerte de Reagan italiano— llegó al poder al frente de una coalición en la cual uno de los integrantes era hasta hace poco un partido oficialmente fascista. En Alemania, el gobierno de Kohl probablemente continuará en el poder. En España, la derecha está en las puertas del poder.

El segundo aliento de los gobiernos neoliberales

Pero más allá de estos éxitos electorales, el proyecto neoliberal continúa demostrando una vitalidad impresionante. Su dinamismo no está aún agotado, como puede verse en la nueva ola de privatizaciones en países hace poco bastante resistentes a ellas, como Alemania, Austria e Italia. La hegemonía neoliberal se expresa igualmente en el comportamiento de partidos y gobiernos que formalmente se definen como sus opositores. La primera prioridad de presidente Clinton, en Estados Unidos, fue reducir el déficit presupuestario, y la segunda fue adoptar una legislación draconiana y regresiva contra la delincuencia, lema principal también del nuevo liderazgo laborista en Inglaterra. La agenda política sigue estando dictada por los parámetros del neoliberalismo, aún cuando su momento de actuación económica parece ampliamente estéril o desastroso. ¿Cómo explicar este segundo aliento en el mundo capitalista avanzado? Una de sus razones fundamentales fue claramente la victoria del neoliberalismo en otra área del mundo, o sea, la caída del comunismo en Europa Oriental y en la Unión Soviética, entre 1989 y 1991, exactamente en el momento en que los límites de neoliberalismo en el propio Occidente se tornaban cada vez más obvios. La victoria de Occidente en la guerra fría, con el colapso de su adversario comunista, no fue el triunfo de cualquier capitalismo, sino del tipo específico liderado y simbolizado por Reagan y Thatcher en los años 80. Los nuevos

arquitectos de las economías poscomunistas en el Este, gente como Balcerovicz en Polonia, Gaidar en Rusia, Claus en la República Checa, eran y son seguidores convictos de Hayek y Friedman, con un menosprecio total por el keynesianismo y por el Estado del Bienestar, por la economía mixta y, en general, por todo el modelo dominante del capitalismo occidental de período de posguerra. Estos liderazgos políticos preconizan y realizan privatizaciones mucho más amplias y rápidas de las que se habían hecho en Occidente. Para sanear sus economías, promueven caídas de la producción infinitamente más drásticas de las que se ensayaron en Occidente. Y promueven grados de desigualdad –sobre todo de empobrecimiento de la mayor parte de la población– mucho más brutales de los que se han visto en los países de Occidente.

No hay neoliberales más intransigentes en el mundo que los reformadores del Este. Dos años atrás, Vaclav Klaus, primer ministro de la República Checa, atacó públicamente al presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos del Gobierno Reagan, Alan Greenspan, acusándolo de demostrar una debilidad lamentable en su política monetaria. En un artículo para la revista *The Economist*, Claus fue incisivo: “El sistema social de Europa Occidental está demasiado amarrado por reglas y por un control excesivo. El Estado de Bienestar, con todas sus generosas transferencias de pagos desligadas de todo criterio, de esfuerzos o de méritos, destruyó la moralidad básica del trabajo y el sentido de la responsabilidad individual. Hay excesiva protección a la burocracia. Debe decirse que la revolución thatcheriana, o sea, antikeynesiana o liberal, apareció (con una apreciación positiva) en medio del camino de Europa Occidental, y es preciso completarla”. Bien entendido, este tipo de extremismo neoliberal, por influyente que sea en los países poscomunistas, también desencadenó una reacción popular, como se puede ver en las últimas elecciones en Polonia, Hungría y Lituania, donde partidos ex comunistas ganaron y ahora gobiernan de nuevo sus países. Pero, en la práctica, sus políticas de gobierno no se distinguen mucho de la de sus adversarios declaradamente neoliberales. La deflación, el desmantelamiento de los servicios públicos, las privatizaciones, el crecimiento de capital corrupto y la polarización siguen, un poco menos rápidamente, por el mismo rumbo. Una analogía con el eurosocialismo del sur de Europa se hace evidente. En ambos casos, se trata de una variante mansa –al menos en el discurso, no siempre en las acciones– de un paradigma neoliberal común a la derecha y a la izquierda oficial. El dinamismo continuado del neoliberalismo como fuerza ideológica a escala mundial está sustentado en gran parte, hoy, por este “efecto de demostración” del mundo postsoviético. Los neoliberales pueden ufanarse de estar frente a una transformación socioeconómica gigantesca, que va a perdurar por décadas.

América Latina, escenario de experimentación

El impacto de triunfo neoliberal en el Este europeo tardó en sentirse en otras partes del globo, particularmente, podría decirse, en América Latina, que hoy en día se convierte en el tercer gran escenario de experimentaciones neoliberales. De hecho, aunque en su conjunto le ha llegado la hora de las

privatizaciones masivas, después de los países de la OCDE y de la antigua Unión Soviética, genealógicamente este continente fue testigo de la primera experiencia neoliberal sistemática del mundo, Me refiero, está claro, a Chile bajo la dictadura de Pinochet. Aquel régimen tiene el mérito de haber sido el verdadero pionero del ciclo neoliberal de la historia contemporánea. El Chile de Pinochet comenzó sus programas de manera dura: desregulación, desempleo masivo, represión sindical, redistribución de la renta en favor de los ricos, privatización de los bienes públicos. Todo esto comenzó en Chile, casi una década antes de Thatcher. En Chile, naturalmente, la inspiración teórica de la experiencia pinochetista era más norteamericana que austríaca: Friedman, y no Hayek, como era de esperarse en las Américas. Pero es de notar que la experiencia chilena de los años 70 interesó muchísimo a ciertos consejeros británicos importantes para Thatcher, y que siempre existieron excelentes relaciones entre los dos regímenes en los años 80. El neoliberalismo chileno, bien entendido, presuponia la abolición de la democracia y la instalación de una de las más crueles dictaduras de la posguerra. Pero la democracia en sí misma —como explicaba incansablemente Hayek— jamás había sido un valor central del neoliberalismo. La libertad y la democracia, explicaba Hayek, podían tornarse fácilmente incompatibles, si la mayoría democrática decidiese interferir en los derechos incodicionales de cada agente económico de disponer de su renta y sus propiedades como quisiese. En ese sentido, Friedman y Hayek podían ver con admiración la experiencia chilena, sin ninguna inconsistencia intelectual o compromiso de principios. Pero esa admiración fue realmente merecida, dado que —a diferencia de las economías del capitalismo avanzado bajo los regímenes neoliberales en los 80—, la economía chilena creció a un ritmo bastante rápido bajo el régimen de Pinochet, como lo sigue haciendo con la continuidad político-económica de los gobiernos pospinochetistas de los últimos años.

Si Chile fue, en este sentido, una experiencia piloto para el nuevo neoliberalismo en los países avanzados de Occidente, América Latina también proveyó la experiencia piloto para el neoliberalismo del Este postsoviético. Aquí me refiero a Bolivia, donde, en 1985, Jeffrey Sachs perfeccionó su tratamiento de shock, aplicado más tarde en Polonia y en Rusia, pero preparado originariamente para el gobierno de Banzer, después aplicado imperturbablemente por Víctor Paz Estenseoro, cuando sorprendentemente este último fue electo presidente en lugar de Banzer. En Bolivia, la puesta en marcha de la experiencia no tenía necesidad de quebrar a un movimiento obrero poderoso, como en Chile, sino parar la hiperinflación. El régimen que adoptó el plan de Sachs no era una dictadura, sino el heredero del partido populista que había hecho la revolución social de 1952. En otras palabras, América Latina también inició una variante neoliberal “progresista”, difundida más tarde en el sur de Europa, en los años del eurosocialismo. Pero Chile y Bolivia eran experiencias aisladas hasta finales de los años 80.

El viraje continental en dirección al neoliberalismo no comenzó antes de la presidencia de Salinas, en México, en 1988, seguido de la llegada al poder de Menem, en Argentina, en 1989, de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez

en el mismo año, en Venezuela, y de la elección de Fujimori en Perú, en el 90. Ninguno de esos gobernantes confesó al pueblo, antes de ser electo, lo que efectivamente hizo después. Menem, Carlos Andrés y Fujimori, además, prometieron exactamente lo opuesto a las políticas radicalmente antipopulistas que implementaron en los años 90. Y Salinas, notoriamente, no fue siquiera electo, sino que robó fraudulentamente las elecciones.

De las cuatro experiencias vividas en esta década, podemos decir que tres registraron éxitos impresionante a corto plazo –México, Argentina y Perú– y una fracasó: Venezuela. La diferencia es significativa. La condición política de la deflación, de la desregulación, del desempleo, de la privatización de las economías mexicana, argentina y peruana fue una concentración del poder ejecutivo formidable: algo que siempre existió en México, un régimen de partido único, pero Menem y Fujimori tuvieron que innovar con una legislación de emergencia, autogolpes y reforma de la Constitución. Esta dosis de autoritarismo político no fue factible en Venezuela, con su democracia partidaria más continua y sólida que en cualquier otro país de América del Sur, el único que escapó de las dictaduras militares y regímenes oligárquicos desde los años 50: de ahí el colapso de la segunda presidencia de Carlos Andrés.

Pero sería arriesgado concluir que solamente regímenes autoritarios pueden imponer con éxito políticas neoliberales en América Latina. El caso de Bolivia, donde todos los gobiernos electos después de 1985, tanto el de Paz Zamora como el de Sánchez Losada, continuaron con la misma línea, esta ahí para comprobarlo. La lección que deja la larga experiencia boliviana es ésta: hay un equivalente funcional al trauma de la dictadura militar como mecanismo para inducir democrática y no coercitivamente a un pueblo a aceptar las más drásticas políticas neoliberales. Este equivalente es la hiperinflación. Sus consecuencias son muy parecidas. Recuerdo una conversación en Río de Janeiro en 1987, cuando era consultor de un equipo de Banco Mundial y hacía un análisis comparativo alrededor de 24 países del Sur, en lo relativo a políticas económicas. Un amigo neoliberal del equipo, sumamente inteligente, economista destacado, gran admirador de la experiencia chilena bajo el régimen de Pinochet, me confió que el problema crítico del Brasil durante la presidencia de Sarney no era una tasa de inflación demasiado alta –como creía la mayoría de los funcionarios del Banco Mundial–, sino una tasa de inflación demasiado baja. “Esperemos que los diques se rompan”, decía. “Aquí precisamos una hiperinflación para condicionar al pueblo a aceptar la drástica medicina deflacionaria que falta en este país”. Después, como sabemos, la hiperinflación llegó al Brasil, y las consecuencias prometen, o amenazan –como se quiera– confirmar la sagacidad de este neoliberal local.

Un balance provisional

La pregunta que queda abierta es si el neoliberalismo encontrará más o menos resistencia a su implementación duradera, en América Latina, de la que encontró en Europa Occidental y en la antigua URSS. ¿Sería el populismo –o el laborismo– latinoamericano un obstáculo más fácil o más difícil para la

realización de los planes neoliberales que la socialdemocracia reformista o el comunismo? No voy a entrar en esta cuestión, otros pueden juzgarla mejor que yo. Sin duda, la respuesta va a depender también del destino del neoliberalismo fuera de América Latina, donde continúa avanzando en tierras hasta ahora intocadas por su influencia. Actualmente, en Asia, por ejemplo, la economía de India comienza, por primera vez, a ser adaptada al paradigma liberal, y hasta el mismo Japón no está totalmente inmune a las presiones norteamericanas para desregular. La región del capitalismo mundial que presenta más éxitos en los últimos 20 años es también la menos neoliberal, o sea, las economías de extremo oriente –Japón, Corea, Formosa, Singapur, Malasia.– ¿Por cuánto tiempo estos países permanecerán fuera de la influencia del neoliberalismo? Todo lo que podemos decir es que éste es un movimiento ideológico a escala verdaderamente mundial como el capitalismo que jamás se había producido en el pasado. Se trata de un cuerpo de doctrina coherente, autoconsistente, militante, lúcidamente decidido a transformar todo el mundo a su imagen, en su ambición estructural y en su extensión internacional. Algo mucho más parecido al antiguo movimiento comunista, que al liberalismo ecléctico y distendido del siglo pasado.

En ese sentido, cualquier balance actual del neoliberalismo sólo puede ser provisional. Es un movimiento aún inacabado, Por el momento, sin embargo, es posible dar un veredicto sobre su actuación durante casi quince años en los países más ricos del mundo, única área donde sus frutos parecen, podría decirse, maduros. Económicamente, el neoliberalismo fracasó. No consiguió ninguna revitalización básica de capitalismo avanzado. Socialmente, al contrario, ha logrado muchos de sus objetivos, creando sociedades marcadamente desiguales, aunque no tan desestatizadas como querría. Política e ideológicamente, sin embargo, ha logrado un grado de éxito probablemente jamás soñado por sus fundadores, diseminando la simple idea de que no hay alternativas para sus principios; que todos, partidarios u opositores, tienen que adaptarse a sus normas. Probablemente ninguna sabiduría convencional consiguió un predominio tan abarcativo desde principios de siglo como la neoliberal hoy. Este fenómeno se llama hegemonía, aunque, naturalmente, millones de personas no crean en sus recetas y resistan sus regímenes. Pero apenas sabemos cómo prever cuándo y dónde van a surgir. Históricamente, el momento de viraje de una ola es una sorpresa.

Las lecciones del neoliberalismo para la izquierda

He focalizado y enfatizado deliberadamente la fuerza, tanto intelectual como política, del neoliberalismo. O sea, su energía y su intransigencia teórica, su dinamismo estratégico todavía no agotado. Creo que es necesario e imprescindible subrayar estos trazos si queremos combatir eficazmente, a corto y largo plazo, el neoliberalismo. Una de las máximas más importantes de Lenin, de cuya herencia la izquierda en todas partes sigue precisando, fue ésta: jamás subestimar al enemigo. Es peligroso ilusionarse con la idea de que el

neoliberalismo es un fenómeno frágil o anacrónico. Continúa siendo una amenaza activa y muy poderosa, tanto en América Latina como en Europa y en otras partes. Un adversario formidable, victorioso muchas veces en los últimos años, pero no invencible.

Si miramos las perspectivas que podrían emerger más allá del neoliberalismo vigente, buscando orientarnos en la lucha política contra él, no debemos olvidar tres lecciones básicas dadas por el propio neoliberalismo:

Primera lección: no tener ningún miedo de estar contra la corriente política de nuestro tiempo. Hayek, Friedman y sus socios tuvieron el mérito –mérito entendido a los ojos de cualquier burgués inteligente de hoy– de realizar una crítica radical del *statu quo*, cuando hacerlo era muy impopular y perseverar en una postura de oposición marginal durante un largo período, cuando el saber convencional los trataba como a excéntricos o locos, hasta el momento en que las condiciones históricas cambiaron y su oportunidad política llegó.

Segunda lección: no transigir en las ideas, no aceptar ninguna dilución de los principios. Las teorías neoliberales fueron extremas y marcadas por su falta de moderación, una iconoclasia chocante para los bienpensantes de su tiempo. Pero por ello no perdieron eficacia. Al contrario, fue precisamente el radicalismo, la dureza intelectual del temario neoliberal, la que le aseguró una vida tan vigorosa y una influencia tan abrumadora. El neoliberalismo es lo opuesto de un *pensamiento débil*, para usar un término de moda inventado por algunas corrientes posmodernistas para avalar teorías eclécticas y flexibles.

El hecho de que ningún régimen político realizó jamás la totalidad del sueño neoliberal no es una prueba de su ineficacia práctica: al contrario, fue solamente porque la teoría neoliberal era tan intransigente, que gobiernos de derecha pudieran llegar a políticas tan drásticas: la teoría neoliberal proveía, en sus principios, una especie de temario máximo en el que los gobiernos podían elegir los ítems más oportunos, según sus conveniencias coyunturales políticas o administrativas. El maximalismo neoliberal, en este sentido, fue altamente funcional. Proveía un repertorio muy amplio de medidas radicales posibles, ajustables a las circunstancias. Y, al mismo tiempo, demostró el largo alcance de la ideología neoliberal, su capacidad de abarcar todos los aspectos de la sociedad, y así jugar el papel de una visión verdaderamente hegemónica del mundo.

Tercera lección: no aceptar como inmutable ninguna institución establecida. Cuando el neoliberalismo era un fenómeno menospreciado y marginal, durante el gran auge del capitalismo de los años 50 y 60, parecía inconcebible al consenso burgués de aquel tiempo crear desempleo a cerca de 40 millones de personas en los países ricos sin provocar trastornos sociales. Parecía impensable proclamar abiertamente la redistribución de los ingresos de los pobres a los ricos en nombre de valor de la desigualdad; parecía inimaginable privatizar no sólo el petróleo, sino también el agua, el correo, los hospitales, las escuelas, hasta las prisiones. Pero, como sabemos, todo esto se comprobó factible, cuando la correlación de fuerzas cambió con la larga recesión. El mensaje de los neoliberales fue, en este sentido, electrificante en las sociedades capitalista. Ninguna institución, por más consagrada y familiar

que sea, es, en principio, intocable. El paisaje institucional es mucho más maleable de lo que se cree.

Más allá del neoliberalismo

El pensador brasileño-norteamericano Roberto Mangabeira Unger, teorizó desde la izquierda este rasgo histórico, más sistemáticamente que cualquier pensador de la derecha, dándole una fundamentación histórica y filosófica en su libro *Plasticidad y Poder*. Pero este es un bello tema marxista: "Todo lo sólido se desvanece en el aire", proclamó el *Manifiesto Comunista*. Ahora bien, una vez recordadas estas lecciones del neoliberalismo, ¿cómo encarar su superación? ¿Cuáles serían los elementos de una política capaz de barrerlo? El tema es amplio; voy a indicar aquí solamente tres elementos de un posible pos-neoliberalismo.

1. *Los valores*. Tenemos que atacar sólida y agresivamente el terreno de los valores, resaltando el principio de igualdad como el criterio central de cualquier sociedad verdaderamente libre. Igualdad no quiere decir uniformidad, como afirma el neoliberalismo, sino, al contrario, la única auténtica diversidad.

El lema de Marx conserva toda, absolutamente toda, su vigencia pluralista: "A cada uno según sus necesidades, de cada uno según sus capacidades". La diferencia entre los requisitos, los temperamentos, los talentos de las personas, está expresamente grabada en esta concepción clásica de una sociedad igualitaria y justa. ¿Qué significa esto hoy en día? Es una igualación de las posibilidades reales de cada ciudadano de vivir una vida plena, según el patrón que escoja, sin carencias o desventajas debidas a los privilegios de otros, comenzando, bien entendido, con iguales oportunidades de salud, educación, vivienda y trabajo. En cada una de estas áreas, no hay ninguna posibilidad de que el mercado pueda proveer ni siquiera el mínimo requisito de acceso universal a los bienes imprescindibles en cuestión. Solamente una autoridad pública puede garantizar la protección contra la enfermedad, la promoción de conocimientos y de cultura, y la provisión de protección y empleo para todos. Göran Therborn insistió con elocuencia, y yo estoy de acuerdo, en la necesidad de defender el principio del Estado de Bienestar. Pero también lo amplió después a lo que necesitamos dramáticamente en los países latinoamericanos, aunque también en Inglaterra y Suecia: no solamente defender sino extender redes de protección social, no confiando necesariamente su gestión a un Estado centralizado. Para alcanzar ese fin es necesaria una fiscalización absolutamente distinta de la que existe hoy en los países desarrollados o en vías de desarrollo. No es necesario subrayar aquí el escándalo material y moral del sistema impositivo en Brasil o Argentina. Se debe apenas subrayar que, la evasión fiscal por parte de los sectores ricos o meramente acomodados, no es solamente un fenómeno de lo que alguna vez se llamó el Tercer Mundo, sino también y cada vez del propio Primer Mundo. Si no siempre es aconsejable entregar la provisión de los servicios públicos al Estado centralizado, la extracción de los recursos necesarios para financiar estos servicios, esta sí, es una función intransferible del Estado. Pero, para esto, se precisa un Estado fuerte y disciplinado, capaz de romper la resistencia de los privilegiados y bloquear la fuga de los capitales que cualquier reforma tributaria

desencadenaría. Todo discurso antiestatista que ignore esta necesidad, es demagógico.

2. *La propiedad.* La mayor hazaña histórica del neoliberalismo fue ciertamente la privatización de las industrias y los servicios estatales. Aquí se consumó su larga cruzada antisocialista. Paradójicamente, lanzándose a tal proyecto ambicioso, tuvo que inventar nuevos tipos de propiedad privada, como, por ejemplo, los certificados distribuidos gratis a cada ciudadano en la República Checa o Rusia, dándoles derecho a una proporción igual en acciones de las nuevas empresas privadas. Estas operaciones, claro está, van a ser a final de cuentas, una farsa: esas acciones, tan equitativamente distribuidas, son luego adquiridas por especuladores extranjeros o mafiosos locales. Pero, lo que esas operaciones demostrarán, es que no hay ninguna ilegitimidad o inmutabilidad en el patrón tradicional de la propiedad burguesa de nuestros países. Nuevas formas de propiedad popular serán inventadas, formas que separen las funciones de la rígida concentración de poderes en la clásica empresa capitalista de hoy. Este fue otro de los grandes temas en la obra de Mangabeira Unger, y se volvió hoy tema de los trabajos del gran teórico económico marxista estadounidense John Roemer, en una nueva obra cuyo título es *Un futuro para el socialismo*, donde propone un plan institucional, al mismo tiempo audaz y riguroso, induciendo la distribución de dividendos a cada ciudadano, extraídos directamente de las ganancias medias de la empresas privadas, como un primer escalón para una socialización posterior más profunda.

Existe hoy una discusión mucho más rica en los países occidentales sobre este tema: la invención de nuevas formas de propiedad popular, con muchas contribuciones y diversas propuestas. Pero el tema está lejos de ser sólo una preocupación de los países ricos. Al contrario, mucho de la discusión más reciente se desprende directamente de la observación de formas mixtas de empresas colectivas chinas. Las famosas TVES, o sea, las llamadas empresas municipales y de aldeas, que hoy son el motor central del milagro chino, una economía que registra el único crecimiento realmente vertiginoso del mundo contemporáneo. Hay en China formas de propiedad, tanto industrial como agraria, ni privada ni estatal, pero colectiva, ejemplos vivos de una experiencia social creativa que demuestra un dinamismo sin par en el mundo actual.

3. *La democracia.* El neoliberalismo tuvo la audacia de decir abiertamente: la democracia representativa que tenemos no es en sí un valor supremo; al contrario, es un instrumento intrínsecamente falible, que fácilmente puede tornarse excesivo y de hecho lo hace. Su mensaje provocador era: precisamos menos democracia. De ahí, por ejemplo, su insistencia en un Banco Central jurídica —y totalmente— independiente de cualquier gobierno, o sea, de una constitución que prohíbe taxativamente el déficit presupuestario. Aquí también debemos tomar e invertir su lección emancipadora, y pensar que la democracia que tenemos —si la tenemos— no es un ídolo a adorar, como si fuese la perfección final de la libertad humana. Es algo provisorio y defectuoso, que se puede remodelar. El rumbo del cambio debería ser lo opuesto del neoliberalismo: precisamos de más democracia. Esto no quiere decir, está claro, una supuesta simplificación del sistema de voto, aboliendo la representación proporcional en favor de un mecanismo al estilo

norteamericano, como ha sido preconizado, a veces, por distintos estadistas en América Latina. Esta es una propuesta descaradamente reaccionaria, queriendo imponer aquí un sistema tan antidemocrático que, en los propios Estados Unidos, ni siquiera vota en las elecciones la mitad de la población. Tampoco más democracia quiere decir conservar o fortalecer el presidencialismo. Tal vez la peor de las importaciones extranjeras a América Latina históricamente haya sido la servil imitación de la constitución de los Estados Unidos del siglo XVIII, que ahora está siendo imitada por los nuevos gobernantes semicoloniales de Rusia. No, una democracia profunda exige exactamente lo opuesto de este poder plebiscitario. Exige un sistema parlamentario fuerte, basado en partidos disciplinados, con financiamiento público equitativo y sin demagogias cesaristas. Sobre todo, exige una democratización de los medios de comunicación, cuyo monopolio en manos de grupos capitalistas más superconcentrados y prepotentes, es incompatible con cualquier justicia electoral o soberanía democrática real.

En otras palabras, estos tres temas pueden ser traducidos al vocabulario clásico: son las necesarias formas modernas de la libertad, igualdad y –no digamos fraternidad, palabra un tanto sexista– solidaridad. Para realizarlas precisamos un espíritu sin complejos, seguro, agresivo –diría no menos alegremente feroz de lo que fue en su origen el neoliberalismo.– Esto sería lo que un día, tal vez, se llame neosocialismo. Sus símbolos no serán verborrágicos: ni la arrogancia de un águila, ni un burro de lenta sagaciad, ni una paloma de pacífica conciliación. Los símbolos más viejos, aquellos instrumentos de trabajo y de guerra, capaces de martillar o de cosechar, tal vez volverán a ser los más apropiados.

El Rodaballo Año II nº3 / Verano 1995-1996 / Buenos Aires

Versión íntegra de la conferencia dictada en septiembre de 1995 en la facultad de Ciencias Sociales.

4 cartas

Sobre IU y Chiapas

Bajo el título "La dirección de IU se insolidariza con Chiapas", se publica en vuestra revista, en el número 25 de Marzo de este año un artículo en el que se vierten un rosario de imputaciones a "la dirección de IU" del todo gratuitas cuando no afirmaciones absolutamente falsas.

Esta carta de la Secretaría de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida nos sirve de pretexto para reabrir esta sección, a la que tuvimos que renunciar por falta de aportaciones.

Esperamos tener esta vez una mejor acogida.

La sección está abierta a recoger cualquier clase de opiniones de lectores y lectoras, que tengan una extensión razonable.

La carta que publicamos invoca "el derecho de réplica reconocido en nuestra Constitución y práctica obligada en cualquier medio de comunicación que se pretenda democrático".

Queremos manifestar que consideramos este párrafo tan impertinente como innecesario y podemos asegurar a sus autores que no ha afectado en nada a la voluntad de *VIENTO SUR* de publicar su carta.

Acogiéndonos al derecho de réplica reconocido en nuestra Constitución y práctica obligada en cualquier medio de comunicación que se pretenda democrático, os rogamos publicuéis en el plazo más breve posible, las siguientes precisiones:

Efectivamente, el pasado 27 de Enero, el coordinador general de IU, Julio Anguita mantuvo una entrevista en el Palacio de El Pardo con el Presidente de México, Sr. Ernesto Zedillo. Estuvo acompañado por Carlos Carnero, secretario de RR.II. y Política Exterior, y Aurelio Ladrón de Guevara, miembro de la Comisión Internacional y encargado para América Latina. Acerca de esta entrevista habría que precisar lo siguiente:

- que tuvo lugar a petición del Gobierno mexicano, y que la comisión internacional como en otros casos similares, estimó positiva su realización, coincidiendo en ese punto plenamente con la opinión del Coordinador General.*
- que se trataba de una entrevista con marcado carácter formal y protocolario, y que su duración era muy limitada (30 minutos aprox.)*
- que a pesar de la limitación del tiempo se trataron todos los temas que*

consideramos fundamentales en la actual situación mejicana, y que el coordinador general de IU planteó abiertamente nuestros puntos de vista sobre los mismos:

- *necesidad de profundizar la democratización de la sociedad mejicana (denuncias del PRD de fraudes electorales y falta de garantías democráticas).*
- *necesidad de una salida pacífica y negociada al conflicto de Chiapas, respaldando el éxito de la primera mesa de negociaciones entre el Gobierno y el EZLN, y conminando a que se avance en esa dirección y se sorteen los obstáculos que en la actualidad existían.*
- *preocupación por la violación de los derechos humanos, tal y como denuncian no sólo nuestros compañeros del PRD, sino el reciente informe de Amnistía Internacional (durante la entrevista se trató con especial atención la masacre de Guerrero, departamento en el que fueron torturados y asesinados 17 campesinos que asistían a un acto del PRD, y se hizo especial hincapié en el informe de AI, "Violaciones de los Derechos Humanos en México. El reto de los 90")*
- *nuestro apoyo a la firma del tratado de cooperación entre la UE y Méjico, condicionado como siempre es nuestra posición en el Parlamento Europeo a la aplicación de la cláusula de respeto a los DDHH. (Precisamente Carlos Carnero, eurodiputado y responsable de Política Exterior de IU es el ponente de la Subcomisión de Derechos Humanos del informe sobre la inclusión del respeto de los principios democráticos y de los DDHH en los acuerdos entre la UE y terceros países).*
- *nuestro ofrecimiento a contribuir en la solución democrática, pacífica y negociada en los conflictos reseñados, y respaldar las acciones que desde el gobierno mejicano se tomen en esa dirección.*

De igual modo, un grupo de militantes de IU que participan asiduamente en la Plataforma de Solidaridad con Chiapas

solicitaron una reunión con el coordinador general de IU, Julio Anguita (reunión que se traslada a la Comisión Internacional) a raíz de tener conocimiento de su previsto encuentro con Zedillo. En esa reunión, trasladaron sus opiniones (que fueron globalmente compartidas por los miembros presentes de la Comisión Internacional), sobre los puntos que sería necesario tratar en la entrevista con el mandatario mexicano.

Es rotundamente falso que en esa entrevista, a la que se hace referencia en el artículo, Carlos Carnero asegurara que "sólo conocía la existencia de un preso político en México", como falso es también el que uno de los "colaboradores de Carnero no consideraba adecuada la concentración ante la Embajada de México", (si manifestó que éste como cualquier otro tema debía ser discutido y no descartó la posibilidad de que la concentración no fuera oportuna), como falso es también que la concentración se solicitara antes de que la entrevista con Zedillo estuviera formalizada.

En cuanto a la comunicación al Gobierno Civil de Madrid solicitando la concentración, es necesario señalar con rotundidad que es rigurosamente falso que "IU se desmarcara de la misma" como se asegura en el artículo, ya que Izquierda Unida nunca la convocó.

No sería preciso explicar que IU es una organización plenamente democrática, sus líneas políticas y de actuación se deciden en sus órganos democráticamente elegidos, y que nadie, a título personal, puede suplantar a éstos, utilizando las siglas de la organización sin consultar con ellos (y en el caso de la comunicación a la Delegación de Gobierno Civil para la mencionada concentración, no se consultó con nadie, ni con la Comisión Internacional de IU, ni con la Secretaría Federal de Paz y Solidaridad, ni con la Presidencia de IU Federal, ni con la Presidencia IU-Madrid, ni con el Área de Paz y Solidaridad de Madrid,...). Calificar este despropósito de "error formal",

como se señala en el citado artículo, es desconocer las más elementales normas democráticas por las que se rige cualquier organización. Por tanto, para IU no había otra opción que desautorizar dicha comunicación.

Obviamente el que por este motivo la concentración "estuviera a punto de ilegalizarse", es algo que escapa por completo a la responsabilidad de esta organización, y atañe íntegramente a quien o quienes suplantaron el nombre de ésta en la solicitud.

No resulta pues en absoluto aceptable ni el título del artículo, "La dirección de IU se insolidariza con Chiapas", ni los contenidos de la cabecera "Estos hechos insolidarios son particularmente graves en una formación política que presume de representar a toda la auténtica izquierda y de encarnar una nueva manera de hacer política", y especialmente resulta inaceptable por insultante el párrafo final, consecuencia de dar por ciertas las falsedades ya referidas. "Cuando dirigentes principales de una fuerza política priorizan la relación con la parte represora sobre la solidaridad con la parte oprimida están contribuyendo a alejar seriamente al conjunto de esa fuerza política de unos postulados y una práctica realmente de izquierda".

La afirmación resulta tan gratuita y tan distante de la realidad que nos resulta cuando menos imprudente que los firmantes (entre los que lamentablemente se encuentran miembros de la dirección de esta organización), se permitan exigir "la rectificación de estos comportamientos en el futuro inmediato".

Por último sólo queda afirmar con rotundidad que ni desde la Comisión Internacional de IU, ni desde la Coordinación General, se ha dejado en ningún momento de denunciar la represión que padecen importantes sectores del pueblo mejicano, de reclamar la democratización del régimen priista y de exigir el pleno respeto a los derechos humanos, así como la aplicación de la

cláusula de condicionalidad a cualquier acuerdo de cooperación que se pueda suscribir entre este país y la Unión Europea. Pero al mismo tiempo, reafirmamos nuestro compromiso a contribuir en la solución democrática, pacífica y negociada de los conflictos, y respaldar las acciones que desde el Gobierno mejicano se tomen en esa dirección.

Más lamentable que los mismos contenidos del artículo (opiniones legítimas y respetables en todo caso, aunque no debiera olvidarse que gran parte de las críticas y descalificaciones que se vierten se refieren a hechos contrastables), nos resulta el que desde una revista que se ubica en el campo de la izquierda alternativa se editorialice sobre el mismo afirmando que se trata de "una desgraciada e insolidaria actuación de la dirección de IU respecto a Chiapas" (pag. 5), sin haberse tomado la molestia de contrastar con un mínimo de rigor los hechos que se señalan.

Aurelio Ladrón de Guevara

En nombre de la Secretaría de RR.II. y Política Exterior de IU

II ENCUENTROS DE VERANO

VIENTO SUR

“ABRIENDO ESPACIOS ALTERNATIVOS” *Diálogos cruzados entre gentes insumisas*

19, 20, 21 de julio
Residencia Antonio Gistau
Dehesa de la Villa
Madrid

Temas para plenario

En busca de alternativas a la globalización
Construyamos el espacio del Espacio roji-verde-violeta

Talleres donde elegir

Pobreza y pobrezas bajo la mundialización capitalista
La revuelta francesa y el futuro del sindicalismo. Primer aviso a Maastricht
Reflexiones desde el feminismo
Vías de paz y caminos de negociación para Euskadi
Manual telemático para rebeldes
Cultura, Comunicación y Poder en la aldea global
Sesión de noche para gentes cinéfilas contestarias
Después del diluvio, la Europa del Este poscomunista

Y a ratos

Encuentros minifutboleros de máxima rivalidad
Unos largos piscineros, recomendables en todas las edades
Músicas multiétnicas y verbeneras para una noche de verano

Empezaremos

El viernes: recepción a partir de las 19 h. hasta que lleguéis,
esa noche comenzará el primer taller,
el sábado de buena mañana continuaremos y así
hasta el domingo con la comida, despedidas y adioses.

El lugar

La Residencia Antonio Gistau, junto a la Universidad Antonio Nebrija,
es un edificio bastante bien climatizado.
Está en plena Dehesa de la Villa, ecosistema mediterráneo que heroicamente resiste, como puede y le dejamos, en la susodicha Villa de Madrid,
lugar de solaz de las gentes del foro
con chiringos a la fresca para tertulias noctámbulas.

En la madrileña calle de Pirineos , en el número 55 para más señas.

Hay gentes que lo conocen como
el Colegio de Huérfanos de Ferrovianos.
Dispone, además de un buen entorno, de cafetería,
buenas habitaciones e instalaciones,
incluyendo las deportivas, piscina y
espaciosas salas de reunión. Por cierto,
y pese a lo poco ecológico de la cuestión, en la que se
celebrarán los plenarios hay aire acondicionado.

Precio: 7.500 ptas.

pero tienes la oportunidad de hacer una aportación mayor
para echar una mano a bolsillos parados y/o juveniles.

Si puedes, hazlo, no te cortes.

Pretendemos que el fondo de solidaridad funcione,
al menos tan bien como el del pasado año.

Incluye el alojamiento de la noche del viernes (no la cena),
alojamiento, desayuno, comida, cena, fiesta del sábado,
desayuno y comida del domingo, dossier, uso de las instalaciones
deportivas, materiales informáticos.

Formas de pago

*Transferencia bancaria a la Fundación *Viento Sur*
Bancaja, C/ Caballero de Gracia 28, 28013 Madrid
Entidad: 2077, Oficina: 0320, DC: 33, Cuenta: 3100822631

*Giro Postal o en Efectivo a Fundación *Viento Sur*
C/ Embajadores 24, Esc. Dcha - 1º Izda. Madrid 28012

En cualquiera de los casos

enviada a la dirección de *Viento Sur*
la fotocopia del resguardo junto los nombres completos,
dirección y teléfono de la/las personas inscritas
antes del 7 de julio (San Fermín)

Un ruego final

Hay muchas plazas, pero limitadas.
Quienes penséis inscribiros hacedlo lo antes posible
(mañana mismo si podéis),
ello nos facilita la labor y la reserva de tu plaza.

Para cualquier información:

VIENTO SUR, Tfnos. (91) 5307538, (91) 5279651 y Fax (91) 5279652.

*Si te pierdes el día 19 de julio camino de los Encuentros: Residencia Antonio Gistau,
C/ Pirineos 55, Madrid, Tno: 908 11 35 88*





Apellidos Nombre

Calle Nº Escalera Piso Puerta

Localidad Provincia C.P.

Otras Indicaciones

SUSCRIPCION NUEVA SUSCRIPCION RENOVADA CODIGO AÑO ANTERIOR



ESTADO ENVIO COMO IMPRESO 3.500 pta EXTRANJERO ENVIO COMO IMPRESO 4.500 pta (35 \$)

ESPAÑOL ENVIO COMO CARTA 4.300 pta ENVIO COMO CARTA 7.000 pta (55 \$)



ENTREGA EN MANO EFECTIVO

ENVIO POR CORREO DOMICILIACION BANCARIA

DOMICILIACION BANCARIA - AUTORIZACION DE PAGO

Apellidos Nombre

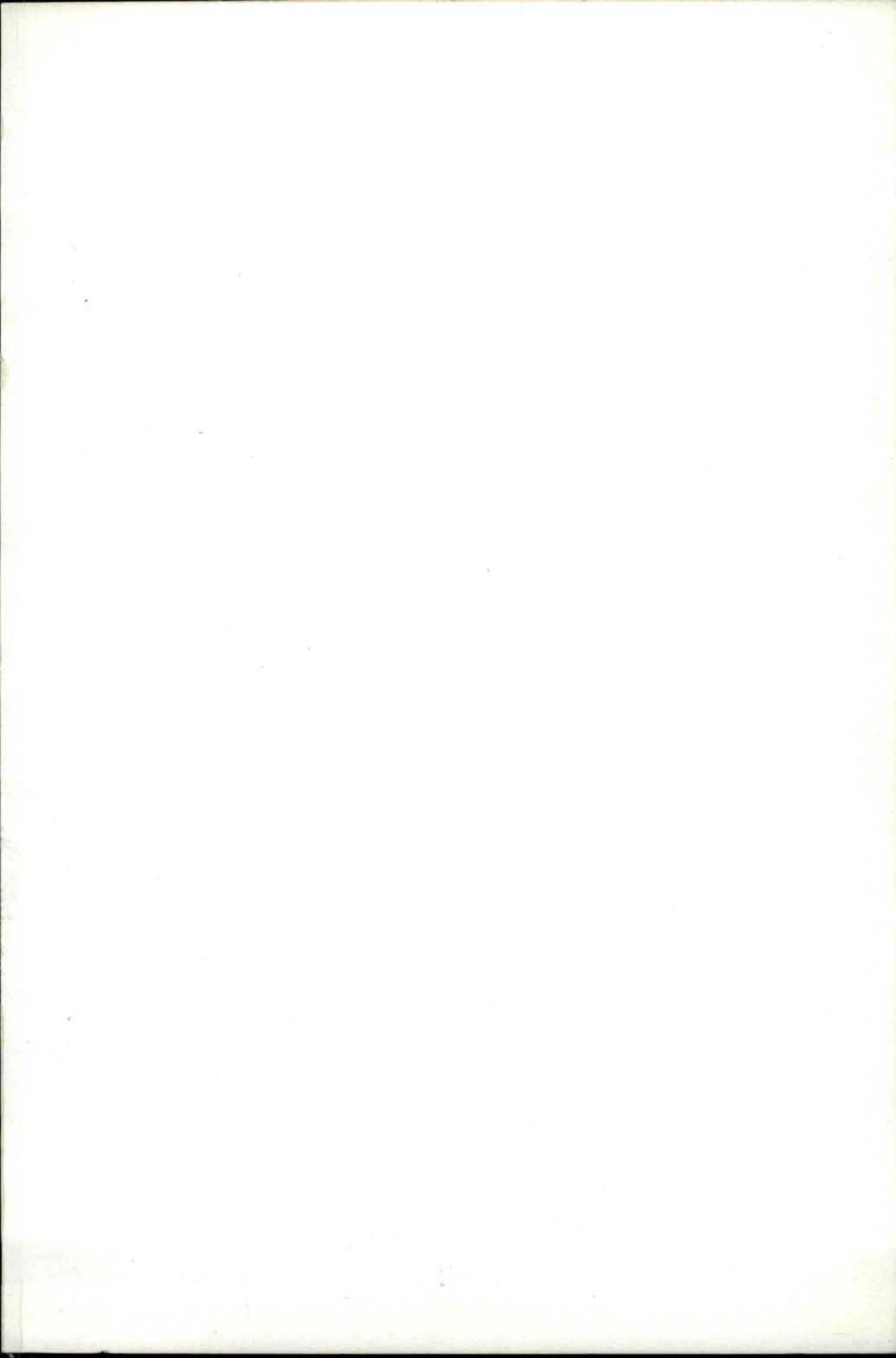
Calle Nº Escalera Piso Puerta

Localidad Provincia C.P.

ENTIDAD				OFICINA				CONTROL		NUM. CUENTA												
<input type="text"/>																						

Fecha:

Firma:





*“... un viento sur que lleva
colmillos, girasoles, alfabetos
y una pila de Volta con avispas ahogadas”.*

Federico García Lorca Poeta en Nueva York